

La Serena, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que se instruyó esta causa Rol N° 10-2010 (Antofagasta), para investigar el delito de Detención Ilegal, cometido en contra de Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, y determinar la responsabilidad penal que en ese hecho correspondió a **Luciano Astete Almendras**, cédula nacional de identidad N°2.269.307-7, natural de Antuco, nacido el 7 de noviembre de 1925, 97 años de edad, casado, Teniente Coronel en Retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en calle 10 Norte N°563-B depto. N°41, Viña del Mar.

El proceso se inició por querella criminal por los delitos de homicidio y asociación ilícita cometidos en contra de Jorge Antonio Cerda Albarracín, interpuesto por doña Alicia Lira Matus en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), en contra de los agentes del Estado, que son los integrantes de la Unidad de Carabineros y Ejército de Chile, ambos de la ciudad de Antofagasta, que sin razón alguna le dio muerte, y en contra de todos los que aparezcan responsables, solicitando acogerla a tramitación, decretar auto de procesamiento en su oportunidad y en definitiva aplicar a los responsables el máximo de la pena legal, con costas.

A fojas 176, la Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, doña Beatriz Pedrals García de Cortázar, interpuso requerimiento por el delito de homicidio simple o calificado cometido en contra de Carlos Desiderio Quiroga Rojas, y la concurrencia de asociación ilícita entre los posibles responsables, con el objeto que se realicen las diligencias conducentes a la comprobación del referido hecho y circunstancias que ocasionaron la muerte de la víctima, identidad de él o los responsables; acusarlos y en definitiva condenarlos a las penas pertinentes por el delito que se ha expresado.

A fojas 414, don Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo querella criminal por los delitos de secuestro, torturas y homicidio calificado cometido en contra de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, solicitando acogerla a tramitación, decretar las diligencias que se solicitan, someter a proceso a los que aparezcan como responsables, acusarlos y en definitiva, sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fojas 512, Jorge Cortés-Monroy de la Fuente, en representación de doña Claudia Carolina Cerda Durán, dedujo querella criminal por los delitos de secuestro, apremios

ilegítimos, tortura y homicidio calificado ejecutados en la persona de don Jorge Antonio Cerda Albarracín, en contra de todos aquellos que resulten responsables de los hechos materia de la querella, solicitando admitirla a tramitación, practicar las diligencias de averiguación y, dictar en su oportunidad, el auto o los autos de procesamiento respectivos, encargar la aprehensión del o de los responsables, y al final castigarlos con el máximo de las penas previstas en el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afecte y que harían efectiva en la oportunidad procesal correspondiente, todo ello, con expresa condenación además al pago de las costas de la causa.

A fojas 580, doña Alicia Lira Matus, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo querella criminal por los delitos de homicidio y asociación ilícita cometidos en contra de Carlos Desiderio Quiroga Rojas y Jorge Antonio Cerda Albarracín, en contra de los agentes del Estado referidos en el cuerpo de la querella, y en contra de todos los que aparezcan responsables, solicitando acogerla a tramitación, decretar auto de procesamiento en su oportunidad y en definitiva aplicar a los responsables el máximo de la pena legal, con costas.

A fojas 594, Jorge Cortés-Monroy de la Fuente, en representación de doña Luisa Nolvis Durán Durán, dedujo querella criminal por los delitos de secuestro, apremios ilegítimos, tortura y homicidio calificado ejecutados en la persona de don Jorge Antonio Cerda Albarracín, en contra de todos aquellos que resulten responsables de los hechos materia de la querella, solicitando admitirla a tramitación, practicar las diligencias de averiguación y, dictar en su oportunidad, el auto o los autos de procesamiento respectivos, encargar la aprehensión del o de los responsables, y al final castigarlos con el máximo de las penas previstas en el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afecte y que harían efectiva en la oportunidad procesal correspondiente, todo ello, con expresa condenación además al pago de las costas de la causa.

A fojas 1385, se sometió a proceso a Gerardo René Maluje Abraham y Luciano Astete Almendras, como autores del delito de detención ilegal cometido en contra de Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, hecho cometido en Pedro de Valdivia, el 12 de septiembre de 1973.

A fojas 1706, los abogados Magdalena Garcés Fuentes, Boris Paredes Bustos, Cristián Cruz Rivera y Hugo Montero Toro, deducen querella criminal en representación de doña Jimena del Carmen Araya Carvajal y doña Anita Virginia Quiroga Araya, por los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado cometidos en la persona de su cónyuge y padre, respectivamente, don Carlos Quiroga Rojas, contra los ex agentes del Estado procesados en autos, así como en contra

de todos los que resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores, solicitando acogerla a tramitación, acusar a los procesados, y en definitiva, sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fojas 2259, se sobresee parcial y definitivamente por fallecimiento, respecto de Gerardo René Maluje Abraham.

A fojas 2422, se sobresee parcial y definitivamente por fallecimiento, respecto de Hugo Joaquín Lagos Osorio.

A fojas 2437, se sobresee parcial y definitivamente por fallecimiento, respecto de Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza.

A fojas 2438, se sobresee parcial y definitivamente por fallecimiento, respecto de Ramón Arístides Otero Herrera.

A fojas 2440 se declaró cerrado el sumario.

A fojas 2445 se dictó acusación fiscal en contra de Luciano Astete Almendras en calidad de autor del delito de Detención Ilegal, cometido en las personas de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, el día 12 de septiembre de 1973, en la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, Comuna de María Elena, Región de Antofagasta.

A fojas 2458, el abogado Cristián Cruz Rivera, en representación de la parte querellante, dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras como cómplice de los homicidios calificados de Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, solicitando sancionársele de conformidad al artículo 391 N°1 del Código Penal, y condenársele a dos penas de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, con costas. A su vez, en el primer otrosí, y en representación de Claudia Carolina Cerda Durán, Luisa Nolvis Durán Durán, Fresia Zoila Cerda Albarracín, Anita Virginia Quiroga Araya y Jimena del Carmen Araya Carvajal, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Abogado Procurador Fiscal don Carlos Vega Araya, pidiendo sea condenado a pagar la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) a cada una de las demandantes, más reajuste e intereses hasta el pago efectivo de la indemnización, con costas.

A fojas 2500, el abogado Felipe Alemparte Croxatto, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras, como autor del delito de secuestro simple, en grado consumado y reiterado, cometido en las víctimas Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas, invocando contra el acusado la circunstancia agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal, esto es, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, solicitando que sea condenado a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

A fojas 2509, el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados

Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras, como autor de dos delitos de secuestro calificado, en grado de consumado y reiterado, cometidos en perjuicio de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, invocando en contra del acusado las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8 y 11 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sea condenado a la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio.

A fojas 2547, contesta demanda civil el abogado Carlos Alberto Vega, abogado Procurador Fiscal de La Serena del Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile, solicitando el rechazo de las acciones en todas sus partes, con costas.

A fojas 2576, el abogado Hernán Benavides Navarro en representación del acusado Luciano Astete Almendras, interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía y prescripción de la acción penal; en subsidio, contestó la acusación fiscal y las particulares, solicitando se absuelva a su representado. Y para el evento que se dicte sentencia condenatoria, se le conceda algunos de los beneficios de la Ley N°18.126, modificada por la Ley N° 20.603, y en especial la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada, según sea el monto de la pena impuesta, e invocó las circunstancias eximentes de responsabilidad penal del artículo 10 N°10 del Código Penal, en subsidio se le considere como atenuantes las circunstancias del artículo 11 N°1 y N°6 del mismo Código, y que no se le condene al pago de las multas y las costas; también que se tenga en consideración y se le aplique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, atendida la edad actual de su representado; pidiendo, finalmente, que se aplique la media prescripción, de conformidad al artículo 103 del Código Penal.

A fojas 2622 se recibió la causa a prueba.

A fojas 2674 se certificó el vencimiento del término probatorio.

A fojas 2675 se trajeron los autos para efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 2699 se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE AMNISTÍA Y PRESCRIPCIÓN

PRIMERO: Que, a fojas 2576, el abogado Hernán Benavides Navarro en representación del acusado Luciano Astete Almendras, opuso como excepciones de previo y especial pronunciamiento, la amnistía y la prescripción de la acción

penal, prevista la primera en el artículo 1º del Decreto Ley N°2.191 del año 1978, por estar el delito que nos ocupa dentro del período que cubre esta eximente de responsabilidad criminal, agregando que la amnistía tiene su expresión jurídica como causal de extinción de responsabilidad penal en el artículo 93 N°3 del Código Penal, en relación al artículo 408 N°5 del Código de Procedimiento Penal, que tampoco es aplicable la normativa internacional como el Convenio de Ginebra, al no encontrarnos en un contexto de guerra interna, citando jurisprudencia al efecto. En cuanto a la prescripción de la acción penal, refiere que no puede existir sanción penal en contra de su defendido, fundado en que al momento de ejercerse la acción penal ya habían pasado más de 37 años para ejercerla, por lo que las acciones se encontrarían prescritas de conformidad a los artículos 94, 95 y 96 del Código Penal; prosigue señalando que las querellas, en estos casos, no se encuentran dirigidas en contra de su defendido, motivo por el cual se ha excedido con claridad el plazo de 10 años que para este tipo de delitos se ha fijado para suspender la prescripción, por lo que de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal penal debe necesariamente declararse la prescripción de la acción penal por darse los requisitos legales para ello, citando jurisprudencia al efecto, y solicitando en definitiva acogerlas sobreseyendo total y definitivamente esta causa respecto de su defendido.

SEGUNDO: Que el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), evacuó el traslado a fojas 2602, solicitando el rechazo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento deducidas, por tratarse en la especie de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme al ordenamiento jurídico interno, así como a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, siendo una de las principales consecuencias de ello que resultan inamnistiables e imprescriptibles ante el Derecho Internacional General, cuestión que ha sido largamente reconocida por la Excma. Corte Suprema, a través de reiterados fallos, apareciendo la alegación de estas excepciones por la defensa del acusado como una forma de lograr su impunidad enervando la acción de la justicia, lo que preserva el estado de indefensión de las víctimas.

A fojas 2610 el abogado Cristián Ruz Rivera, por la parte querellante y demandante civil, evacuó el traslado solicitando el rechazo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas, atendido a que el delito de autos fue cometido en contexto de violaciones los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, perpetrados

por agentes del Estado de Chile, según lo han declarado muchas instituciones nacionales e internacionales, que el ilícito en cuestión constituye un delito contra la humanidad según el Derecho Internacional Humanitario también aplicable en Chile, que la obligación de perseguir y sancionar este tipo de delitos y la prohibición de auto exoneración de los mismos, emana de Principios Generales de Derecho Internacional entonces vigentes, reconocidos por la comunidad internacional de la cual Chile forma parte; prosigue señalando que igualmente resulta aplicable a los hechos investigados, la Convención de Ginebra de 1949, entre otros convenios, los cuales contienen expresa prohibición de amparar la impunidad, impidiendo la aplicación de la amnistía y de la prescripción con respecto a delitos cometidos en el caso de conflictos armados con y sin carácter internacional, situación esta última aplicable a Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, citando jurisprudencia y normativa internacional al efecto.

A fojas 2618 el abogado Felipe Alemparte Croxatto, del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, evacuó el traslado solicitando el rechazo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento deducidas, por la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que, valiéndose del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ha rechazado la aplicación del instituto de la amnistía y la prescripción; añadiendo que nadie puede escapar al castigo por crímenes del Derecho Internacional por el hecho de alegar que el acto era legal conforme al derecho interno, o favorecerse de sus propias amnistías o por haberse granjeado las condiciones para su prescripción, lo que repugna a las normas de ius cogens, imperativas, inderogables y vinculantes para el Estado de Chile.

TERCERO: Que en Chile los Convenios de Ginebra se ratificaron en 1951, por consiguiente, a la fecha del delito investigado en estos autos ya eran Leyes de la República, de tal manera que, el artículo 3º del IV Convenio de Ginebra se encontraba vigente y sostiene que "En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: "1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la

fortuna, o cualquier otro criterio análogo". "A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".

CUARTO: Que, en el mismo sentido, cabe tener presente que junto a los Convenios de Ginebra, que dan pie a la tesis de la guerra interna y por ende, la aplicación del derecho internacional humanitario, no podemos abstraernos de la realidad fáctica que siempre han existido normas que forman parte de los conocidos Principios Generales del Derecho Internacional sobre crímenes de lesa humanidad.

Por ello existe una obligación convencional para los Estados Partes de las Naciones Unidas -y Chile es uno de ellos- de adoptar medidas legales para procurar derogar instituciones como la prescripción y la amnistía en Delitos de Lesa Humanidad, y ante este deber, surge la Convención Sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Esta imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad germina como Principio o Norma de Derecho Internacional General (*ius Cogens*), conforme al tratamiento dogmático y convencional de carácter universal y que por lo demás, es dominante en los tribunales nacionales partícipes de la Organización de las Naciones Unidas, además de los internacionales con jurisdicción respecto de Crímenes de Lesa Humanidad, por consiguiente estamos ante una situación de preeminencia normativa, de respeto por la dignidad de las personas y de su obligatoriedad en el ámbito interno, cuestión que se refrendó en nuestro ordenamiento jurídico por el reformado artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que de este modo los Principios Generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben entenderse integrados a la normativa constitucional, porque en su oportunidad en el ya incorporado Tratado de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado el 9 de abril de 1981 y promulgado mediante Decreto Supremo N°381 de 1981, Chile reconoció enteramente la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno. Lo que impide considerar la existencia de un juicio fundado para no cumplir de buena fe las obligaciones contraídas -artículo 26 de esa Convención- apoyando de esta forma lo dispuesto por su artículo 27, que decreta que un Estado Parte no podrá invocar

las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, especialmente los tratados de derechos humanos, que no hacen posible a los Estados Partes denunciarlo o terminarlo, puesto que las obligaciones se establecen en beneficio de las personas y no de los Estados, encontrándose sujetos a un control internacional.

La convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aclaró la observancia del ordenamiento jurídico interno al principio universal del "ius cogens", al definirlo en el artículo 53 de la Convención, como norma que no admite acuerdo en contrario y sólo puede ser modificada por norma ulterior de Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter, esto es, debe ser respetada de igual forma que un tratado ratificado por Chile, ya no por el modo de su modificación, sino porque siendo su entidad tal, que el propio artículo 53 del Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, determina que es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional General, primacía que ha reconocido permanentemente en sus sentencias la Excelentísima Corte Suprema.

SEXTO: Que, por lo que se ha venido considerando, este sentenciador considera que prevalecen en el caso de autos, la norma internacional de Derecho Internacional General que determina que, en los delitos de Lesa Humanidad, es incompatible normativamente aplicar la prescripción de la acción penal conforme al Derecho Interno y tampoco puede valerse de la amnistía de Crímenes de Lesa Humanidad, porque se trata de normas de Ius Cogens donde la penalización de estos crímenes es obligatoria. Estamos ante una norma imperativa de Derecho Internacional General, recepcionada constitucionalmente en Chile por vía de un Tratado Internacional vinculante desde antes, como Principio General del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

SÉPTIMO: Que, a modo de resumen cabe sostener que, en la época en que ocurrieron los acontecimientos que dieron origen a este proceso el territorio nacional se encontraba, en la realidad y jurídicamente, en estado de guerra interna, razón que resulta suficiente para tener por establecido que en Chile existía un "conflicto armado no internacional", en los términos del artículo 3º común para los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, resultan plenamente aplicables, a los delitos indagados, los Convenios de Ginebra de 1949. Así, el Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados Convenios, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores, renunciando a la facultad

para exonerarse a sí mismos o a otro Estado de responsabilidades incurridas por ellos, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe. En esta perspectiva, la llamada "ley de amnistía", puede ser claramente entendida como un acto de auto exoneración de responsabilidad criminal por graves violaciones a los derechos humanos -como el de la especie-, pues se dictó con posterioridad a ellos por quienes detentaban el poder durante y después de los hechos, garantizando de esta manera, la impunidad de sus responsables, conculcando así el artículo 148 del IV Convenio de Ginebra, norma que ha sido interpretada en el sentido de que el Estado que cometió la ofensa grave, que es responsable de compensar económicamente los daños producidos, sigue siendo responsable de ello aunque no haya castigado a quien efectivamente cometió la infracción y que le está vedado a los Estados pactar renunciaciones o liberaciones a dicha obligación de pagar compensaciones económicas en los tratados de paz que suscriban.

OCTAVO: Que, en cuanto a la prescripción opuesta, aparte de todo lo que se ha señalado anteriormente respecto de la amnistía y que es aplicable a esta institución, tampoco resulta procedente en la especie, tanto porque de hacerlo se infringirían los Convenios de Ginebra de 1949, en razón del estado de guerra interna que imperaba a la época de los hechos, como por la circunstancia de que los ilícitos sancionados en esta causa, eran y son considerados como delitos de lesa humanidad, categoría que impone como característica esencial, su imprescriptibilidad. La evolución del tratamiento de los derechos humanos, hace imperativa la mentada imprescriptibilidad, por cuanto la normativa internacional que se ha generado al respecto es obligatoria para el derecho chileno y en virtud de ella es inadmisibles cualquier causal de extinción que pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos.

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE FONDO DE AMNISTÍA Y PRESCRIPCIÓN

NOVENO: Que, en el primer otrosí de escrito de fojas 2576, el abogado Hernán Benavides Navarro en representación del acusado Luciano Astete Almendras, opuso como excepciones de fondo la amnistía y la prescripción de la acción penal, bajo los mismos fundamentos consignados en el considerando primero de esta sentencia, los cuales da por enteramente reproducidos.

DÉCIMO: Que, por las razones que se dieron en los motivos tercero a octavo de esta sentencia, los que se dan por enteramente reproducidos, se desestimarán las excepciones

de fondo de amnistía y prescripción de la acción penal opuestas.

EN CUANTO AL FONDO

UNDÉCIMO: Que, según consta a fojas 2445, el Tribunal acusó a Luciano Astete Almendras, como autor en los términos del artículo 15 N°2 del Código Penal, del delito de Detención Ilegal, cometido en las personas de Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, el día 12 de septiembre de 1973, en la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, Comuna de María Elena, Región de Antofagasta, ilícito previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal vigente a la época de los hechos. Los hechos en que se fundó la acusación son los siguientes:

1°.- Que el día 12 de septiembre de 1973 en la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, por orden del Prefecto de Carabineros de la Prefectura de Tocopilla, Luciano Astete Almendras, del Mayor Ramón Arístides Otero Herrera (fallecido), Comisario de la Comisaría de Carabineros de María Elena, y del Subcomisario de Pedro de Valdivia, Capitán Gerardo René Maluje Abraham (fallecido), se le ordenó al Teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza (fallecido) de la misma Subcomisaría, que detenga a Jorge Antonio Cerda Albarracín y a Carlos Desiderio Quiroga Rojas. Cumplida la orden, son ingresados a dicha Subcomisaría.

2°.- Que el día 13 de septiembre, en horas de la tarde, Cerda Albarracín y Quiroga Rojas, conjuntamente con Mario Nelson Solari Cortés y Gloria Angélica Galaz Álamos, son trasladados a la ciudad de Antofagasta por una patrulla de Carabineros, bajo el mando del Teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza, y entregados en la Intendencia al Juez Militar, Hugo Joaquín Lagos Osario (fallecido), donde funcionaba, en ese entonces, el Juzgado Militar, llevando además, un informe preparado y firmado por el Prefecto Luciano Astete Almendras, el Comisario Ramón Arístides Otero Herrera y el Subcomisario Gerardo René Maluje Abraham.

3°.- Que el día 18 o 19 de septiembre se realiza un supuesto Consejo de Guerra, cuyo único indicio es una copia simple de sentencia, de 19 de septiembre de 1973, que condena a don Jorge Antonio Cerda Albarracín y a don Carlos Desiderio Quiroga Rojas a la pena de muerte como autores de los delitos de los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 17.798 sobre Control de Armas de fuego y los delitos de espionaje y subversión con las Fuerzas Armadas y Carabineros, previstos en los artículos 252 y siguientes del Código de Justicia Militar, firmado por "Honorable Consejo de Guerra".

4°.- Que el día 20 de septiembre de 1973, aprueba y ordena el cumplimiento de la sentencia aludida en el numeral

precedente, el General de Brigada Hugo Joaquín Lagos Osorio, Jefe de Zona del Estado de Sitio.

5°.- Que el 20 de septiembre a las 01:00 horas, fueron ejecutados Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas en cumplimiento de la referida sentencia, en la Cárcel Pública de Antofagasta.

Que por su parte, el abogado Cristián Cruz Rivera, en representación de la parte querellante, dedujo acusación particular a fojas 2458, en contra de Luciano Astete Almendras como cómplice de los homicidios calificados de Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, atendido a que los antecedentes de autos tipificarían dicho delito, descrito y sancionado en el artículo 391 N°1, concurriendo las calificantes primera y quinta, habiendo el acusado cooperado a la ejecución del hecho por actos anteriores, siendo un partícipe necesario que sin su colaboración no se habría concretado el hecho punible, solicita por tanto, sancionársele de conformidad a dicho artículo 391 N°1 del Código Penal, y condenársele a dos penas de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, con costas, considerando además las agravantes contempladas en los numerales 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal. Y en el primer otrosí, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Abogado Procurador Fiscal don Carlos Vega Araya, pidiendo sea condenado a pagar la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) para cada una de las demandantes, más reajustes e intereses hasta el pago efectivo de la indemnización, con costas.

A fojas 2500, el abogado Felipe Alemparte Croxatto, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras, como autor del delito de secuestro simple contenido en el artículo 141 inciso 1° del mismo Código, en grado consumado y reiterado, cometido en las víctimas Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas, argumentando que en base a jurisprudencia de la Corte Suprema y doctrina, debe existir entre la acción desplegada por el funcionario público, una conexión suficiente con el legítimo sistema de vulneración de libertad de las personas, estableciendo ciertos parámetros considerados como decisivos para determinar si existe esta conexión suficiente, y poder determinar qué disposición es procedente aplicar, si la del artículo 141 o 148 del Código Penal, siendo estos los criterios: i.-Que se detenga en razón de la persecución de un delito; ii.-Que se deje alguna constancia de la detención; iii.-Que se ponga al detenido a disposición de los Tribunales de Justicia. Faltando estos requisitos, prosigue, debe aplicarse el artículo 141, por lo

que corresponde subsumir en dicho tipo la detención ilegal llevada a cabo con grave abuso del cargo por el funcionario, agregando que en el presente caso no se cumplen los mencionados requisitos. Invoca además contra el acusado la circunstancia agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal, esto es, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, solicitando que sea condenado a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, considerando también que estamos ante un delito de secuestro simple reiterado, lo cual hace aplicable la regla del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, en relación también al artículo 68 y 69 del Código Penal.

A fojas 2509, el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras, como autor de dos delitos de secuestro calificado tipificados en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal vigente a la época de los hechos, en grado de consumado y reiterado, cometidos en perjuicio de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, en atención a que la muerte de ambas víctimas constituye un grave daño durante su privación de libertad, agregando que dicha privación se hizo sin orden judicial ni administrativa y carece de los requisitos necesarios para ser reconocido como detención ilegal y, por otro lado, la muerte de las víctimas obedece a una política represiva de la época de llevar a cabo procesos judiciales simulados y de manera acelerada en espacios de tiempos mínimo para efectos de justificar sus muertes. Invoca también en contra del acusado, las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8 y 11 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sea condenado a la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales y costas de la causa.

A fojas 2547, el abogado Carlos Alberto Vega Araya, en representación del Consejo de Defensa del Estado, contesta demanda civil, solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas y su total rechazo.

DUODÉCIMO: Que en el primer otrosí de escrito de fojas 2576, el abogado Hernán Benavides Navarro en representación del acusado Luciano Astete Almendras, contestó subsidiariamente la acusación fiscal y las particulares, solicitando se absuelva a su representado. Y para el evento que se dicte sentencia condenatoria, se le conceda algunos de los beneficios de la Ley N°18.126, modificada por la Ley N° 20.603, y en especial la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada, según sea el monto de la pena impuesta, e invocó las circunstancias eximentes de responsabilidad penal del artículo 10 N°10 del Código Penal, en subsidio se le

considere como atenuantes las circunstancias del artículo 11 N°1 y N°6 del mismo Código, y que no se le condene al pago de las multas y las costas; también que se tenga en consideración y se le aplique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, atendida la edad actual de su representado; pidiendo, finalmente, que se aplique la media prescripción, de conformidad al artículo 103 del Código Penal.

DÉCIMO TERCERO: Que el delito de Detención Ilegal previsto en el artículo 148 del Código Penal, sanciona con la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios, a todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrar, arrestare o detuviere a una persona. Y si el arresto o detención excediere de treinta días, sanciona con las penas de reclusión menor y suspensión en sus grados máximos.

Que el delito de secuestro simple, contemplado en el artículo 141 inciso 1° del Código Punitivo, castiga con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados al sujeto que, sin derecho, encierre o detenga a otro, privándolo de su libertad.

El mismo artículo, en su inciso final, sanciona más gravemente el hecho cuando el encierro o detención se ha prolongado por más de 90 días o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, en este caso la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados.

Ahora bien, tratándose de conductas ejecutadas por funcionarios públicos, el legislador les otorga un tratamiento más favorable, el regido por el artículo 148 del Código Penal, sólo si concurren ciertos requisitos que justifiquen ese trato privilegiado.

De acuerdo a lo planteado, para estimar concurrente la figura del artículo 148 del Código Punitivo deben satisfacerse los siguientes requisitos:

- a) Que se detenga en razón de la persecución de un delito,
- b) Que se deje alguna constancia de la detención,
- c) Que se ponga al detenido a disposición de los tribunales de justicia.

En caso contrario, la figura aplicable es la genérica contemplada en el artículo 141 del Código Penal, en su modalidad simple o calificada, de acuerdo a las circunstancias del caso. (Corte Suprema, Rol N° 517-2004, sentencia 17 de noviembre de 2004)

Que, por otra parte, el delito de homicidio calificado previsto en el numeral primero del artículo 391 del Código Penal sanciona con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo al que mate a otro ejecutando el homicidio, entre otras calificantes, con alevosía (que

comprende también el obrar sobre seguro) y/o con premeditación conocida.

DÉCIMO CUARTO: Que el tipo penal de secuestro exige en primer término que sin derecho se encierre o detenga a una persona, privándolo de su libertad y para la figura calificada requiere que el encierro o detención se extienda por más de 90 días o que de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido; asimismo debe examinarse si en el caso previsto en el artículo 148 del código punitivo concurren los requisitos que allí se indican tratándose de funcionario público el acusado en este proceso. Para determinar los hechos del libelo acusatorio, se reunieron en el proceso pruebas instrumentales, periciales y testimoniales.

EN CUANTO AL INICIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS

DÉCIMO QUINTO: Que, respecto de don Jorge Antonio Cerda Albarracín, el certificado de nacimiento agregado a fojas 434 y 609, comprueba que éste nació en la circunscripción Moneda (Santiago de Chile) el 24 de diciembre de 1943, la inscripción lleva el número 5.134 en el Registro de Nacimientos del año 1943 y sus padres fueron don Miguel Cerda Zambrano y doña Fresia Albarracín Irribarren. Los certificados de defunción agregados a fojas 13, 23, 31, 435, 509, 593 y 610, dan cuenta que falleció a las 01:00 horas del día 20 de septiembre de 1973 en la ciudad de Antofagasta. De la conjunción de dichos documentos surge que la víctima tenía 29 años al momento de su muerte.

Que, respecto de don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, el certificado de nacimiento agregado a fojas 231, 462 y 623, comprueba que éste nació en la circunscripción de María Elena el 7 de agosto de 1941, la inscripción lleva el número 267 en el Registro de Nacimientos del año 1941 y sus padres fueron don Hernán Conrado Quiroga Secretan y doña Virginia del Carmen Rojas Salinas, información que es corroborada por los antecedentes familiares de la víctima remitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación a fojas 312 y 541. Los certificados de defunción agregados a fojas 180, 233, 290, 378, 464 y 625, dan cuenta que falleció a las 05:05 horas del día 20 de septiembre de 1973 en la ciudad de Antofagasta. De la conjunción de dichos documentos surge que la víctima tenía 32 años al momento de su muerte.

EN RELACIÓN A LA CAUSA DE LA MUERTE

DÉCIMO SEXTO: Que en relación a la causa de muerte de **Jorge Antonio Cerda Albarracín**, se señala en los certificados de defunción agregados a fojas 13, 23, 31, 435, 509, 593 y 610, en el certificado médico de defunción agregado a fojas

11, 77 y 528, en el acta de inscripción de defunción de fojas 436, 530, 531 y 611, y en la resolución del Servicio Nacional de Salud de Antofagasta de fojas 9, 79 y 529, que ésta se produjo por "anemia aguda, desgarró cardíaco" como consecuencia de "heridas transfixiantes de bala". El médico Mamerto Gorena fue el encargado de certificar la muerte de la víctima, según se desprende del certificado médico de defunción; en ese documento, datado el 21 de septiembre de 1973, se señala que Jorge Antonio Cerda Albarracín falleció a las 1 a.m. del día 20 de septiembre de 1973, en la Fiscalía Militar de Antofagasta y la identidad se comprobó a través de su cédula de identidad N° 4751759 del gabinete de Santiago.

A fojas 126 y 480 depuso Luisa Nolvís Durán Durán, viuda de Jorge Antonio Cerda Albarracín, quien señaló que fue a reconocer el cuerpo de su marido a la morgue en Antofagasta, junto a una tía Gladis Albarracín Iribarren, que lo vio sobre una camilla y observó que tenía una lesión en la sien, sin poder especificar en cual, tenía el pelo largo, luego no pudo seguir viéndolo. A fojas 331 y 799 depuso Gladis Albarracín Iribarren, quien refirió que luego de la muerte de su sobrino Jorge, fue al Hospital Regional de Antofagasta a vestirlo, que al llegar la hicieron pasar a una especie de morgue que quedaba en el primer piso, donde había una mesa y en su superficie estaba su sobrino, desnudo, con su pelo crespo mojado, observando muchos hoyos en el cuerpo en la parte anterior del tórax, sus genitales los tenía completamente negros o morados y tenía un tiro de gracia en su sien, además presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, sus manos las tenía hinchadas y coloradas, su cara la tenía también hinchada y sus ojos morados, presume por los golpes que recibió. Refiere que luego de vestirlo lo depositaron en una urna, lo trasladaron a la funeraria, hasta que se concretó su traslado a la ciudad de Santiago, recordando que viajaron en avión con su cuerpo y fue enterrado en el Cementerio General de esa ciudad.

Que en relación a la causa de muerte de **Carlos Desiderio Quiroga Rojas**, se señala en los certificados de defunción agregados a fojas 180, 233, 290, 378, 464 y 625, en el certificado médico de defunción agregado a fojas 234, 291 y 381, y en el acta de inscripción de defunción de fojas 465, que ésta se produjo por "anemia aguda, heridas a bala múltiples toraco-abdominales y cráneo encefálico". El médico Drago Zlatar Ostojic fue el encargado de certificar la muerte de la víctima, según se desprende del certificado médico de defunción; en ese documento, datado el 20 de septiembre de 1973, se señala que Carlos Desiderio Quiroga Rojas falleció a las 5.05 horas del día 20 de septiembre de 1973, en calle Prat N°1147, local Cárcel Presidio de Antofagasta y la identidad se comprobó a través de su cédula de identidad N°

49159 del gabinete de Copiapó. A fojas 317, se agregó Informe de autopsia N°148/73 de Carlos Quiroga Rojas, realizado en Antofagasta y datado 29 de septiembre de 1973, suscrito por el Dr. Mamerto Gorena N., el cual refiere que con fecha 21 de septiembre de 1973, en la Morgue del Hospital Base de Antofagasta, practicó la autopsia del cadáver de Carlos Quiroga Rojas, "enviado de recinto militar donde fue ejecutado". En cuanto al examen externo, se establece que corresponde a "Cadáver de sexo masculino de 35 años de edad. Buen estado nutritivo. Fue enviado envuelto en sábanas. Piel pálida. Cabeza: Orificio circular de entrada de proyectil en sien derecha, sin salida. A través del cuero cabelludo se palpa fractura ósea. Dos orificios de entrada de proyectil de arma de fuego en región clavicular izquierda y hombro izquierdo con su correspondiente salida. En región precordial izquierda hay otros dos orificios por dentro del pezón entre éste y el esternón. Orificio de entrada de proyectil a nivel del apéndice xifoides. En cara posterior 3 orificios mayores de salida de proyectil". Respecto al examen interno, certifica que "Hay lesión de cuarta costilla izquierda. Pericardio con dos perforaciones de proyectil. Hemopericardio. Desgarro del corazón por dos heridas transfixiantes. El proyectil del apéndice xifoides lesiona órganos abdominales y diafragma dando origen a hemoperitoneo". En su parte conclusiva, establece como causa de muerte "Anemia aguda", "Desgarro cardiaco por heridas transfixiantes de proyectil de arma de fuego", "Hemotórax. Hemoperitoneo" y "Muerte instantánea". A fojas 329, doña Elvira Quevedo Cabeza declara que concurrió con el hermano de Carlos, Conrado Quiroga y su esposa Marcia, al Hospital Regional de Antofagasta a retirar el cuerpo sin vida de Carlos, pudiendo percatar que tenía "muchos orificios en todo el pecho y al darlo vuelta para ponerle la camisa, logré ver los orificios en la parte posterior que eran mucho más grandes, en total sumaban unos 10 impactos y en su cabeza tenía el tiro de gracia hacia el lado izquierdo tenía un pequeño orificio y hacia el lado izquierdo tenía un orificio más grande".

EN RELACIÓN AL LUGAR Y FECHA EN QUE SE COMETIERON LOS DELITOS

DÉCIMO SÉPTIMO: Que a fojas 185 y 403 de autos, se agregó Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el cual refiere que "el 20 de septiembre de 1973 fueron ejecutados en cumplimiento de una sentencia de Consejo de Guerra, Jorge Antonio Cerda Albarracín, de 30 años de edad, médico del Hospital de Pedro de Valdivia, dirigente socialista; y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, de 32 años de edad, administrador de la Salitrera Pedro de Valdivia, militante socialista. Ambos fueron detenidos por Carabineros

en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973 y enviados a la Cárcel de Antofagasta, recinto donde permanecieron hasta el día de sus ejecuciones. Acusados de fabricación y distribución de granadas caseras, de adoctrinamiento subversivo, de espionaje y subversión en contra de las Fuerzas Armadas y participación en el plan Z, fueron condenados a muerte por sentencia de 19 de septiembre, del Consejo de Guerra rol 347.73 del Primer Juzgado Militar de Antofagasta. La ejecución se practicó el día 20 del mismo mes. Los restos, que además de las huellas de balas presentaban señales de torturas, fueron entregados a sus familias para su inhumación". Agrega que "No obstante haber sido solicitado a la autoridad correspondiente el expediente respectivo, no fue posible tenerlo a la vista. En todo caso, del análisis de la sentencia -obtenida de otra fuente- la Comisión pudo formarse convicción de que la ejecución de Cerda y Quiroga se hizo al margen de un debido proceso, por lo que su muerte constituye un hecho de violación de los derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado. Se funda dicha convicción en las ya dadas para todos los Consejos de Guerra y especialmente las siguientes:

-Los afectados no contaron con una debida defensa letrada, enterándose sus familiares de la existencia del Consejo de Guerra cuando ya habían sido ejecutados;

-En el fallo examinado no aparecen debidamente probadas las acusaciones en contra de ambos y la negativa de los acusados de haber participado en los hechos que se le imputaban, fue desechada sin ponderarla;

-Fueron procesados y condenados de acuerdo al procedimiento y la penalidad de tiempo de guerra, en circunstancias que los eventuales delitos habrían sido cometidos con anterioridad a la declaración del estado de guerra;

-No se consideró la atenuante de irreprochable conducta anterior a la que tenían derecho y se les hizo valer varias agravantes, incluso la específica del artículo 213 N°1 del Código de Justicia Militar, que sólo es posible de configurar respecto de militares que actúan en acto de servicio."

A fojas 603 y 618, se agregaron los Informes Individuales para resolución del Consejo, respecto de las víctimas, señalando el primero respecto de Cerda: "Fue detenido en su domicilio en la Oficina de Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973, por el Teniente de Carabineros Osvaldo Muñoz Sanhueza, se le envió a la Cárcel de Antofagasta ese mismo día, recinto en el cual permanece hasta el día de su ejecución, 20 de septiembre de 1973, ordenada por el Consejo de Guerra". Sobre su reclusión, se expresa: "En fecha no precisada fue trasladado junto a Carlos Quiroga Rojas a la Cárcel de Antofagasta. Se presume que el hecho ocurrió casi inmediatamente después de su detención. Durante

su reclusión habría sido torturado, por las señas que presentaba el cuerpo al ser reconocido por los familiares. Heridas cortantes en todo el cuerpo, quemaduras". Agrega el Informe que la madre, una hermana, y la cónyuge del detenido, llegaron a Antofagasta el 20 de septiembre y se dirigieron directamente a la cárcel, lugar donde les informaron que había sido ejecutado en la madrugada. Que fue condenado por sentencia en la causa 347-73 seguida en su contra y en contra de Carlos Quiroga. Que el dictamen fue aprobado por el Jefe de la División, el señor Comandante y Jefe de la Primera División del Ejército, el 19 de septiembre de 1973. Por su parte, en el Informe relativo a Carlos Quiroga se señala: "El día 12 de septiembre se encontraba viviendo en la casa de Huéspedes de la oficina Salitrera de Pedro de Valdivia, y el resto de su familia vivía en Copiapó, ese día se le detuvo junto al doctor Jorge Cerda Albarracín, a los dos se les trasladó hasta la cárcel de Antofagasta, donde permanecen detenidos y son objeto de interrogatorios". Que ambos Informes establecen que "el juicio estuvo basado, fundamentalmente en los antecedentes que aportó el Teniente Osvaldo Muñoz en relación a la supuesta sublevación por ellos promovida". Finalmente, los Informes concluyen que "Sobre las circunstancias de la detención y los motivos que pudo haber tenido la autoridad de la época para someter a proceso a estas personas, los antecedentes recibidos no permiten establecer una convicción clara al respecto. Es probable que la versión dada por el General Lagos tenga elementos de veracidad", testigo que ante la Comisión habría señalado que Jorge Cerda Albarracín fue detenido "por personal militar y de Carabineros especialmente enviados para ese efecto. Esta persona habría intentado sublevar a personal del Hospital y trabajadores de María Elena e, intentado tomar el Retén de Carabineros de la localidad, produciendo con estos hechos un movimiento general en Pedro de Valdivia. Dada estas circunstancias y con el propósito de tranquilizar la situación, el General Lagos habría ordenado que aviones Hawker-Hunter sobrevolaran la localidad, produciendo inmediatamente la dispersión de los sublevados. Los antecedentes sobre la situación antes descrita habrían sido puestos en conocimiento del General Lagos, por el Teniente Osvaldo Muñoz quien apremiado por las circunstancias habría solicitado auxilio y refuerzos". Volviendo a lo conclusivo, ambos Informes establecen que "éstas personas fueron condenadas a muerte como resultado de un proceso sumario, en el cual no se acreditaron debidamente las acusaciones, no existió derecho a defensa ni se respetaron las reglas de un debido proceso y, no se consideraron atenuantes que favorecían a los reos".

DÉCIMO OCTAVO: Que a fojas 14, se incorporó a la causa (copia) recortes de prensa del diario "El Mercurio", de

sábado 22 de septiembre de 1973, remitidos por el Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que informan en una noticia situada en Antofagasta, titulada "Fusilados dos extremistas.- Planeaban Asesinato de Oficiales y sus Familiares", en la cual se expresa: "Un médico y otro extremista de Pedro de Valdivia fueron fusilados en este puerto por sentencia de un Tribunal Militar. Habían fabricado (...) mil bombas de mano y ponían además un plan operativo contra oficiales y familiares de las Fuerzas Armadas e infiltración de las mismas". Sobre el fusilamiento, se expresa: "Conforme a la legislación de los Tribunales en tiempo de guerra, el Consejo Militar sentenció a muerte al doctor Jorge Antonio Cerda Albarracín y a Carlos Desiderio Quiroga Rojas; a siete años de prisión en su grado máximo a Gloria Angélica Galaz Álamos y a tres años de relegación en Pisagua a Mario Nelson Solari Cortés. La sentencia contra los dos primeros se ejecutó en la madrugada, por ser autores confesos de instigación a la subversión, adoctrinamiento subversivo, espionaje y por infringir la ley sobre control de armas y explosivos. Los otros dos fueron sentenciados a reclusión por encubrimiento. Además, en la entrevista de prensa se señaló que los individuos, todos residentes en la oficina Salitrera de Pedro de Valdivia, al interior de Antofagasta, tenían en su poder una fábrica de granadas y su respectiva distribución en ese centro minero, documentos con planes operativos contra Antofagasta, que señalaban ejecución para oficiales y familiares de las Fuerzas Armadas". A fojas 16, se incorporó copia de otro recorte de prensa del diario "El Mercurio", de 21 de septiembre de 1973, con una noticia situada en Calama, titulada "Fusilaron a 2 cabecillas de complot contra Antofagasta", la cual señala: "Ayer fueron fusilados dos extremistas que trabajaban en Pedro de Valdivia por los cargos de instigación a la subversión, adoctrinamiento subversivo, espionaje e infracciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos. Los sentenciados, junto a otras personas, tenían preparado un plan terrorista contra Antofagasta que, de haberse llevado a la práctica, habría significado la muerte de oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, sus familias, más numerosos civiles. *"Se pone en conocimiento de la opinión pública que en el día de ayer (jueves 20) conforme a la legislación de los tribunales de guerra, se procedió a la formación de un Consejo de Guerra integrado por oficiales para juzgar a Jorge Antonio Cerda Albarracín, Carlos Desiderio Quiroga Rojas, Gloria Angélica Galaz Alarcón y Mario Nelson Solari Cortés"*, señalaron en la Jefatura de Zona en Estado de Sitio de Antofagasta. Según decisión del Consejo de Guerra, escuchadas las defensas y descargos de los reos, se declaró la pena de muerte para Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas. Estos fueron fusilados ayer en la

madrugada". En el apartado "Muerte a oficiales", se agrega que los inculpados "Contaban con datos personales de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, residencias y planos de instalaciones militares. Se calcula que en la fábrica clandestina habilitaron cerca de dos mil granadas. Se han recuperado 800". A fojas 242 y 243, se incorporó recorte de "La Prensa de Santiago", de 22 de septiembre de 1973, remitido igualmente por el antedicho Arzobispado de Santiago, en el cual también se informa sobre ajusticiamiento de Cerda Albarracín y Quiroga Rojas con similares imputaciones. A fojas 82 se agregó recorte de revista "Ercilla", remitido por la Brigada de Homicidios de Antofagasta de la Policía de Investigaciones, el que contiene artículo titulado "Los Consejos de Guerra", en el cual se expresa: "Después del once, la constitución de los consejos de guerra no tardó demasiado. El primero conocido fue el que en Antofagasta juzgó al médico mirista Jorge Cerda Albarracín y a su compañero de acciones, Carlos Quiroga Rojas. Ambos fueron acusados de instalar en la oficina Pedro de Valdivia un campamento de entrenamiento de guerrilleros. Sus delitos: infracción a la ley de armas, instigamiento a la subversión armada, adoctrinamiento subversivo y espionaje. Se les fusiló el 22 de septiembre". A fojas 437 y 439 se incorporaron otros recortes de prensa que vinculan a la víctima Cerda Albarracín con un supuesto "Plan Z" relacionado al Partido Socialista y a una organización denominada "AGP", remitidos por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, indicando en su parte final que "El plan operativo completo para las provincias del norte grande fue encontrado en poder del médico de la Soquimich, Pedro Cerda Albarracín, que fuera ajusticiado el 20 de septiembre en la Cárcel Pública de Antofagasta".

DÉCIMO NOVENO: Que sin perjuicio que el Ejército de Chile informó a fojas 40 que no registra en su base de datos la causa Rol N° 347-73 del Tribunal Militar en Tiempo de Guerra de Antofagasta, se agregó a fojas 5, 114, 156, 236, 293 y 352, copia de la sentencia recaída en dicha causa, seguida en contra de Jorge Cerda Albarracín y otros, de 19 de septiembre de 1973, la cual investigaba hechos delictuosos como fabricación y distribución de granadas caseras altamente explosivas, adoctrinamiento de carácter subversivo, infiltración en las Fuerzas Armadas y Carabineros, y ocultamiento de armas, estableciendo en su considerando 3° que "de los antecedentes del juicio aparece comprobado que los reos Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas desarrollaban tales actividades en la localidad de Pedro de Valdivia, prevaleciendo de su condición de militantes activos del Partido Socialista y aprovechando las facilidades que les daban los cargos que ocupaban"; en su considerando 4° expresa que "aún cuando los reos Cerda Albarracín y Quiroga Rojas han negado los cargos formulados por el acusador, las probanzas

allegadas en su contra son fehacientes, toda vez que emanan de testigos contestes en el hecho y sus circunstancias, abonados por los efectos de sus delitos consistentes en las numerosas especies y artefactos recogidos mediante esas mismas declaraciones"; en su considerando 6° refiere que a Cerda Albarracín y Quiroga les afectan las agravantes del artículo 12 N°3 y 11 del Código Penal, y la del artículo 213 N°1 del Código de Justicia Militar; por su parte, el considerando 7° indica que "los antecedentes allegados al proceso revelan sin lugar a dudas que los reos nombrados son activistas altamente peligrosos para la Seguridad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Orden Público y la paz social, atendida la condición intelectual y preparación cultural de cada uno, lo que a la vez constituye un riesgo permanente de pérdida de vidas humanas que es necesario impedir a cualquier costo". Finalmente, en su parte resolutive, la sentencia condena a pena de muerte a Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, y a penas menores a Gloria Galaz Álamos y Mario Solari Cortés, lo cual fue dispuesto por "H. Consejo de Guerra de Antofagasta", y aprobado por el Jefe de Zona en Estado de Sitio, General de Brigada Joaquín Lagos Osorio, en resolución de 20 de septiembre de 1973, ordenando cumplirla de inmediato y oficiando al Alcaide de la Cárcel Presidio.

Que del mismo modo, a fojas 105 y 361 se agregó copia de la sentencia de Consejo de Guerra de Antofagasta recaída en la misma causa Rol N°347-73, pero de 24 de septiembre de 1973, donde se condenó a otros detenidos presuntamente implicados con Jorge Cerda Albarracín, a quien se nombra como conspirador, poseedor de dinamita, instructor en su propio domicilio de cursos de fabricación y manejo de explosivos, educación política, cursos de primeros auxilios y defensa personal, y como uno de los cabecillas de esta supuesta organización paramilitar. A fojas 357, se agregó copia de sentencia de 29 de septiembre de 1973, dictada por el mismo Consejo y recaída en la misma causa, mediante la cual se condena a otros dos detenidos, consignándose además que el doctor Cerda habría ordenado a uno de ellos (Bernardo Segovia Torres) el reparto de granadas a otros miembros de la colectividad, y que junto a Carlos Acuña Álvarez habrían organizado las milicias, instruyéndolas en el manejo de granadas y otros explosivos. Por su parte, en resolución aprobatoria de fojas 359, se estableció que las fuerzas de Carabineros destacadas en Pedro de Valdivia no fueron atacadas ni existió tentativa con tal fin. A fojas 90 se agregó copia de la sentencia Rol N°398-73 dictado por el Consejo de Guerra de Antofagasta el 13 de diciembre de 1973, donde para condenar a determinados imputados, se estableció como parte de los hechos de la causa, lo siguiente: "Que, el día 11 de septiembre de 1973, entre las 15,00 y las 16,00

horas llegó desde Pedro de Valdivia hasta la sede del Partido Socialista de María Elena el médico Jorge Cerda Albarracín (ejecutado) y le hizo entrega a Dinator Ávila Rocco (también ejecutado) de 10 granadas de mano fabricadas en los talleres de la Empresa Soquimich, y de un revólver marca Smith & Wesson calibre 32, con sus respectivas balas, y le instruye a fin de afrontar la lucha y resistir al actual Gobierno". A fojas 119, la Brigada de Homicidios de Antofagasta de la Policía de Investigaciones aportó un documento titulado "Errores u omisiones observadas en causa Rol 347-73 del I Juzgado Militar de Antofagasta que justifican su Revisión", recabado en dependencias de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el cual señala en sus observaciones previas que hay constancia de "que las fuerzas de Carabineros destacadas en Pedro de Valdivia no fueron atacadas por el supuesto grupo para-militar ni existió tentativa con tal fin", que todas las personas inculpadas (incluidos Jorge Cerda y Carlos Quiroga), fueron detenidas después del 11 de septiembre de 1973, sin que mediara resistencia alguna de su parte ni intento de fuga posterior a su detención. Prosigue señalando que el proceso fue "rapidísimo", que "duró prácticamente una semana y se inició apenas una semana después del pronunciamiento militar cuando los ánimos estaban excesivamente caldeados y con el apremio jurídico del procedimiento penal en tiempos de guerra".

VIGÉSIMO: A fojas 71 se aportó finiquito de 18 de octubre de 1973, suscrito entre la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SOQUIMICH) y doña Luisa Nolvis Durán Durán, cónyuge sobreviviente de Jorge Cerda Albarracín, donde se dejó constancia que dicha víctima prestó servicios a SOQUIMICH en calidad de empleador particular, desde el 1º de mayo de 1971 al 30 de abril de 1973, fecha esta última en que pasó a ser funcionario del Servicio Nacional de Salud; y, como médico a honorarios, desde el 1º de mayo de 1973 al 10 de septiembre del mismo año. Lo anterior se sustenta también con la resolución del Servicio Nacional de Salud de 21 de septiembre de 1973, aportado a fojas 9, 79 y 529, donde se autoriza el traslado de los restos mortales de la víctima a Santiago por vía aérea, consignando que dicho trámite queda afecto liberado del pago por ser "Médico Servicio Delegado SOQUIMICH", establecido en el Arancel vigente para el traslado de cadáveres. A fojas 261, se aportó comprobante de recaudación del Cementerio General Puerta Avenida La Paz, de 22 de septiembre de 1973, para la sepultación de cadáver de Jorge A. Cerda Albarracín.

VIGÉSIMO PRIMERO: A fojas 126 y 480 declaró **Luisa Nolvis Durán Durán**, quien señaló ser cónyuge de don Jorge Cerda y que se radicaron como familia en la oficina salitrera Pedro de Valdivia en 1972. Que en el mes de septiembre del año 1973, posiblemente el día 3, ella viajó a la ciudad de

Santiago junto a su marido, quien iba a una reunión del Partido Socialista, del cual era dirigente y miembro activo, mientras tanto ella iba con su hija por razones médicas. Como una semana después, refiere que su marido tuvo que regresar solo a Pedro de Valdivia a trabajar, mientras ella se quedó en Santiago. Añade que el día 11 de septiembre del año 1973, en circunstancias que se encontraba en esa ciudad, recibió una comunicación sin recordar de qué persona, en la cual se le informaba de la detención de su marido. Posteriormente, se enteraron que lo habían trasladado a la ciudad de Antofagasta, por lo que tomaron la decisión de viajar a esa ciudad, para obtener información real sobre lo que estaba sucediendo con su esposo. Recuerda que en el viaje iba acompañada de su suegra Fresia Albarracín Iribarren y su cuñada Fresia Cerda Albarracín. Una vez que llegaron a Antofagasta, trataron de ubicar al General Joaquín Lagos Osorio, infructuosamente. Indica que ese mismo día o al día siguiente comenzaron a buscar a su marido por diferentes lugares de la ciudad, llegando posteriormente al Cuartel General del Ejército en esa ciudad, donde un funcionario militar les confirma que estaba muerto. Luego fueron a reconocer el cuerpo a la morgue, en compañía de una tía Gladis Albarracín Iribarren. Posteriormente, realizaron las gestiones para trasladarlo a la ciudad de Santiago en avión, lugar donde lo sepultaron en dependencias del Cementerio General. Refiere que por comentarios supo que habían inculpado a su marido en el plan Z y porque habían encontrado explosivos, fue detenido por personal de Carabineros de Pedro de Valdivia, a cargo del Teniente Muñoz y el Teniente Maluje, de quienes ignora mayores antecedentes, pero cree que esas personas estuvieron a cargo de los procedimientos de esta índole en Pedro de Valdivia.

A fojas 131 y 478 declaró **Fresia Zoila Cerda Albarracín**, quien refirió que su hermano Jorge Cerda Albarracín comenzó a trabajar para el Partido Socialista estando en Pedro de Valdivia, que allá atendió a los hijos de un Carabinero Muñoz, quien después lo denunció y lo entregó a los militares. Que sin estar muy clara con las fechas, el día 12 de septiembre de 1973 se enteraron en Santiago que había sido detenido Jorge Cerda Albarracín en Antofagasta, que previo algunas gestiones de su padre para obtener su liberación, sin resultados, viajaron y llegaron a Antofagasta el 19 de septiembre de 1973, junto con su madre y su cuñada, donde comenzaron a buscar a Jorge Cerda. Que al día siguiente fueron a la Comandancia del Regimiento de la ciudad, donde un militar le dijo que el doctor Jorge Antonio Cerda Albarracín había sido fusilado a las 06:00 horas. Posteriormente, realizaron los trámites para trasladar sus restos a Santiago.

A fojas 188, 322 y 652 declaró **Jimena del Carmen Araya Carvajal**, quien señaló que fue cónyuge de Carlos Desiderio Quiroga Rojas y que para la época de los hechos se encontraban separados, que era del Partido Socialista Mirista y que a principios del año 1973 fue destinado como administrador en la salitrera Pedro de Valdivia. Que para el 11 de septiembre de 1973 ella se encontraba en Santiago, que luego volvió a Copiapó, lugar donde una amiga le informó que habían matado a Carlos Quiroga, que por la radio en horas de la mañana de ese mismo día, comunicaron que lo habían fusilado en la ciudad de Antofagasta. Que por intermedio del Obispado de Copiapó, confirmaron que habían matado a Carlos el 19 o 20 de septiembre de 1973. Posteriormente, supo del testimonio de un carabinero que estaba muy afectado, por haber tenido que darle el tiro de gracia a su marido al interior de la cárcel.

A fojas 331 y 799, declaró **Gladys Albarracín Irribarren**, quien señaló ser tía de Jorge Antonio Cerda Albarracín, médico que para el año 1973 trabajaba en el Hospital de Pedro de Valdivia, que sabía que su sobrino era de izquierda, seguramente militante del Partido Socialista. Que para los sucesos del 11 de septiembre, viajó a Antofagasta por otras circunstancias, encontrándose con su hermana Fresia Albarracín y su sobrina Fresia Cerda frente a la Intendencia, quienes le informaron que los militares habían fusilado a su sobrino Jorge. Agrega que él fue fusilado con un ingeniero.

En cuanto a la detención de don Jorge Antonio Cerda Albarracín

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a fojas 129, 572 y 1305, y en careo de fojas 1307, declaró **Luisa Elvira Barrios Williams**, quien señaló que para la época de los hechos trabajaba como asistente social de SOQUIMICH, en la oficina salitrera Pedro de Valdivia, ejerciendo también en el hospital del lugar. Que en ese contexto conoció a Jorge Cerda Albarracín, quien era médico pediatra del hospital y que era de público conocimiento su militancia en el Partido Socialista. Que el 11 de septiembre de 1973 supieron del Golpe Militar en la mañana, pero siguieron trabajando, notando que Carabineros colocaron sacos fuera del Retén para protegerse de eventuales ataques. Que el Retén estaba a cargo del Capitán Gerardo Maluje e integrado por el Teniente o Subteniente Osvaldo Muñoz, con una dotación aproximada de 8 a 10 funcionarios. Agrega que al día siguiente, miércoles 12 de septiembre, llegaron los militares, viendo cómo trasladaban a Jorge Cerda Albarracín al Retén de Carabineros, a quien sacaron del staff de solteras donde vivía Gloria Galaz (a fojas 1305 refiere que la detención ocurrió el 13 de septiembre). Indica que se

comentaba que lo trasladarían a Antofagasta entre el jueves y viernes. Afirma que Cerda el día 12 pasó la noche en la Subcomisaría, por lo que no fue enviado inmediatamente a Antofagasta, y que otro funcionario de Soquimich, Jorge Quiroga, corrió la misma suerte de Cerda. Refiere que los militares actuaron conjuntamente con Carabineros en las detenciones.

A fojas 134, 545 y 2014, declaró **Gloria Angélica Galaz Álamos**, quien señaló que para la época de los hechos trabajaba como matrona en el Hospital de Pedro de Valdivia, que ahí conoció al doctor Jorge Cerda Albarracín, médico general de zona, con quien inició una relación de tipo sentimental. Que a veces viajaban a Antofagasta y en ese contexto se enteró de su militancia política en el Partido Socialista. Que el 11 de septiembre de 1973 se enteró en su turno de lo que estaba ocurriendo en Santiago, además se informó que ese mismo día estaban buscando a Jorge Cerda, quien habría sido llamado en un bando para que se entregara. Aclara que Cerda no apareció ese día. Que al día siguiente, 12 de septiembre de 1973, Jorge Cerda se reunió con ella en la noche, quien le manifestó que se iría de Pedro de Valdivia y se retiró. Que, el 13 de septiembre de 1973, entre las 12:00 y 13:00 horas, ingresaron a su staff (residencia) los militares fuertemente armados, quienes le preguntaban por armas y granadas, siendo detenida y trasladada en vehículo militar a la Comisaría de Carabineros de Pedro de Valdivia, lugar donde vio al Capitán Maluje y al Teniente Muñoz, quienes estaban al tanto de la situación. Que en este lugar se encontró en los calabozos con Jorge Cerda. Afirma que ese mismo día, como a las 17:00 horas, los sacaron en vehículos de la compañía y los trasladaron juntos a Antofagasta. Que a esta ciudad cree que los trasladaron los militares, donde fueron llevados primero a los subterráneos de la Intendencia, luego a la 3° Comisaría de Carabineros, y luego ella fue derivada a la Cárcel de mujeres, perdiendo por el momento el contacto con Jorge Cerda.

A fojas 191 declaró **Guzmán Antonio Núñez Núñez**, quien señaló que conoció a Jorge Cerda Albarracín, médico del Hospital Pedro de Valdivia, socialista, y a Carlos Quiroga, administrador de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, quienes fueron detenidos después del 11 de septiembre de 1973. Agrega que vio muy torturado al médico, que lo llevaban en camioneta hacia Antofagasta, iba amarrado con la cabeza agachada, solo, cerca del hospital. Días después supo por la revista Vea que ambos habían sido fusilados por subversión. Que a su juicio era absolutamente infundado el cargo contra el médico y del otro detenido, que los conocía mucho a ambos.

A fojas 846 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681, declaró **Carlos Sandro Laporte Castillo**, médico y

director interino del Hospital de Pedro de Valdivia para la época de los hechos, quien señaló que era amigo de Jorge Cerda, quien fue detenido entre el 11 y 20 de septiembre de 1973, en las afueras del hospital por los propios carabineros de la localidad junto a una patrulla militar que al parecer pertenecían a Calama (esto se condice con lo declarado por Luisa Barrios a fojas 129, quien refiere que desde su residencia tenía una vista donde podía ver el Hospital y un Staff de soltera, lo que hace presumir la cercanía de ambos lugares). En este operativo, recuerda que una vez que procedieron a detenerlo, lo trasladaron directamente a una camioneta que se encontraba a pocos metros, para ser trasladado a la Comisaría, lugar donde ese mismo día fue conducido a la ciudad de Antofagasta, lugar donde se le realizó un consejo de guerra, encontrándolo culpable de actos de subversión, razón por la cual, se le aplicó la pena de muerte por fusilamiento en compañía de Carlos Quiroga, quien era el administrador de la oficina salitrera de Pedro de Valdivia. De los funcionarios que detuvieron a Jorge Cerda, indica que vio en esa ocasión al Mayor Maluje, al Teniente Muñoz y a un oficial del Ejército al parecer de Calama, siendo esa la última vez en que lo pudo ver con vida.

En cuanto a la detención de don Carlos Desiderio Quiroga Rojas

VIGÉSIMO TERCERO: Que a fojas 220, 505, 1323 y 1324, declaró **Adolfo Soza Vicentelo**, quien señaló que conoció a Carlos Quiroga Rojas en la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, quien era el Administrador General de la Oficina, además de socialista. Que al día siguiente del golpe militar de 11 de septiembre de 1973, a primera hora de la mañana, Carlos Quiroga, junto a Vitalio Mutarello, Jorge Cerda, y al parecer Juan Arriagada, concurren al lugar de embarque de los trabajadores de la mina, con la misión de informar a la gente la situación por la que pasaba el país e hicieron un llamado a los trabajadores a estar alerta y defender su fuente de trabajo. Respecto a Carlos Quiroga, aclara que esta fue la última vez que supo de él. Agrega que a Quiroga lo fusilaron en la Cárcel de Antofagasta el 21 de septiembre de 1973, junto a Jorge Cerda, por decisión del Consejo de Guerra. Sobre los aprehensores de Quiroga, señala que fueron carabineros del Retén de Pedro de Valdivia, el cual estaba a cargo del capitán Gerardo Maluje Abraham, le seguía el suboficial Aniceto Muñoz Sanhueza y el Sargento Arturo Contreras. A fojas 243 de causa Rol N°2182-1998 "Tocopilla: Vitalio Mutarello Soza" a la vista a fojas 2681, precisa que para el 11 de septiembre de 1973, el capitán de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia, Gerardo Maluje Abraham, lo llama e informalmente le sugiere que cierren el sindicato.

Hace presente que el grupo social de la Oficina o sindicato lo componían dos médicos, una asistente social, entre otros profesionales. Que el día 12 de septiembre, a las 07:00 horas, se gestó una reunión en el antedicho sector de embarque a la cual no pudo asistir, donde expuso Vitalio Mutarello y el doctor Jorge Cerda, el administrador de Pedro de Valdivia, Carlos Quiroga. Que en esta sesión habría hablado muy fuerte Carlos Quiroga, quien planteó directamente que los trabajadores debían defender su fuente de trabajo a como de lugar. Que de igual forma, lo mismo habrían planteado Jorge Cerda y Vitalio Mutarello, haciendo hincapié en que había que estar alerta. Que ese mismo día, alrededor de las 12:00 horas se junta la mayoría de los dirigentes, con el Capitán Maluje, quien les informa lo que estaba ocurriendo en el país y que lo mejor era cerrar el sindicato, las asociaciones gremiales y no participar en reuniones por su seguridad. Que alrededor de las 20:00 horas de ese día, se efectuó una reunión en el local del Partido Socialista, en la que participaron dirigentes socialistas y comunistas. Que el 13 de septiembre, supo por medio de Tucapel Hernández, diácono de la Iglesia Católica, que Vitalio y el doctor Cerda, pasaban de planta en planta informando a los trabajadores sobre el Golpe de Estado.

A fojas 325 y 506, declaró **Carmen Gloria Corrotea Rojas**, quien señaló ser hermana materna de Carlos Desiderio Quiroga Rojas, y que para el 11 de septiembre de 1973 ella se encontraba en la ciudad de Antofagasta. Que el 12 o 13 de septiembre del mismo año, le comunicaron en su trabajo que su hermano Carlos había sido detenido en Pedro de Valdivia, por la responsabilidad que pudiera tener en su calidad de Administrador de la empresa en esa localidad. Que por intermedio de la familia de su otro hermano, Conrado Quiroga Rojas, se enteró que Carlos había sido trasladado a la Cárcel de Antofagasta, y luego que había sido fusilado al interior de dicha cárcel, el 19 de septiembre de 1973, a las 04:00 horas. Que su hermano Conrado le comentó que había ido a visitarlo en esa fecha a las 06:00 horas, y que los gendarmes le informaron del fusilamiento. Agrega que Conrado ubicó a dos amigos de Carlos, Roberto Ponce Farías y otro de apellido Martinovic, quienes recuperaron su cuerpo. Que una vez ubicado, le comunicaron que se encontraba en la Morgue del Hospital Regional de Antofagasta, a donde concurrió observando que a la entrada de ese lugar estaba custodiada por personal del Ejército, quienes le permitieron el ingreso observando una pieza grande, con piso de madera con muchas camillas que sostenían una gran cantidad de cadáveres, y que al pasar a la parte posterior de esa habitación, observó una urna donde le dijeron estaba su hermano y a un costado de él, había otra urna que correspondía a don Jorge Cerda

Albarracín, médico de Pedro de Valdivia, quien fue fusilado junto a su hermano.

A fojas 328 y 507, declaró **Elvira Helia Quevedo Cabeza**, quien señaló que para septiembre de 1973 mantenía una relación de tipo sentimental con Carlos Desiderio Quiroga Rojas, que iniciaron una vida en común en Pedro de Valdivia, que ocurrido el Golpe Militar se enteraron de lo que sucedía en Santiago, y que Carlos le planteó la posibilidad de ser detenido. Que en los días siguientes al 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 21:00 a 22:00 horas, en circunstancias que se encontraban en la casa con Carlos y una amiga, llegaron violentamente a su casa los militares fuertemente armados, sin distinguir si andaban Carabineros, que revisaron toda la casa, para luego llevarse detenido a Carlos Quiroga, no volviendo más a la casa. Que luego ella se fue a Antofagasta, y una vez en la ciudad, por intermedio del padre Gregorio Centeno, se enteró que habían trasladado a Carlos a la Cárcel de Antofagasta, al parecer el 14 de septiembre del mismo año. Refiere que en sus visitas a la Cárcel nunca lo pudo ver, que siempre le dejaba el almuerzo con los Gendarmes. Todo hasta el día 20 de septiembre de ese año, fecha en la cual los mismos Gendarmes cuando le fue a dejar el almuerzo, le informaron que lo habían fusilado a las 04:00 horas de la madrugada, luego el padre Centeno le confirmó que había sido fusilado y que él había estado presente en los últimos momentos. También le informó que su cuerpo estaba en la Morgue del Hospital Regional de Antofagasta y que había sido fusilado al interior de la cárcel el 20 de septiembre de 1973, a las 06:00 horas. Agrega que Carlos era militante del Partido Socialista y periódicamente sus miembros se reunían en Pedro de Valdivia. A fojas 507 se retracta respecto al momento de la detención de Carlos Quiroga, manifestando que ella no estaba presente y que al parecer él fue detenido en su trabajo.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, sumado a los testimonios previamente reseñados, hay que considerar también las siguientes declaraciones que hacen mención a ambas víctimas: a) A fojas 153, 503 y 2011, declaró **Mario Nelson Solari Cortés**, quien señaló que para la época de los hechos militaba en el Partido Comunista y que desde abril de 1973 se desempeñaba como Jefe del Departamento de Bienestar de la oficina salitrera de Pedro de Valdivia. Que como a las 11:00 horas del 11 de septiembre de 1973, comenzó a enterarse en su trabajo de lo que ocurría en Santiago. Que por el Toque de Queda implementado, ellos como directivos de la empresa Minera Mantos Blancos, se reunieron ese día con el Jefe de Carabineros de Pedro de Valdivia, Capitán Gerardo Maluje Abraham, quien les manifestó que no habría problemas con los trabajadores. Que al día siguiente, 12 de septiembre de 1973, después del Toque de Queda (15:00 horas) comenzaron a llegar

a la localidad tropas de militares. Agrega que el 13 de septiembre de 1973, fue abordado en su residencia por personal militar mientras salía para su trabajo, siendo detenido por una patrulla de Carabineros a cargo del sargento Contreras, quienes lo llevaron a la Comisaría de la localidad. En este lugar, refiere que quedó a disposición del capitán Maluje, quien lo maltrató psicológicamente con palabras como "ya no están ustedes en el poder, nosotros controlamos la situación y aquel que no esté de acuerdo le corrimos bala". Alrededor de las 14:30 horas del mismo día, fueron trasladados a Antofagasta en dos camionetas, él junto al doctor Jorge Cerda Albarracín, director del Hospital de Pedro de Valdivia; Carlos Quiroga, administrador de la Oficina de Pedro de Valdivia (ambos también detenidos durante ese día antes que él), y doña Gloria Galaz, enfermera o matrona del Hospital, siendo custodiados por militares. En Antofagasta, fueron llevados a la Intendencia, luego a la Tercera Comisaría de Carabineros, donde fueron brutalmente golpeados, con golpes de pies, puños y culatazos. Que en esta unidad los interrogaban por armas, mientras los golpeaban "salvajemente". Luego los trasladaron a la Cárcel de Antofagasta, donde en los días posteriores nuevamente eran sacados a interrogatorios por personal militar y de Carabineros, quienes los torturaban con aplicación de corriente. Para esto, los Carabineros los trasladaban a la Tercera Comisaría y los militares a la población Séptimo de Línea, donde tenían un polígono de tiro. b) A fojas 731 y 991, declaró **Drago Iván Rosso Agüero**, quien señaló ser oriundo de la Salitrera Pedro de Valdivia y que manejaba una sala de cervezas instalada frente a la Comisaría de Carabineros de la localidad, que en esa condición conoció a varias personas que trabajaban en la Planta y en la Mina de Pedro de Valdivia. Que en 1971 llegó a trabajar a cargo de la Planta don Carlos Quiroga Rojas, a quien conoció porque le tenía arrendada para la empresa unos compresores y cree que en dos oportunidades conversó con él. Que también conoció a don Jorge Cerda Albarracín, como médico del Hospital de la localidad, quien también llegó a trabajar en esa fecha con ocasión de la asunción del Presidente Salvador Allende. Con respecto a los hechos sucedidos en el año 1973, señala que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Santiago por intermedio de la radio, que en la localidad de Pedro de Valdivia, Carabineros se acuartelaron en la Comisaría y comenzaron a cerrar todos los locales de venta de bebidas alcohólicas. Recuerda que el doctor Cerda, por los parlantes de la radio local, hablaba de revolución e incitaba a que los trabajadores se revelaran contra las Fuerzas Armadas, también decía que un avión iba a bombardear Pedro de Valdivia. Inmediatamente, refiere, un Carabinero de apellido Álamo bajó al doctor del segundo piso del Teatro donde se

encontraban las emisoras radiales y lo dejó libre y el doctor se fue a esconder detrás en el staff de Matronas. Posteriormente, observó en las dependencias de la Comisaría de Carabineros, específicamente en la Cancha de Basquetbol, unas piedras blancas con cuatro o cinco letras que decían "Estamos Bien OK", y al día siguiente, 12 de septiembre de 1973, pasó un avión a baja altura por la zona y pensaban que serían bombardeados, pero eso no ocurrió. Agrega que ese día 12, pudo observar cuando personal de Carabineros llevaba detenido al doctor Jorge Cerda Albarracín, al administrador de la Planta Carlos Quiroga Rojas y a Walter Quiroz Mamani, dirigente del sindicato de los trabajadores, supo que al doctor lo habían detenido en las dependencias de los staff de las matronas y al administrador lo habían sacado de su propia oficina, bajaron a las tres personas del vehículo policial, se veían a simple vista muy golpeados y los ingresaron a la comisaría, el conductor del vehículo policial era el Sargento Vladimir Villarreal, acompañado por el Sargento Arturo Contreras y otros carabineros. Refiere que al día siguiente en hora de la mañana, sacaron nuevamente a los detenidos, que esta vez no podían caminar por si solos, sus piernas las llevaban metidas en un saco papero, los subieron a una camioneta de la empresa de color naranja, marca Chevrolet del año 1970, cargaron a los detenidos en la parte posterior del vehículo y dos funcionarios de Carabineros se subieron atrás, quienes portaban dos metralletas pequeñas. Indica que lo anterior lo observó desde las afueras de su propiedad que estaba ubicada frente a la comisaría a unos 80 metros de distancia, que habían una gran cantidad de personas mirando lo que estaba sucediendo, y la camioneta salió de Pedro de Valdivia, que después se enteraron que los detenidos habían sido trasladados a la ciudad de Antofagasta, y a los días siguientes habían sido fusilados. Aclara que eran dos camionetas las que salieron de Pedro de Valdivia. c) A fojas 1932, se compulsó declaración de **Nelson Bernardino Muñoz Avendaño**, quien señaló que para 1973 se desempeñaba como Inspector de Investigaciones, que pertenecía a la Comisaría Judicial, siendo su función llevar a cabo las órdenes que impartían los tribunales. Que le correspondió detener personas y realizar funciones de patrullaje. Que los militares llegaron al Cuartel y se instalaron en él, apoderándose de facto de él hasta fines de 1973, y que en algunas ocasiones algunos funcionarios policiales salían con ellos. Refiere que los militares tenían sus propios prisioneros y sectores de interrogatorios, que eran oficinas, que después del Golpe no se registraba en los libros a los detenidos llevados por militares. Indica que efectivamente estuvieron detenidos en las dependencias de la Policía de Investigaciones el médico de Pedro de Valdivia Jorge Cerda Albarracín, así como el ingeniero Quiroga, junto a la polola

del médico, Gloria Galaz. Al médico lo fusilaron posteriormente, refiere. Agrega que después de los interrogatorios se llevaron a la matrona Gloria Galaz a la cárcel, que él la fue a dejar desde el cuartel. Señala que en el momento en que la llevaba se aferró mucho a él porque pensaba que la iban a matar. Añade que la vio cuando salió en libertad y que la llevaron detenida sólo por ser la polola del médico. Explica que los detenidos de Pedro de Valdivia llegaron al cuartel en unos camiones y se los llevaron luego de interrogarlos a la cárcel, siendo fusilados al día siguiente o en la misma noche. Los Consejos de Guerra eran en el cuartel y se celebraban entre los cabos y Ferrer. Había otros consejos de guerra formales, donde llegaban abogados a los que ubicaba, pero con uniforme militar. Afirma que también vio detenido a Solari.

VIGÉSIMO QUINTO: Que con los dichos de estos testigos, especialmente de doña Luisa Barrios, testigo ocular de la detención de Jorge Cerda Albarracín practicada el 12 de septiembre de 1973; de lo dicho por don Drago Rosso, quien aseguró haber visto el mismo 12 de septiembre cuando personal de Carabineros llevaba detenido al doctor Cerda Albarracín, al administrador de la Planta Carlos Quiroga Rojas y a otro detenido, que supo que al doctor lo habían detenido en las dependencias de los staff de las matronas (lo cual también refiere Luisa Barrios y también coinciden en que pasó la noche del día 12 detenido) y al administrador lo habían sacado de su propia oficina (a fojas 507 Elvira Quevedo dice algo similar); de lo dicho por Gloria Galaz, quien vio en libertad por última vez a Jorge Cerda el día 12 de septiembre en la noche, viéndolo detenido al día siguiente en los calabozos de la Subcomisaria; de lo dicho por Mario Solari, quien señaló que a Cerda y Quiroga los detuvieron poco antes que a él, durante la mañana o madrugada del día 13 de septiembre de 1973; se trata de cuatro testigos presenciales que están contestes en los hechos esenciales y sus circunstancias y, dos de ellos, los últimos, además fueron llevados con las dos víctimas a la ciudad de Antofagasta, donde fueron entregados en el subterráneo de la Intendencia y después los tuvieron detenidos en el recinto de investigaciones hasta donde se trasladó el servicio de inteligencia militar después del 15 del de septiembre de 1973, de lo que se colige que las detenciones de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y de don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, se practicaron entre el 12 y 13 de septiembre de 1973.

EN CUANTO A LOS SUJETOS QUE PRACTICARON LAS DETENCIONES

VIGÉSIMO SEXTO: Que, además de los testimonios referidos en el motivo precedente, cabe señalar que varios de los ex funcionarios de Carabineros que depusieron en el proceso

afirman que fueron funcionarios de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia los responsables de las detenciones, es así que: a) A fojas 260 y 479, y en careo de fojas 1307, declaró **Gerardo René Maluje Abraham (fallecido)**, quien señaló que para la época de los hechos se desempeñaba como Subcomisario de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia, donde prestó servicios hasta enero de 1974 (antecedente que coincide con la Relación de Personal acompañada a fojas 1328, donde figura como Capitán de dicha unidad policial y, con su Hoja de Vida, de fojas 1405 y siguientes de la causa a la vista 2182-1998 "Tocopilla: episodio Vitalio Mutarello Soza), y que para el 11 de septiembre de 1973 contactó a su jefe directo, Mayor Ramón Otero, quien era Jefe de la Comisaría de María Elena, quien le informó lo que ocurría en Santiago. Que horas más tarde llegaron al lugar efectivos militares a cargo de dos oficiales, permaneciendo hasta el año 1974, fecha en la que se fue de la localidad. Añade que el Comisario Otero le ordenó que a contar de ese mismo día regía el toque de queda, pero las faenas de la mina continuaban con normalidad. Que sus controles y patrullajes eran independientes de los militares. Recuerda que el Comisario Otero, de manera verbal, le ordenó detener al Administrador de la mina, al parecer de apellido Quiroga, y a un médico al parecer de apellido Cerda, dando cumplimiento a lo ordenado a través de sus subalternos, dos suboficiales. Que sin recordar la fecha y hora de las detenciones, le informaron que la orden se había cumplido y que los detenidos se encontraban en la Unidad Policial, por lo que de inmediato pidió que se confeccionara el correspondiente Parte documento con el cual puso a disposición de la autoridad Militar de la ciudad de Antofagasta, a los detenidos. Para tal efecto, dispuso que fueran trasladados en un vehículo de la empresa a la ciudad de Antofagasta, con la comodidad correspondiente, lo que se materializó como a medio día, quienes a su regreso le informaron que los detenidos habían sido entregados en la Intendencia de la ciudad o en un Cuartel Militar, donde estaba la autoridad Militar, al parecer de apellido Lagos y después de este evento, nunca más hubo detenidos en la unidad de Pedro de Valdivia relacionados por temas políticos o subversivos. Al día siguiente se enteró por la prensa del fusilamiento de ambos detenidos. Precisa sobre la muerte del doctor Jorge Cerda Albarracín, que efectivamente por una orden recibida de parte de su jefe directo Mayor Otero quien a su vez debió haber recibido la orden de algún superior, puede haber sido el Prefecto de Tocopilla, que tenía el grado de Comandante y un Mayor que lo secundaba, de apellido Salazar, o en su defecto, pudo haber recibido la orden directamente del General, lo que cree en menor posibilidad. Dicha orden fue cumplida por personal de su dotación, que correspondía al señor Quiroga, administrador de la Mina y al

doctor Cerda, director del Hospital de Pedro de Valdivia, ambos enviados mediante documento firmado conjuntamente con el Comisario Otero y el Suboficial de guardia de turno, y enviados a la ciudad de Antofagasta, enterándose al día siguiente que los habían fusilado. Explica que esta situación nació por una denuncia de pobladores que decían que había explosivos en la ciudad y frente al miedo de que volaran el cuartel y las casas de sus familias, tuvieron que allanar y buscar elementos subversivos, encontrando material y por lo cual hubo más detenidos. Aclara que no recibieron una orden de detención, fue solamente por dichas denuncias, y por esa razón detuvieron a esas dos personas, que la gente les dijo específicamente que era él, y es así que encontraron especies en su departamento. En lo relativo a Quiroga, no recuerda si había especies en su domicilio. Señala que estaba obligado a darle cuenta a su Comisario de lo ocurrido, razón por la cual le informó y el mayor Otero le dio la orden de trasladarlo a Antofagasta, al Juzgado Militar, ya que Pedro de Valdivia dependía directamente de Antofagasta. b) A fojas 263, 481, 1310, 1315 y 1325, declaró **Oswaldo Aniceto Muñoz Sanhueza (fallecido)**, quien señaló que para el 11 de septiembre de 1973 era Teniente de Carabineros en la Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia (lo que se corrobora con la Relación de Personal acompañada a fojas 1328 y en su Hoja de Vida a fojas 1425 y siguientes de causa a la vista 2182-1998 "Tocopilla: Vitalio Mutarello Soza), cuya unidad policial estaba a cargo del capitán Gerardo Maluje Abraham, existiendo una dotación de 25 Carabineros, que casi inmediato después de dicha fecha, recibieron información en la Comisaría de que el señor Jorge Cerda Albarracín, director del Hospital de dicho lugar, conjuntamente con un señor de apellido Quiroga, que cumplía funciones como administrador de la mina, se habían disfrazado de trabajadores de la mina, accedieron a las dependencias interiores y se habían tomado un polvorín de explosivos y distribuido dichos explosivos a los obreros, con la finalidad de atacar el Cuartel de Carabineros, apoderarse del armamento y la munición, luego marcharían a la ciudad de Antofagasta para tomarse un Regimiento. Por dicho motivo, refiere que se dio la orden por parte del Comisario de María Elena de apellido Otero que esas personas debían ser detenidas, encomendándole a él la misión, para tal efecto, se hizo acompañar de dos o tres Carabineros, con los cuales comenzaron a buscar a estas personas, a quienes ubicaron en el interior de la mina, y una vez habidos, les pidieron que los acompañaran al Cuartel y sin oponer resistencia los acompañaron. Indica que una vez en la unidad policial, se procedió al allanamiento de muchas casas donde había información que tenían explosivos, logrando ubicar una gran cantidad que se acompañó como prueba, conjuntamente con los detenidos, al Juzgado Militar de Antofagasta, cuyo Juez era

el Comandante de la División, General Lagos. Afirma que el documento que se confeccionó era bastante extenso, constaba de a lo menos 4 hojas y detallaba todo el procedimiento realizado, firmado por el Comisario Otero, el Capitán Maluje y todo bajo la supervisión del Prefecto de Tocopilla, Comandante Luciano Astete Almendra, recordando que los detenidos y el documento antes mencionado, los trasladó personalmente a la ciudad de Antofagasta, entregándoselo en sus propias manos al General de la División. Hace presente que los detenidos eran 3 personas, donde al parecer el tercero era el encargado del personal de la mina. Una vez entregados los documentos al General Lagos, se retiró de la oficina regresando a Pedro de Valdivia en el mismo instante, siendo aproximadamente las 14:00 horas. Hace presente que el Cuartel General funcionaba en ese entonces en la Intendencia de la ciudad de Antofagasta. Agrega que al día siguiente, como a las 03:00 horas, se enteraron que habían sido fusilados dos de los tres detenidos que habían trasladado, disponiéndose que notificara a sus familiares para que retiraran los cuerpos, quienes fueron notificados por el capitán Maluje. Refiere que para el traslado de los detenidos se ocuparon dos vehículos de la Compañía SOQUIMICH, uno con los detenidos y otro que los escoltaba. Explica que Carabineros cumplió su labor al recibir la denuncia de sustracción de explosivos, de personas que no estaban de acuerdo con la actividad subversiva, que dichas denuncias las debe haber recibido el capitán Maluje. Recuerda entre los detenidos a una mujer. Reafirma que en este procedimiento, en su análisis y decisión, redacción y firma del documento, que era muy complejo, participó el Prefecto Astete, quien estaba presente, el Comisario Otero y el Subcomisario Maluje. Precisa que la detención de Cerda y Quiroga fue entre el 16 o 17 de septiembre de 1973, que estuvieron como medio día en el Cuartel. Recuerda haber detenido personalmente a Cerda y Quiroga en el interior de la mina disfrazados de obreros con casco. A fojas 326 de la mencionada causa a la vista "Tocopilla: Vitalio Mutarello Soza", relata que el 11 de septiembre de 1973, ellos fueron cercados por una turba de gente exigiendo al Subcomisario la entrega del armamento y que les entregaran el cuartel. Se conversó con ellos manifestándoles que no era posible, y por lo mismo se puso en práctica un programa de defensa del cuartel, estas personas eran gente azuzadas por la Salitrera. Que el Comisario Maluje, por estos hechos, les solicitó a los dirigentes de la Salitreras, que se fueran de Pedro de Valdivia, para evitar problemas, ellos abandonaron el lugar, acatando las instrucciones del Subcomisario. c) A fojas 1312 y 1358, declaró **Jorge Carrasco Leiva**, quien señaló que para la época de los hechos era carabinero de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia (lo que se corrobora con la Relación de Personal

acompañada a fojas 1328, donde figura como Cabo de dicha Subcomisaría), que pasado dos días de ocurrido el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, todos los detenidos que habían en la Sub-cárcel de la Subcomisaría, fueron enviados a la Cárcel de Antofagasta. Que cuando los reos fueron enviados, comenzó a efectuar labores de vigilancia y seguridad de las dependencias del cuartel policial y de las viviendas fiscales, labores que duraron hasta cuatro días después del Golpe Militar, fecha en la cual llegó a la zona personal del Ejército del Regimiento de Calama, quienes se alojaron en la misma unidad policial. Que dicho personal militar patrullaba la población de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, ocasión en la cual comenzaron a llevar diversas personas detenidas, las que dejaban en custodia en la Subcomisaría y pasados unos tres días, llevaron un camión donde subieron a todos los detenidos y se los llevaron a Antofagasta. Recuerda que en las detenciones del Ejército, siempre los acompañaban los funcionarios más antiguos de la Subcomisaría, ya que conocían la zona y a algunas personas, entre los que puede nombrar al Suboficial Rosauro González, Sargentos Arturo Contreras, Pedro Albailay y Pedro Varas. Que después de esa fecha, recuerda que se hizo un grupo mixto entre funcionarios militares de Calama que estaban en la zona y los suboficiales más antiguos de la Subcomisaría, a fin de detener a un doctor Jorge Cerda Albarracín y al Gerente de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, que estaban siendo buscados por andar promoviendo desórdenes dentro de la planta, incitando a la gente a la revolución y por confeccionar explosivos para efectuar atentados. Recuerda que ellos fueron detenidos unos días más tarde y enviados a la Intendencia de Antofagasta, ya que le correspondió acompañar al Teniente Osvaldo Muñoz Sanhueza a dicho lugar a entregar a los detenidos, quienes se hicieron cargo de ellos. Al día siguiente, supieron que los habían fusilado en Antofagasta. Agrega que el capitán de la Subcomisaría era Gerardo Maluje Abraham, que la unidad dependía de la Comisaría de María Elena, a cargo del Mayor Otero, quien a su vez dependía del Prefecto de Tocopilla. A fojas 1358, aclara que antes que llegaran los militares a la localidad, se practicaron las detenciones de Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas, mediante procedimiento policial. Que cuando llevaban a los dos detenidos a Antofagasta lo hicieron en camionetas de la empresa. Relata que Carlos Quiroga le entregó unos documentos personales para su esposa y una guincha que portaba, lo que le dio a entender que sabía lo que le iba a pasar, y accedió a su solicitud, entregándole a su regreso los documentos a su esposa. Manifiesta que el fusilamiento de ambos los dejó muy conmovidos porque eran buenas personas, sobre todo el doctor Cerda, quien atendía a su familia y todos le tenían mucha estima. Hace presente que el traslado de los detenidos

ocurrió a plena luz del día, como a las 15:00 horas, fueron llevados solamente esposados, en ningún caso encapuchados. d) A fojas 1317, 1694 y 1727, declaró **Rosauro Segundo González Molina**, quien señaló que para septiembre de 1973 se desempeñaba como Suboficial Mayor en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia (lo que se corrobora con la Relación de Personal acompañada a fojas 1328), que luego del pronunciamiento militar el capitán Maluje, jefe de la unidad, les mandó practicar unas detenciones en relación a la postura política de ciertas personas, quienes luego fueron trasladadas a Antofagasta. Estas detenciones refiere que fueron los primeros días, recuerda la del director del hospital de Pedro de Valdivia, de apellido Cerda, a quien se le allanó su domicilio y se le encontraron granadas hechizas y material para su fabricación. Refiere que Cerda fue detenido por el Oficial de orden de la unidad, Teniente Muñoz. Agrega que cuando los detenidos eran trasladados a Antofagasta, se pedían vehículos a la compañía cuando era necesario. Relata que para la detención de Jorge Cerda Albarracín tuvo que acompañar al funcionario a cargo del procedimiento, no teniendo participación directa. Que luego de ser detenido, el médico fue llevado a la Subcomisaría, en donde estuvo algunas horas y de allí fue trasladado en vehículo policial a Antofagasta, en donde fue entregado a un Regimiento. Que luego de ser entregado, se regresaron inmediatamente a Pedro de Valdivia, ignorando lo ocurrido después con el detenido. e) A fojas 1318, se acompañó declaración judicial de **Arturo Óscar Contreras Tamayo**, quien señaló que para septiembre de 1973 se desempeñaba como Suboficial Mayor en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia (lo que se corrobora con la Relación de Personal acompañada a fojas 1328), que luego del pronunciamiento militar llegó un contingente militar de Calama, quienes se quedaron en las dependencias del cuartel. Supone que el objetivo era para reforzar el servicio de Carabineros, pero no recuerda haberlos visto llegar con detenidos. De la detención de trabajadores de SOQUIMICH, quienes fueron trasladados a Antofagasta, solo supo por comentarios de sus compañeros. f) A fojas 143 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681, declaró **Abelardo Curiqueo Raipán**, quien señaló haber sido conductor del jeep de patrullaje de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia, que recibió instrucciones de sus superiores para que se parapetara en el techo del cuartel a fin de resguardar la seguridad del recinto policial. Que después del Golpe Militar, se percató que llegaban a la unidad personas detenidas, desconociendo motivos de detención, que él solo detuvo delincuentes comunes. No obstante lo anterior, supo de la detención de algunos dirigentes sindicales y personeros políticos que fueron llevados a Antofagasta, de lo cual solo se enteró por

comentarios, ya que él no participó en esa diligencia. g) A fojas 149 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681, declaró **Daniel Alfonso Montoya Sanhueza**, quien señaló que unos veinte días de ocurrido el Golpe, llegó a la Subcomisaría de Pedro de Valdivia un contingente militar del Regimiento de Calama compuesto por más o menos cinco o seis hombres, un Subteniente, un cabo y conscriptos. Según lo que recuerda, nunca llegó alguna orden, verbal o escrita, que ordenara detener a dirigentes sindicales o personeros políticos en su jurisdicción. h) A fojas 157 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681, declaró **Jorge Héctor Méndez Quilodrán**, quien señaló que una vez ocurrido el Golpe Militar el 11 de septiembre de 1973, recibieron instrucciones precisas de su jefe de unidad, Capitán Gerardo Maluje Abraham, en el sentido que debían velar por la seguridad del cuartel, interrogar y revisar a las personas que se acercaran a la Subcomisaría Pedro de Valdivia, con el fin de que no atentaran contra ella y en contra de ellos mismos, reforzándose la guardia para una mayor seguridad y fiscalización. Agrega que los más antiguos de la Unidad, vale decir oficiales y suboficiales, eran quienes comandaban las detenciones de carácter político contra dirigentes de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, pero él no participó en ninguna de esas detenciones, su labor era de guardia exterior e interior del Cuartel Policial. Explica que dichos dirigentes sindicales que fueron detenidos ingresaban a la Unidad y quedaban en espera en el patio posterior de la Subcomisaría, no ingresaban a los calabozos y al parecer después eran enviados a Antofagasta, ignorando a qué lugar en específico, ya que los más antiguos eran los encargados de estos procedimientos. Precisa que de Cabo para arriba salían a efectuar detenciones de carácter político y solo quienes tenían grado de Carabineros hacían labores exclusivamente de vigilancia en el Cuartel. i) A fojas 173 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681, declaró **Luis Alberto Umaña González**, quien señaló que nunca hubo detenciones de carácter político ni de dirigentes en la zona, de parte de Carabineros o militares, ya que habían sido notificados previamente después del 11 de septiembre de 1973, que debían abandonar Pedro de Valdivia. Que la única excepción es la detención del Gerente de la Salitrera y el doctor Cerda, junto a otros personeros, que fueron sorprendidos con explosivos, los cuales fueron detenidos por personal de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia, que dichas personas fueron trasladadas a Antofagasta y muertas en un intento de fuga, según recuerda. j) A fojas 1363 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681, declaró **Jaime Cristino**

Castillo Gómez, quien señaló que para la época de los hechos se desempeñaba como carabinero en la 1° Comisaría de Tocopilla, que el mismo 11 de septiembre llegó a la ciudad personal del Regimiento Reforzado de Calama, con quienes viajaron en un microbús a Pedro de Valdivia, ya que se sabía que se atentaría en contra de la unidad haciéndola explotar, arribando a la localidad entre las 19 y 20 horas, en donde inmediatamente los Carabineros de Tocopilla son enviados a resguardar el polvorín de SOQUIMICH. Que en sus funciones, registraban a los trabajadores que salían y entraban a las faenas a fin de que no portaran explosivos ni armamentos. Que en estas tareas estuvieron por un par de horas, para luego y por orden del subcomisario de la unidad, retirarse a descansar al interior de las dependencias de la unidad. Que siendo aproximadamente las 06:00 a 06:30 horas se pudo percatar que desde la subcomisaría de Pedro de Valdivia salieron 3 a 4 camionetas de SOQUIMICH, conducidas por personal de la misma empresa y tripulada con contingente militar, quienes trasportaban 3 a 4 detenidos, incluida una matrona de nacionalidad extranjera, quienes estaban en la parte trasera de las camionetas, al parecer con destino a la ciudad de Antofagasta para ser puestos a disposición del Consejo de Guerra, de lo cual sabe por comentarios que se hicieron en la misma unidad en que estaba. Que alrededor de las 07:00 horas los Carabineros de Tocopilla regresan a su unidad de origen y que sólo personal del Ejército quedó apostado en Pedro de Valdivia, en conjunto con el personal de planta de la subcomisaría de esa localidad. k) A fojas 1369 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681, declaró **Zoilo Fernando Pezoa Muñoz**, quien señaló que para el 11 de septiembre de 1973 era carabinero de la Subcomisaría de Pedro Valdivia (lo que se corrobora con la Relación de Personal acompañada a fojas 1328, donde figura como Cabo), la cual estaba al mando del capitán Gerardo Maluje, siendo secundado por el Teniente Osvaldo Muñoz. No habría participado en operativos que tuviesen como resultado detenciones de carácter político, pero sí recuerda haber sido testigo de la presencia en el cuartel de tres detenidos de esas características, uno era un doctor de apellido Cerda, otro administrador de la Empresa Soquimich y una matrona, quienes estaban custodiados por militares, quienes además estuvieron un par de horas, los que fueron trasladados a Antofagasta custodiados por militares y carabineros de la unidad (Teniente Muñoz, Curiqueo y él). Recuerda que a estas personas las entregaron con vida en la Intendencia de la ciudad, desconociendo luego el destino final. l) A 124 (repetida a fojas 1304), se agregó una copia de oficio de 19 de diciembre de 1974, emitido por el Jefe de Zona en Estado de Sitio Sr. Rolando Garay Cifuentes, en su calidad de

Intendente de la II Región, donde informa a doña Sonia Aros (cónyuge de Vitalio Mutarello Soza, detenido desaparecido de Pedro de Valdivia), que su marido se presentó a la Subcomisaría de Pedro de Valdivia el día 12 de septiembre de 1973, alrededor del mediodía, donde posteriormente fue dejado en libertad bajo arresto domiciliario. Que posteriormente, junto con procederse a la detención de Jorge Cerda Albarracín se dispuso también la de Vitalio Mutarello Soza, orden que no pudo cumplirse por no haberse encontrado en ningún lugar a dicha persona (este oficio consta también a fojas 74 de causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", custodiada a fojas 2681). m) Relacionado con el caso de Vitalio Mutarello Soza, se acompañó a fojas 1303 una declaración ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de su cónyuge doña Sonia Adriana Aros Montenegro (obtenida de fojas 66 de la causa Rol N°2182-1998 "Vitalio Mutarello"), quien expresó que el 12 de septiembre de 1973 su marido salió temprano a ver qué pasaba pues lo estaban llamando por radio, que un par de horas después llegaron militares fuertemente armados a allanar la casa, quienes actuaron con mucha violencia. Que después comenzó a hacer gestiones para encontrarlo, acudió a la Subcomisaría de Carabineros, donde le dijeron que no estaba, pero que si lo encontraban lo iban a fusilar como a otros (Carlos Quiroga y Jorge Cerda, fusilados en Antofagasta).

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que con el mérito de la sentencia dictada a fojas 2268 y siguientes, de la causa Rol N° 2182-1998 denominada "Tocopilla: Vitalio Mutarello Soza" tenida a la vista a fojas 2681, donde consta que su secuestro agravado se cometió en la Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia el 12 o 15 de septiembre de 1973, quien decide presentarse de forma voluntaria ante las autoridades policiales en la Subcomisaría de Carabineros, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero. Que según el motivo cuarto de dicho fallo, para establecer los hechos se consideraron las declaraciones de su cónyuge Sonia Aros Montenegro, quien lo vio por última vez el 12 de septiembre de 1973, como a las 9:00 horas, cuando decidió salir de la casa a ver qué pasaba, puesto que al parecer lo llamaban por la radio. Doña Luisa Elvira Barrios Williams, indicó que mientras estaba detenida en Retén de Carabineros, el 14 de septiembre observó cuando Vitalio Mutarello se aproximaba a la guardia con las manos en alto, luego lo ingresan le trasladan a dependencias interiores, siendo esa la última vez que le pudo ver. Vale mencionar que dicha causa se inició con los antecedentes acompañados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación a fojas 1, donde relatan la vinculación de los detenidos Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas con la víctima Vitalio Mutarello Soza.

Que lo referido en los acápite precedentes, hay que relacionarlo, necesariamente, con la prensa de la época citada ya en el considerando décimo octavo de esta sentencia, particularmente con las publicaciones efectuadas en el diario "El Mercurio" los días siguientes al fusilamiento de don Jorge Cerda Albarracín y de don Carlos Quiroga Rojas. De esas informaciones efectuadas por dicho diario, donde se publicaban noticias sin siquiera indicar la fuente, salvo cuando se mencionaba algún bando, los que por lo demás también eran publicados en ese medio, se desprende que las detenciones practicadas en la localidad de Pedro de Valdivia, fueron dirigidas principalmente hacia trabajadores de la empresa SOQUIMICH que operaba en el lugar, quienes también eran dirigentes políticos o sindicales militantes del Partido Socialista, y que se les imputó un fantasioso plan terrorista denominado "AGP" vinculado al Partido Socialista (según la publicación de prensa de fojas 437). Por su parte, sumado a las diversas declaraciones que sitúan a Cerda y Quiroga como militantes del Partido Socialista, vale resaltar también lo declarado por Carlos Laporte Castillo a fojas 846 de la causa Rol N° 2182-1998 Episodio "Tocopilla: Vitalio Mutarello y otros", quien mencionó que su colega Jorge Cerda le presentó a Vitalio Mutarello Soza, ya que ambos militaban en el Partido Socialista y tendrían una afinidad mayor.

En resumen, existe concordancia de que a las víctimas de autos las detuvieron el 12 o 13 de septiembre de 1973, misma época en que se presentó voluntariamente Vitalio Mutarello Soza ante la Subcomisaría de Pedro de Valdivia, datos que serán útiles para establecer la existencia de una investigación y de un posterior Consejo de Guerra.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que de esta manera se demostró con la prueba expuesta y analizada, que funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Pedro de Valdivia junto a tropas militares que llegaron a Pedro de Valdivia después de las 15,00 horas del 12 de septiembre de 1973, participaron, en la detención de las dos víctimas de este proceso, junto a doña Gloria Galaz y don Mario Solari, además de lo que explicaba el Régimen a través del diario El Mercurio, sobre un plan terrorista en Pedro de Valdivia que afectaría a la ciudad de Antofagasta. En este proceso no procede cuestionar la veracidad de esas imputaciones, pero basta leer esas informaciones, en el diario citado, para darse cuenta de lo absurda que resultaba la creatividad de los organismos de represión y de las autoridades militares de la época, porque para nadie es un misterio que en ese tiempo Antofagasta y las comunas aledañas estaban copadas por contingentes militares, sin embargo, en las publicaciones de prensa reseñadas (considerando décimo octavo), se describen, con gran fantasía, una serie de actos que pretendían, en último término, atacar a las Fuerzas Armadas después de sabotear

obras de infraestructuras, que estaban completamente custodiadas y franqueadas por los militares, lamentablemente el oportunismo y el colaboracionismo con el aniquilamiento de los que se creían enemigos de las nuevas fuerzas cívico militares imperantes, hizo desaparecer todo atisbo de lógica y ética periodística. Es más, en este caso en particular, de los propios dichos de Mario Solari, quien refiere haberse reunido pacíficamente con el capitán Maluje junto a otros trabajadores dirigentes el mismo 11 de septiembre de 1973, de los dichos del Teniente Osvaldo Muñoz, quien también refiere que un grupo de personas fueron a la Subcomisaría a tratar con ellos, instancia que no pasó a mayores atendido a que acataron las órdenes del Subcomisario Maluje, contrastado con la resolución aprobatoria de fojas 359 dictada por el propio Joaquín Lagos, que estableció que las fuerzas de Carabineros destacadas en Pedro de Valdivia no fueron atacadas ni existió tentativa iniciada con tal fin, a lo que debe agregarse que al ser detenidos Cerda y Quiroga no opusieron resistencia alguna, se constata que todo este entramado terrorista y paramilitar aducido por la prensa de la época, no fue más que sensacionalismo para mantener a la gente alarmada y justificar sus propios actos ilícitos ante la opinión pública, pues según se aprecia por los propios Carabineros en las declaraciones antes indicadas, en Pedro de Valdivia, hasta la llegada de las tropas militares, el clima reinante en el lugar era de tranquilidad, pese a la conmoción nacional. En cuanto a los dichos del testigo Drago Rosso, quien refiere que el doctor Jorge Cerda incitaba a la población a revelarse a través de la radio local, no hay otros antecedentes que avalen esos dichos, ni siquiera del propio carabinero Álamo que nombra (René Álamos), quien en sus declaraciones a fojas 138 y 187 de la causa a la vista 2182-1998 "Tocopilla: Vitalio Mutarello Soza", sólo relata que el 11 de septiembre se ocupó de los presos de la subcárcel de la Subcomisaría, y teniendo en cuenta el testimonio de Gloria Galaz, quien refiere que Jorge Cerda no apareció el 11 de septiembre, se colige que de haber sido efectivo lo de la radio, doña Gloria Galaz lo recordaría, pues teniendo una relación sentimental con la víctima, lo lógico es que haya estado preocupada por él durante la conmoción nacional de ese día, habiéndose enterado de las actividades que aquel realizó durante esas jornadas. Por tanto, no queda más que tener por desacreditada esa parte del testimonio de Drago Rosso, lo que resta aún más cualquier atisbo de justificación a la versión de Carabineros para la detención del doctor Cerda.

SOBRE LA CIRCUNSTANCIA DE HABER EXISTIDO O NO UN CONSEJO DE GUERRA QUE LOS HABRÍA CONDENADO A MUERTE.

VIGÉSIMO NOVENO: Que doña **Gloria Angélica Galaz Álamos** declaró a fojas 134, 545 y 2014, que en la Cárcel de Antofagasta estuvo desde el 13 al 19 de septiembre de 1973, fecha esta última en que la sacaron como a las 21:00 horas una patrulla militar, más un funcionario de Investigaciones de nombre Nelson Muñoz. La llevaron al Cuartel General del Ejército, donde vio a Jorge Cerda, quien tenía muy mal aspecto, "estaba muy demacrado, pálido, muy cansado", estaban frente a una sala donde comenzó el Consejo de Guerra, donde lo hicieron pasar a él primero junto al administrador de Pedro de Valdivia de apellido Quiroga, quien también se veía muy cansado. Luego salieron y la ingresaron a ella sola, sala en la que había unos 6 a 7 uniformados de diferentes ramas (militares, marinos, fuerza aérea y Carabineros), sin abogado defensor. Luego de ella entró Solari. Refirió que fue condenada a 7 años de cárcel como encubridora de las actividades de Jorge Cerda, aunque al año y seis meses fue dejada en libertad. Al salir, fueron a la Cárcel de hombres a dejar a Jorge Cerda, Quiroga y al parecer a Solari, para luego ser trasladada a la Policía de Investigaciones, siempre a cargo del señor Nelson Muñoz. Luego él la trasladó a la Cárcel de mujeres (Buen Pastor). Añade que al día siguiente la fue a visitar el capellán de Carabineros, padre Zenteno, quien le entregó una carta de despedida de Jorge Cerda y le informó que él había muerto. Al respecto, vale considerar su Informe Psicológico conforme al Protocolo de Estambul agregado a fojas 2227 y siguientes, el cual constata la presencia de apremios ilegítimos relativos a perjuicio psicológico tales como amenazas de muerte, humillación, agresión psicológica, déficit en el acceso a servicios de higiene, ausencia de acceso a servicios de salud, muerte de personas significativas a nivel vincular y privación de la libertad personal durante el período de detención y condena por consejo de guerra, así como también descripciones de sintomatología aguda durante y posterior al periodo de detención. También evidencia la presencia de quiebre del proceso vital a consecuencia de la detención y condena, así como también la presencia de exclusión social y laboral a su reintegro a la vida en libertad.

A fojas 153, 503 y 2011, declaró **Mario Nelson Solari Cortés**, quien señaló que el 18 o 19 de septiembre de 1973, alrededor de las 17:00 horas lo sacaron de la Cárcel junto con el doctor Jorge Cerda y Carlos Quiroga, siendo trasladados al Cuartel General del Ejército, donde también estaba Gloria Galaz. Que lo ingresaron a una pequeña sala solo, después lo llevaron a un salón donde había 10 a 12 personas uniformadas sentadas en un estrado (militares, carabineros y personal de aviación), un poco más adelante estaba el Fiscal acusador, quien le señaló quien era su abogado defensor, el que estaba a un costado. Señala que el

presidente del Consejo de Guerra era Joaquín Lagos Osorio, quien dio inicio a la sesión, dándole la palabra al Fiscal, quien le imputó varios cargos de índole paramilitar, por armas, malversación de fondos, etc., pidiéndosele una condena de 6 años de relegación a Pisagua (su condena final fue de 3 años y un día, como encubridor de Cerda y Quiroga). Que Gloria entró sola al igual que él. Que en ese Consejo vio integrando al doctor José María Silva Uribe (fallecido, a fojas 834). Que luego finalizó el Consejo, siendo regresados junto a Cerda y Quiroga, a la cárcel de Antofagasta como a las 01:00 horas.

Carlos Enrique Pérez Díaz refirió a fojas 846, 850, 1031 y 1904, que para la época de los hechos se desempeñaba como actuario en el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, el cual una vez ocurrido el pronunciamiento militar, fue constituido en el segundo piso de la Intendencia Regional y a los tres días posteriores se constituyeron en la casa habitación del Alcaide de la Cárcel de Antofagasta, donde funcionaron por el lapso de un año aproximadamente (esto coincide con lo declarado por Alberto Herrera Feliú, como se verá más adelante). Explica que el Juzgado Militar estaba integrado por el Juez Militar, que en ese entonces era el General de Brigada Joaquín Lagos Osorio, Marcos Herrera Aracena como Auditor de Guerra, Juan Zanzani Tapia, como ayudante de Lagos y secretario del Juzgado, además del declarante como actuario. Que en las mismas dependencias de la Cárcel, funcionaron las Fiscalías Militares de Aviación y de Ejército y de Carabineros. Luego de su testimonio sobre el fusilamiento del detenido Guillermo Schmidt, dice recordar un proceso del Juzgado Militar contra Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas, quienes fueron acusados por la Fiscalía de Carabineros de participar en el famoso Plan Z, para matar al alto mando del Ejército y las Fuerzas Armadas, como hacer explotar algunas empresas. Que los inculpados eran dirigentes de la Oficina Pedro de Valdivia, Jorge Cerda era director del Hospital y el otro señor no recuerda su cargo. Refiere que los antecedentes llegaron al Juzgado Militar, se ordenó la constitución de un Consejo de Guerra, el cual después de escuchar las alegaciones del fiscal acusador y del defensor, fueron condenados a fusilamiento, sentencia que fue aprobada por el Jefe de Plaza y ejecutada en el interior de la Cárcel Pública, en la madrugada del día 19 de septiembre de 1973. Explica que acaecido un hecho que constituía delito, llegaba el parte al Juzgado Militar y éste ordenaba la ejecución del proceso a una determinada Fiscalía, terminada la investigación por esa Fiscalía, volvían los antecedentes al Juzgado Militar con un dictamen y el Juzgado Militar dictaba sentencia, previa constitución del Consejo de Guerra, el que siempre estuvo integrado por diferentes oficiales. Señala que cada vez que se necesitaba tomar declaración a una persona,

era trasladado desde la misma Unidad Penal al lugar donde funcionaba el Tribunal Militar y el traslado se hacía en forma interna, sin salir al exterior, y que el proceso de Cerda y Quiroga fue corto, imputados que negaban los hechos, nunca estuvieron confesos. Agrega que debe haber sido el Fiscal Mario Arias (fallecido, fojas 854) quien acusó a ambos detenidos.

Mauro Humberto Orlando Araya Aguilera indicó a fojas 1674 y 1781, que posterior al 11 de septiembre de 1973 fue designado en Comisión de Servicios como Secretario del Auditor de Guerra Marcos Herrera Aracena, debiendo notificar a las personas designadas para integrar los Consejos de Guerra y procurar la defensa para los inculpados, cuestión que fue muy difícil pues todos los Abogados de la Plaza se excusaron, debiendo nombrarse oficiales de Ejército como Defensores Illetrados, esto para la realización de los Consejos de Guerra, que se celebraron en dependencias de la Cárcel de Antofagasta, donde había una sala que puso a disposición el Alcaide de ese Recinto Penal, haciendo presente que fueron muchos los Consejos de Guerra que se celebraron. Explica que los Consejos estaban integrados por oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, eran presididos por un oficial superior con el grado de Coronel, después venían los vocales que eran 4 oficiales Jefes, uno de Ejército con el grado de Mayor, otro de la Armada Capitán de Corbeta, Fuerza Aérea Comandante de Escuadrilla y Carabineros con el grado de Mayor. Además de ellos estaban los Fiscales, quienes llevaban las investigaciones y acusaban a los inculpados ante el Consejo de Guerra, dicha función fue cumplida generalmente por oficiales de la Fuerza Aérea. Además había un defensor, correspondiente a un Oficial de Ejército Illetrado. Refiere que Marcos Herrera Aracena era el redactor de las sentencias. Agrega que el médico de Pedro de Valdivia era un pediatra, quien habría sido detenido por almacenar explosivos, en compañía de otro sujeto, siendo trasladados a Antofagasta, donde se habría celebrado un Consejo de Guerra en que no le correspondió participar, resultando condenados a muerte, antecedentes que se los comentó el Alcaide de la Cárcel, quien manifestó que el doctor hasta el último minuto lanzaba consignas alusivas a su inclinación política.

A fojas 2107, 2155 y 2158, declaró **Alicia Vidal Magno**, abogada defensora de la época, quien señaló que conocía al doctor Cerda Albarracín, también un ingeniero de apellido Quiroga, ambos fusilados sin un debido proceso, que a ellos no se le hizo consejo de guerra. Explica que los consejos de guerra eran conformados por abogados defensores, por ellos los abogados y en su defecto funcionarios de las fuerzas armadas, quienes los designaban como tal, debido a la falta de abogados defensores. Agrega que tiene antecedentes que

Cerda Albarracín fue detenido con otra profesional del Hospital de Pedro de Valdivia, la matrona, de nombre Gloria Galaz, condenada a relegación fuera de Antofagasta. Aclara que ella no participó en el Consejo de Guerra del señor Cerda Albarracín, pero sabe que al señor Bernardo Julio le tocó defenderlo, y que por sus dichos supo que Cerda no tuvo ni siquiera un Consejo de Guerra de verdad, y que no tuvo la posibilidad de efectuar ninguna defensa jurídica, que ninguno de los abogados defensores que normalmente participaban en los consejos de guerra asistieron al Consejo de Cerda.

A fojas 2131, se compulsó declaración de **Jorge Antonio Illanes Urrea**, detenido de la época, quien señaló que todos los Consejos de Guerra eran individuales, a pesar de que los procesaban juntos, que conoció a Jorge Cerda Albarracín, quien era pediatra de Pedro de Valdivia. Relata que una noche los sacaron de la cárcel (en Antofagasta) y los pusieron a todos amontonados, unos sobre otros, y a él le tocó ponerse sobre Jorge Cerda, quien le decía que estuviera tranquilo. Supo posteriormente que lo habían matado esa misma noche. Carlos Quiroga era el encargado de SOQUIMICH, quien más mandaba en Pedro de Valdivia. Lo que se decía es que a ellos los habían matado esa misma noche por un intento de escape, algo así, pero no que habían sido condenados por Consejo de Guerra. Conoció también a Mario Solari, quien era encargado de casas de la oficina de bienestar. Había llegado hace muy poco a Pedro de Valdivia. A Gloria Galaz no la conoció mucho. Refiere que se encontraron granadas caseras en Pedro de Valdivia, gente que las había botado, pero nunca encontraron en su oficina ni en su casa. Él no tenía nada, cree que las encontraron detrás de las murallas del campamento obrero. Eso fue lo que escuchó, ellos le cargaban esas granadas. No es efectivo, afirma, que tuviese un plan con Cerda, a él cree que lo mataron porque era la persona más profesional que existía en ese momento y a la vez era miembro del Partido Socialista, tenían que inventarle algo (esto se condice con el considerando 7º de la sentencia que condenó a muerte a las víctimas).

TRIGÉSIMO: Que, teniendo en consideración lo expresado por las dos personas que fueron detenidas junto a los señores Cerda Albarracín y Quiroga Rojas, doña Gloria Galaz y don Mario Solari, aunado a la copia de una sentencia que habría dictado el Consejo de Guerra agregada a fojas 5, se puede concluir que, al menos formalmente, se llevó a efecto un Consejo de Guerra que habría impuesto la pena de muerte a las víctimas Cerda y Quiroga. Se tiene por probado además que a esa sesiones ingresaron primero las víctimas fatales de autos, luego Gloria Galaz y luego Mario Solari.

Se concluye que al menos formalmente existió ese Consejo de Guerra porque del análisis de las pruebas que se acopiaron al expediente e incluso de la misma sentencia antes aludida

se puede advertir que ese juzgamiento estuvo muy alejado a lo que debía ser un debido proceso, sobre todo por la importancia que ameritaba se respetaran reglas mínimas del derecho a defensa al imponer penas tan graves como la de muerte. En efecto, no está claro que hayan contado con un abogado defensor y, si contaban con alguno, nada indica que le permitieran desarrollar una verdadera defensa, al efecto doña Gloria Galaz que también habría sido juzgada esa misma noche, expuso que no contó con la asistencia de un abogado, Solari señaló que él si habría tenido un abogado defensor; y en lo que concierne a don Jorge Cerda doña Alicia Vidal refirió que don Bernardo Julio, quien fue designado para su defensa, le comentó que no hubo un Consejo de verdad, y que no tuvo la posibilidad de efectuar ninguna defensa jurídica.

La sentencia que les impuso la pena de muerte se limita a referirse a "hechos y fundamentos" que contendría el "Dictamen Fiscal", que dio por reproducidos. Más adelante señala que se habría demostrado en la investigación la fabricación y distribución de granadas caseras altamente explosivas; lo mismo que el "doctrinamiento" (SIC) de carácter subversivo; la infiltración en la Fuerzas Armadas y Carabineros y el ocultamiento de armas. Refiere también que de los "antecedentes del juicio" (no indica cuáles), aparece comprobado que los reos Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas desarrollaban tales actividades en las localidades de Pedro de Valdivia prevaliéndose de su condición de militantes activos del Partido Socialista y aprovechando las facilidades que les daban los cargos que ocupaban. Enseguida se escribe en esa decisión que aun cuando los reos han negado los cargos formulados por el acusador, "las probanzas allegadas en su contra son fehacientes, toda vez que emanan de "testigos contestes en el hecho y sus circunstancias, abonados por los efectos de sus delitos consistentes en las numerosas especies y artefactos recogidos "mediante esas mismas declaraciones"(SIC).

Esa sentencia condenatoria a pena de muerte no especifica las pruebas en que se basa, en todo caso, un análisis elemental y básico, en relación con los cargos endilgados en contra de los condenados, permiten avizorar que se incurrió en una falacia de juicio, porque como se indicó previamente en esta sentencia, ellos fueron detenidos máximo el 13 de septiembre de 1973, esto es, sólo cuarenta y ocho horas después del golpe militar (pudo ser menor el tiempo incluso). La competencia para juzgar esos delitos le surgió al Consejo de Guerra recién el 11 de septiembre de 1973, de lo que se colige que las conductas que se le imputaron como el "doctrinamiento de carácter subversivo", la "infiltración en las Fuerzas Armadas y Carabineros" y "la fabricación y distribución de granadas caseras altamente explosivas" la habrían realizado en el exiguo espacio de tiempo que

transcurrió entre el golpe militar y su detención, ello demuestra por sí sola la falsedad de las imputaciones y el haberse atribuido el Consejo de Guerra una jurisdicción que no le correspondía.

Consciente este sentenciador que no tiene competencia para revisar esa sentencia, ello no obsta a que se pueda ponderar ese elemento de convicción a la luz de las probanzas que se acumularon en este proceso, por ejemplo, allí se habla de los dichos de testigos contestes, pero según lo declarado por doña Gloria Galaz le dijeron que tenían un carnet de pertenencia que demostraría que ella era la secretaria del Frente de Masa de la Juventud Socialista de Pedro de Valdivia y que también tenían testigos que declaraban en su contra, a quienes nunca vio, ni tampoco le dijeron nombres de los testigos, dándose cuenta que se trataba "de inventos de ellos", además dentro de la sala no se le formularon cargos, de los que se enteró recién cuando le entregaron copia de la sentencia los organismos de derechos humanos.

En cuanto a los hallazgos de granadas y explosivos, esta aseveración o cargo se contradice con lo expresado por el propio Joaquín Lagos Osorio en la resolución de fojas 359, en cuanto a que la unidad policial de Pedro de Valdivia no fue atacada, ni existió tentativa iniciada con tal fin, además las publicaciones efectuadas por el Diario El Mercurio, cuyas copias rolan agregadas a fojas 14 a 16, así como todas las publicaciones mencionadas en el motivo décimo octavo, ninguna de ellas registra alguna imagen de esas granadas o explosivos, lo que prueba que eso no existió porque de lo contrario esa prensa no habría dejado pasar la oportunidad para demostrar que sus fantasías tenían algún asidero; lo mismo emana de la copia de la sentencia de 13 de diciembre de 1973 agregada a fojas 90 y siguientes, en la que se menciona que las armas y explosivos que encontraron a varios de los sentenciados en ese proceso Rol N°398-73, se las habría entregado don Jorge Cerda Albarracín el 12 de septiembre de 1973, sin embargo, de la misma sentencia consta que todos esos procesados fueron detenidos el 1° de octubre de 1973, esto es, más de diez días después de la ejecución de Cerda y Quiroga, de lo que se colige que en esa misma data se habrían hallado esas especies, lo que constituye una prueba concreta de que al momento de ser éstos detenidos el 12 de septiembre de 1973, no les encontraron en su poder esas armas, granadas y explosivos, lo que demuestra fehacientemente que esos cargos también eran falsos. Era tanta la embriaguez que existía en ese medio "periodístico" (diario El Mercurio), que incluso se atrevieron a decir que las personas ejecutadas estaban confesas de los cargos, algo que ni siquiera la arbitrariedad del régimen se atrevió a tanto, porque en la sentencia que sirvió de respaldo a la ejecución de las víctimas, dejó constancia que ellos negaban los cargos.

En cuanto a la referencia a testigos contestes, quienes no se mencionan en el decreto de condena, sólo existen aquellos Carabineros que depusieron en el proceso, ninguno de los cuales señaló haber declarado en un Consejo de Guerra o ante un Fiscal, el único que manifiesta algo sobre la prueba es el que, a la sazón, era el teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza, quien habría procedido a la detención de ambas víctimas, y que señaló que para el 11 de septiembre de 1973 era Teniente de Carabineros en la Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia y recibieron información en la Comisaría (sin indicar quien habría entregado esa información) de que el señor Jorge Cerda Albarracín, director del Hospital de dicho lugar, conjuntamente con un señor de apellido Quiroga, que cumplía funciones como administrador de la mina, se habían disfrazado de trabajadores de la mina, habrían accedido a las dependencias interiores y se habían tomado un polvorín de explosivos y distribuido dichos explosivos a los obreros, con la finalidad de atacar el Cuartel de Carabineros, apoderarse del armamento y la munición, luego marcharían a la ciudad de Antofagasta para tomarse un Regimiento. Por dicho motivo, refiere que se dio la orden por parte del Comisario de María Elena de apellido Otero que esas personas debían ser detenidas, encomendándole a él la misión; para tal efecto, se habría hecho acompañar por dos o tres Carabineros, con los cuales comenzaron a buscar a estas personas, a quienes ubicaron en el interior de la mina, y una vez habidos, les pidieron que los acompañaran al Cuartel y "sin oponer resistencia" los acompañaron. Añadió que se procedió al allanamiento de muchas casas donde había información que tenían explosivos, logrando ubicar una gran cantidad que se acompañó como prueba, conjuntamente con los detenidos, al Juzgado Militar de Antofagasta, cuyo Juez era el Comandante de la División, General Lagos. Afirma que el documento que se confeccionó era bastante extenso, constaba de a lo menos 4 hojas y detallaba todo el procedimiento realizado, firmado por el Comisario Otero, el Capitán Maluje y todo bajo la supervisión del Prefecto de Tocopilla, Comandante Luciano Astete Almendra, recordando que los detenidos y el documento antes mencionado, los trasladó personalmente a la ciudad de Antofagasta, entregándoselo en sus propias manos al General de la División. Añadió que una vez entregados los documentos al General Lagos, se retiró de la oficina regresando a Pedro de Valdivia en el mismo instante, siendo aproximadamente las 14:00 horas. O sea, este testigo presencial de la detención, quien la practicó junto a un par de funcionarios, por lo que debe presumirse que fue el encargado de hacer la investigación, a lo más menciona haber revisado varias casas y haber encontrado explosivos, algo nada extraño en zona minera, tampoco mencionó nada sobre las granadas caseras, la infiltración de las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo mismo

que sobre los demás cargos que se le habrían imputado a Cerda y Quiroga; tampoco refirió que los domicilios donde habrían encontrado los explosivos les pertenecieran a estas víctimas ejecutadas; y aunque este imputado falta a la verdad en cuanto a la detención porque hay testigos presenciales que apreciaron cuando detuvieron a don Jorge Cerda cerca del staff de solteras donde vivía doña Gloria Galaz, como expuso doña Luisa Barrios Williams, esto es, en plena ciudad y no en el mineral, de sus dichos se desprende que el único medio de prueba habría sido un parte policial de cuatro hojas que entregaron a Lagos Osorio en la Intendencia, y que después de esta diligencia volvieron inmediatamente a Pedro de Valdivia, es decir, para nada menciona haber prestado declaración ante un Consejo de Guerra o ante un Fiscal. Lo mismo refieren Zoilo Fernando Pezoa Muñoz, quien recuerda haber sido testigo de la presencia en el cuartel de tres detenidos de esas características, uno era un doctor de apellido Cerda, otro administrador de la Empresa Soquimich y una matrona, quienes estaban custodiados por militares, quienes además estuvieron un par de horas, los que fueron trasladados a Antofagasta custodiados por militares y carabineros de la unidad (Teniente Muñoz, Curiqueo y él). Recuerda que a estas personas las entregaron con vida en la Intendencia de la ciudad, desconociendo luego el destino final; Rosauro Segundo González Molina expresó que luego de ser detenido, el médico fue llevado a la Subcomisaría, en donde estuvo algunas horas y de allí fue trasladado en vehículo policial a Antofagasta, en donde fue entregado a un Regimiento. Que luego de ser entregado, se regresaron inmediatamente a Pedro de Valdivia, ignorando lo ocurrido después con el detenido. Jorge Carrasco Leiva, recuerda que se hizo un grupo mixto entre funcionarios militares de Calama que estaban en la zona y los suboficiales más antiguos de la Subcomisaría, a fin de detener a un doctor Jorge Cerda Albarracín y al Gerente de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, que estaban siendo buscados por andar promoviendo desórdenes dentro de la planta, incitando a la gente a la revolución y por confeccionar explosivos para efectuar atentados. Recuerda que ellos fueron detenidos unos días más tarde y enviados a la Intendencia de Antofagasta, ya que le correspondió acompañar al Teniente Osvaldo Muñoz Sanhueza a dicho lugar a entregar a los detenidos, quienes se hicieron cargo de ellos. Relata que Carlos Quiroga le entregó unos documentos personales para su esposa y una guincha que portaba, lo que le dio a entender que sabía lo que le iba a pasar, y accedió a su solicitud, entregándole a su regreso los documentos a su esposa. Manifiesta que el fusilamiento de ambos los dejó muy conmocionados porque eran buenas personas, sobre todo el doctor Cerda, quien atendía a su familia y todos le tenían mucha estima. Como puede apreciarse de los dichos de este último testigo, si es que los cargos hubiesen

sido verdaderos, no había razón para tanta consternación al saber que habían sido ejecutados, lo que por sí solo desvirtúa la necesidad de sancionarlos de esa u otra manera.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que de lo expuesto en las motivaciones precedentes cobran valor en toda plenitud el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo que señaló que: "del análisis de la sentencia - obtenida de otra fuente- la Comisión pudo formarse convicción de que la ejecución de Cerda y Quiroga se hizo al margen de un debido proceso, por lo que su muerte constituye un hecho de violación de los derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado. Se funda dicha convicción en las ya dadas para todos los Consejos de Guerra y especialmente las siguientes:

-Los afectados no contaron con una debida defensa letrada, enterándose sus familiares de la existencia del Consejo de Guerra cuando ya habían sido ejecutados;

-En el fallo examinado no aparecen debidamente probadas las acusaciones en contra de ambos y la negativa de los acusados de haber participado en los hechos que se le imputaban, fue desechada sin ponderarla;

-Fueron procesados y condenados de acuerdo al procedimiento y la penalidad de tiempo de guerra, en circunstancias que los eventuales delitos habrían sido cometidos con anterioridad a la declaración del estado de guerra;

-No se consideró la atenuante de irreprochable conducta anterior a la que tenían derecho y se les hizo valer varias agravantes, incluso la específica del artículo 213 N°1 del Código de Justicia Militar, que sólo es posible de configurar respecto de militares que actúan en acto de servicio."

De este modo, no obstante haberse probado la existencia de un Consejo de Guerra que habría condenado a muerte a don Jorge Cerda y a don Carlos Quiroga, sus falencias impiden darle valor jurídico para justificar los asesinatos de dichas víctimas.

EN CUANTO AL FUSILAMIENTO

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que para demostrar el hecho del fusilamiento de las víctimas se reunieron testimonios presenciales y de oídas que a continuación se indica: a) **Mario Nelson Solari Cortés**, a fojas 153, 503 y 2011, refirió que luego de finalizado el Consejo al que fue trasladado el 18 o 19 de septiembre de 1973, fueron regresados junto a Cerda y Quiroga, a la cárcel de Antofagasta como a las 01:00 de la madrugada. Añadió que horas después, sintió que llamaron y sacaron encadenados de sus respectivas celdas a Cerda y Quiroga, quienes pasaron por delante de su celda, y al cabo de una hora más o menos, se sintieron unos disparos, sin que ellos regresaran a sus celdas. Al día siguiente, un gendarme de apellido Aguirre le comentó que habían fusilado a

sus dos compañeros, y posteriormente pudo ver el lugar donde ambos fueron fusilados dentro de la cárcel. Concluyendo que el fusilamiento debe haber sido como a las 04:00 horas, la madrugada del 19 o 20 de septiembre de 1973. b) **Alberto Amado Herrera Feliú**, a fojas 560 y 564, señaló que para la época de los hechos se desempeñaba como Alcaide de la Cárcel de Antofagasta. Sobre el fusilamiento de Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas, expuso que se recibió la orden de fusilar a estas dos personas, pero como no contaban con personal, representaron dicha situación y se dispuso la presencia de soldados conscriptos para conformar el pelotón, sin recordar día exacto, pero que se pidió la sentencia ejecutoriada y luego se dispuso el protocolo, esto es, se convocó al Fiscal Militar Marcos Herrera, al cura de quien no recuerda su nombre, al médico de quien tampoco recuerda sus datos, pero que era de gendarmería. Refiere que él también presencié los fusilamientos en su calidad de Alcaide del Recinto Penal. Recuerda a un reo de apellido Solari, quien fue condenado, pero no a pena de muerte. c) **Ronald Carlos Bennett Ramírez** indicó a fojas 660, 664 y 784, que para el 11 de septiembre de 1973 ocupaba el cargo de Alcaide Subrogante de la Cárcel de Antofagasta y que luego del fusilamiento del detenido Schmidt ocurrido al interior de dicho recinto el día 12 de ese mes, siguieron llegando detenidos a la Cárcel por diferentes causas, especialmente motivadas o de tipo subversivo o político, siempre con órdenes de ingreso de la Fiscalía Militar y de Carabineros. Que en los días posteriores, el Consejo de Guerra dispuso el fusilamiento de don Jorge Cerda, un médico a quien acusaban por fabricación de explosivos, conjuntamente con un arquitecto, al parecer de nombre Carlos Quiroga, que como a esa altura él no estaba en el cargo de Alcaide, las decisiones fueron adoptadas por el Capitán Herrera, quien recibió las órdenes directamente del Consejo de Guerra. Recuerda que el Capitán Herrera dispuso que el Teniente Hugo Cortés Jopia se hiciera cargo del pelotón de fusilamiento y diera cumplimiento a la orden del consejo de guerra, pelotón que fue integrado con las mismas personas del fusilamiento de Schmidt, y se materializó en horas de la noche. Afirma que también estaba presente el Consejo de Guerra, el auditor de guerra, él mismo y por supuesto el alcaide de la cárcel. Que los reos fueron ubicados en el banquillo, amarrados de manos y con su vista vendada, observando que los reos estaban completamente descompuestos y nerviosos por la situación, luego se dio la orden de disparar por el oficial a cargo, con su sable de servicio disparando los funcionarios, cayendo inmediatamente al piso los reos, observando que el médico de apellido León certificó sus muertes y luego sus cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad, ubicada a un costado del Hospital Regional, por funcionarios de Gendarmería. Precisa que el

mismo día que hubo Consejo de Guerra, fusilaron a Cerda Albarracín y a Quiroga. d) **Hugo Arturo Cortés Jopia** declaró a fojas 773, 884, 2396, y en careo de fojas 2429, señalando que desde el 1 de enero al 29 de septiembre de 1973, prestó funciones en el Presidio de Iquique, que para la época de los hechos se encontraba en Antofagasta haciendo uso de su feriado legal por motivo de fiestas patrias (versión que coincide con lo declarado por Abel Álvarez Gallardo a fojas 1052). Que el día 18 o 19 de septiembre de ese año, o en fecha posterior, lo fueron a buscar personal de Gendarmería de Antofagasta, quienes le comunicaron que por orden del Alcaide la Cárcel de dicha ciudad, don Alberto Herrera Feliú, debía presentarse de inmediato en la unidad Penal, cosa que hizo, y en su oficina el Capitán le notificó que se le suspendían sus vacaciones y debía asumir funciones en ese lugar por razones de buen servicio, lo que ocurrió a las 23:00 horas. Seguidamente, le ordenó que debía participar en un procedimiento de Fusilamiento, le dijo que debía cumplir funciones como oficial a cargo del Pelotón que cumpliría la sentencia, pero como él no tenía idea sobre éste tipo de procedimientos, recibió una pequeña instrucción de parte del mismo Oficial, quien le proporcionó un uniforme de servicio y un sable, con el cual debía impartir al pelotón de fusilamiento la orden de disparar. Luego lo trasladó al lugar habilitado para cumplir la orden, se trataba de la intersección de las calles Curicó esquina Prat, bajo el puesto de vigilancia N°1, donde se encontraban formados seis funcionarios de Prisiones, quienes estaban formados de a tres, los primeros hincados y los segundos de pie, todos con su correspondiente carabina o fusil de guerra y orientados de poniente a oriente. Delante de ellos, había dos personas vendadas y amarradas a un poste de madera, de sexo masculino, sin poder precisar si estaban de pie o sentados y detrás de ellos había unos sacos de arena, simulando un paredón. Conforme a lo ordenado, se posicionó entre las personas que estaban vendadas y el pelotón de fusilamiento, eligiendo el costado sur, en un lugar donde el pelotón pudiera ver el sable, que luego levantó en silencio ante una señal del capitán Herrera y bajó rápidamente, sintiendo el disparo del pelotón a los condenados, quienes no cayeron, por lo que deben haber estado amarrados. Señala que este hecho ocurrió pasada la media noche, el cual fue muy rápido. Horas después, el médico de la unidad de Prisiones le dio Licencia Médica por cinco días, producto del mal estado en el que se encontraba, retirándose a su domicilio esa misma noche, sin tener mayores antecedentes sobre lo ocurrido posteriormente. Luego volvió a Iquique y al poco tiempo es destinado definitivamente a la Cárcel de Antofagasta. Manifiesta que las órdenes que cumplió personal de Prisiones de la época, fueron emitidas por los Tribunales de Justicia, que estaban

en funciones y desconoce qué Tribunal en particular emitió la orden para fusilar a las dos personas mencionadas. Afirma que en ningún momento el capitán Herrera le exhibió algún documento que le ordenara tal procedimiento, que todo fue verbal. e) **Abel Álvarez Gallardo** indicó a fojas 840, 843 y 1052, que para la época de los hechos se desempeñaba como profesional del área de salud o servicio médico en la Cárcel de Antofagasta, que en esos años estaba a cargo del doctor Drago Slatar Ostogic. Recuerda que un día, llegó a la enfermería un reo, que se dio a conocer como Médico señalando su nombre como Jorge Cerda, pidiéndole algunos analgésicos y ofreciéndole sus servicios como médico, que después supo que la Fiscalía lo había sentenciado a muerte con otro señor, ambos de la localidad de Pedro de Valdivia. Que el fusilamiento del doctor Jorge Cerda se materializó a los pocos días de su ingreso a la Cárcel, en horas de la noche bien tarde, que ambos fueron sacados de sus respectivas celdas, para ser trasladados al lugar habilitado como paredón de fusilamiento, en la línea de fuego, bajo la caseta de vigilancia N°1, justo en la intersección de las calles Prat esquina Curicó. Indica que en esta oportunidad también le correspondió participar del procedimiento, caminaron con los reos por el pasillo o línea de fuego, ellos iban muy tranquilos hacia el paredón y a su llegada al lugar fueron ubicados en el banquillo ambos condenados, fueron amarrados y vendados, con grilletes en sus pies y manos caminaban por el pasillo. Seguidamente, el doctor Dionisio León Benavides, les puso los blancos y luego el pelotón de fusilamiento se ubicó hacia el costado poniente, recuerda que había mucha gente obstaculizando la visibilidad. Añade que el Teniente Hugo Cortés Jopia se ubicó a un costado del pelotón y con su sable de servicio dio la orden de disparar levantándolo y bajándolo lentamente. Disparados los fusiles Mouser, ambos condenados se desvanecieron hacia un costado y el mismo médico se acercó a constatar el deceso de las dos personas. Posteriormente, prosigue, fueron sacados los cuerpos del doctor Cerda y la otra persona fusilada, ignorando sus destinos finales. Agrega que los dos fusilamientos que presenció se llevaron a cabo a través de consejo de guerra y de cuyos integrantes recuerda al abogado Marcos Herrera quién trabaja en la Fiscalía Militar, también estaba un funcionario de esa entidad de apellido "Pérez", que era Sargento Segundo y las oficiaba de actuario. f) **Julio Abel Quiroga Cubillos** señaló a fojas 1432, 2404 y 2408, y en careo de fojas 2429, que para la época de los hechos se desempeñaba como Jefe de la Guardia en el Penal de Antofagasta, que pasados unos días del fusilamiento del carabinero Schmidt, se dispuso un nuevo fusilamiento para dos personas, entre las cuales había un médico. Que fue nombrado Jefe del Pelotón de Fusilamiento al igual que para el fusilamiento anterior, y como integrantes fueron nombrados

diez funcionarios, algunos se repitieron, recordando a Yau, Romero, Andrés y como segundo apellido Zapata. Que la ceremonia fue igual que para el fusilamiento de Schmidt, en cuanto a la instrucción del personal y la preparación del armamento que fue dejado en la guardia, uno con munición de fogeo. Se dispuso la misma hora, esto es, a las 05:00 horas de la mañana, ubicándose dos banquillos en el mismo lugar, con los mismos sacos de arena formando un paredón, ejecutándose lo ordenado en los mismos términos y en esta oportunidad el médico del Penal certificó la muerte de uno y otro quedó con signos de vida, a quien le correspondió dar el tiro de gracia, cuestión que ejecutó, asumiendo que puede haber sido el doctor, quien posteriormente supo era de apellido Cerda. Luego sacó al pelotón de fusilamiento, retirándose del lugar y luego siguieron trabajando. Refiere que Hugo Cortés Jopia participó en el siguiente fusilamiento, no coincidiendo con él en el de las dos personas. Este segundo fusilamiento puede haber sido después de fiestas patrias. Afirma que no le mostraron ninguna sentencia, decreto u orden que ordenaba ejecutar a los fusilados, que normalmente eso ocurre en períodos normales, en tribunales, llegaba una orden por escrito y la recibía el oficial de guardia. Pero en estas ocasiones no. i) **Pedro Segundo Chiguay Navarro** manifestó a fojas 1826, que para la época de los hechos se desempeñaba como gendarme en Antofagasta. Recuerda que a los pocos días de la ejecución de Schmidt, hubo una doble ejecución al interior de la cárcel de Antofagasta, desconociendo el nombre de los ejecutados, pero tomó conocimiento que eran personas llevadas desde el interior de la región, de María Elena o Pedro de Valdivia, pero al parecer uno era Médico y el otro Ingeniero, no teniendo ningún tipo de participación en dicha ejecución. j) **Osman Segundo Romero Mejías** indicó a fojas 1839, que para el año 1973 trabajaba como gendarme en la Cárcel de Antofagasta, desempeñándose como conductor, y que conoció a Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga cuando llegaron a la cárcel, quienes llegaron trasladados por una patrulla de Ejército, que se constituyó el Consejo de Guerra y ambos fueron condenados a fusilamiento, posteriormente luego de ser notificados fueron trasladados hasta la oficina del Alcaide, donde se les dio permiso para escribir una misiva de despedida a su familia, y que el único que escribió fue Quiroga, enterándose ahí que Cerda era médico y Quiroga ingeniero, ambos de la Salitrera Pedro de Valdivia, siendo ejecutados por otros funcionarios de Gendarmería. k) **Luis Hernán Vega Ávalos** declaró a fojas 1869, que al lado, pero por fuera del recinto de la cárcel de Antofagasta, había un inmueble donde pernoctaba el Alcaide, y que en ese lugar se verificaban algunos consejos de guerra. Que mientras estuvo a cargo de la Oficina de Estadística de la Cárcel, se

verificaron otros tres fusilamientos, además de los 14 reos sacados por la Caravana de la Muerte. Precisa que hubo dos fusilados de la empresa salitrera de María Elena o de Pedro de Valdivia, un médico y otro que no recuerda, quienes estuvieron detenidos en la cárcel y fueron ingresados en los libros, incluso a propósito de los 14 fusilados, él a ellos los tenía ingresados en los libros y para dejar constancia de su condición, puso con letra roja, "fusilados" sin ninguna otra mención, ya que no supo cómo rebajarlos de los libros, ya que no se le dio ninguna instrucción en ese sentido. Reitera que los dos de la salitrera estaban ingresados en estadística, y lo vio y tuvo contacto con ellos, pero no recuerda sus nombres. El médico, señala, era muy joven. Ambos fueron fusilados en la Cárcel, no mucho tiempo después del 11 de septiembre, pero antes de los 14 que fue el 23 de octubre. Afirma que hubo 4 fusilamientos oficiales en la cárcel, y que el Capitán Herrera, cada vez que se verificaba un fusilamiento, ponía un crespón negro en la puerta, y de esa manera se enteraban de lo que iba a ocurrir. l) **Emeterio Segundo Leal Ríos** indicó a fojas 2161, que para el 11 de septiembre de 1973 trabajaba como Comandante de guardia en la cárcel de Antofagasta, recuerda que al interior fusilaron al doctor Cerda y a Quiroga, de quienes dijeron que habían dinamitado el retén de carabineros de Pedro de Valdivia. El doctor Cerda hizo unas 6 cartas aproximadamente, Quiroga no hizo nada. Refiere que se notificó allí mismo en la cárcel, posiblemente por Joaquín Lagos. m) **Fortunato del Tránsito Pérez Opazo** refirió a fojas 2223, que para 1973 era gendarme de la cárcel pública de Antofagasta, que por comentarios supo del fusilamiento de Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga ocurrido el 20 de septiembre de ese año, y que los pudo ver al interior de la cárcel, ya que por funciones los debía trasladar y custodiar como a cualquier detenido. Sabe que se realizaron fusilamientos al interior de la cárcel porque eso era de público conocimiento y se comentaba entre los mismos gendarmes que los fusilamientos se realizaban en el llamado "Patio de Nadie", el cual es el espacio entre la muralla de 4 metros aproximadamente que conecta con el exterior y una de dos metros más menos que conecta con el lugar donde están los reos. Dice no constarle que dentro del penal se haya realizado algún Consejo de Guerra, ya que las oficinas no son tan grandes como para no darse cuenta de eso, se le ocurre que eso debe haberse hecho en la casa de al lado.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, con las declaraciones consignadas en el motivo precedente, se logró acreditar la efectividad del fusilamiento al interior de la Cárcel Pública de Antofagasta, instancia en donde un contingente de gendarmes, bajo el mando del Julio Abel Quiroga Cubillos, procedieron a fusilar a las dos víctimas en forma simultánea, para posteriormente ser derivados a la morgue del Hospital

Regional de Antofagasta. Que durante el fusilamiento se encontraba presente el capellán de Carabineros Gregorio Centeno (a fojas 52 figura como Capellán 2° de la Primera Zona de Inspección de Antofagasta) y un médico de apellido León, sin perjuicio de que en los certificados médicos de defunción de las víctimas a fojas 11 y 234, fueron emitidos por los doctores Mamerto Gorena y el Sr. Drago Zlatar Ostojic (a fojas 55 figura este como Médico 2° de la dotación de la Segunda Comisaría de Antofagasta), quienes atestiguan y certifican sus muertes (incluso el doctor Gorena se encargó del Informe de Autopsia de don Carlos Quiroga a fojas 317). En cuanto a la controversia que surgió por la posibilidad que hubiese actuado a cargo del pelotón el teniente Hugo Arturo Cortés Jopia, hay un antecedente objetivo que permite al tribunal discernir esa circunstancia, y es lo declarado por Julio Quiroga Cubillos, en cuanto a que: "el médico del Penal certificó la muerte de uno y otro quedó con signos de vida, a quien le correspondió dar el tiro de gracia, cuestión que ejecutó, asumiendo que puede haber sido el doctor, quien posteriormente supo era de apellido Cerda", lo que coincide con lo expresado en la autopsia de don Carlos Quiroga, donde se constató que recibió un disparo en la cabeza percibiéndose un orificio circular de entrada de proyectil en sien derecha, sin salida. A través del cuero cabelludo se palpa fractura ósea. Si Cortés Jopia hubiese tenido que dar un tiro de gracia, obviamente no lo habría olvidado.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, con la prueba aludida en los motivos precedentes, consistente en instrumentos públicos y declaraciones de testigos, presenciales y de oídas, según se ha venido analizando en cada caso, se ha demostrado fehacientemente que las víctimas don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, fueron detenidas no antes del día 12, ni después del día 13 del mes de septiembre de 1973 en la Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia, por funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de dicha localidad, en compañía de personal militar, quienes los trasladaron a dependencias de dicha Subcomisaría, dependiente de la Comisaría de María Elena (ésta a cargo de Ramón Otero). Cabe mencionar que durante sus detenciones les infligieron apremios físicos, lo que es avalado por el testigo Drago Rosso, quien refirió haber visto a Cerda y Quiroga "muy golpeados" y que al día siguiente vio que ya no podían caminar por sí solos, también los dichos de Guzmán Núñez Núñez, quien declaró haber visto "muy torturado" al médico Jorge Cerda, amarrado y con la cabeza agachada. Luego de algunas horas, junto a otros dos detenidos (Gloria Galaz Álamos y Mario Solari Cortés), fueron trasladados a Antofagasta por personal de Carabineros y custodiados por militares, siendo entregados en la Intendencia de dicha ciudad a personal de Ejército, para luego pasar por la

Tercera Comisaría de Carabineros de la ciudad, y finalmente terminar en la cárcel de Antofagasta, lugar desde donde eran sacados repetidas veces para interrogatorios, los cuales eran efectuados con apremios físicos (recordar testimonio de Mario Solari, secundado por los dichos de Gloria Galaz quien refiere haber visto a Jorge Cerda que "estaba muy demacrado, pálido, muy cansado", y a Quiroga, quien también se veía físicamente mal, muy cansado, los dichos de la testigo Gladys Albarracín, quien testificó varias señales de apremios en el cadáver de su sobrino manifestando que además de las huellas de los disparos, su genitales los tenía completamente negros o morados, y los dichos del testigo Jorge Illanes, quien indicó haber sido posicionado encima de Jorge Cerda en su última noche, cuando fueron sacados de la cárcel), para posteriormente, producto de una sentencia de Consejo de Guerra integrado por oficiales de las distintas ramas de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, dictada el 19 de septiembre de 1973 (y aprobada por el Jefe de Zona en Estado de Sitio, Sr. Joaquín Lagos Osorio), ser condenados a muerte, lo que se materializó al interior de la Cárcel Pública de Antofagasta, mediante fusilamiento el día 20 del mismo mes, alrededor de las cinco horas, por un pelotón conformado por funcionarios de Gendarmería, comandados por el Teniente Julio Quiroga Cubillos de dicha institución.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS:

TRIGÉSIMO QUINTO: Que la acusación fiscal se dedujo por los delitos de detención ilegal, sin embargo los querellantes asistidos por el letrado Cristian Cruz Rivera, acusaron por su cuenta por los delitos de homicidio calificado, previsto en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, atribuyendo al acusado la calidad de cómplice; el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como autor del delito de secuestro simple previsto en el artículo 141 inciso 1° del Código sancionador y el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Luciano Astete Almendras, como autor de dos delitos de secuestro calificado tipificados en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal vigente a la época de los hechos, en grado de consumado y reiterado, cometidos en perjuicio de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, en atención a que la muerte de ambas víctimas constituye un grave daño durante su privación de libertad, agregando que dicha privación se hizo sin orden judicial ni administrativa y carece de los requisitos necesarios para ser reconocido como detención ilegal y, por otro lado, la muerte de las víctimas obedece a una política represiva de la época de llevar a cabo procesos judiciales

simulados y de manera acelerada en espacios de tiempos mínimo para efectos de justificar sus muertes.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en el motivo décimo tercero se expusieron los elementos del tipo de cada una de estas tres figuras penales, y de lo que se ha venido considerando en las fundamentaciones precedentes, particularmente de lo que se expuso en el considerando trigésimo, no pudo concluirse que la detención de don Jorge Cerda Albarracín y de don Carlos Quiroga Rojas se haya debido en razón de la persecución de un delito y si bien se aludió por un testigo haber realizado un parte policial dando cuenta de la detención y que se habría puesto a los detenidos a disposición del Tribunal Militar en tiempo de guerra, y que un gendarme refirió que los habría ingresado en el libro de estadísticas del centro penitenciario donde fueron llevados y luego ejecutados, al no concurrir o no haberse demostrado que falló el primer requisito aludido, no cabe sino calificar esa detención decretada por los más altos funcionarios de Carabineros con competencia en la localidad de Pedro de Valdivia, como una detención y privación de libertad sin derecho, causándole grave daño, como fue la pérdida de la vida.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, los hechos descritos en los motivos precedentes son constitutivos del delito de secuestro calificado, en grado de consumado, previsto en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal, puesto que de la detención y encierro sin derecho de las víctimas Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas, las cuales fueron practicadas por funcionarios de Carabineros de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia junto a contingente del Ejército que se trasladó hasta esa ciudad con posterioridad al golpe de estado, resultó la muerte de ambas víctimas mediante fusilamiento, lo que constituye, por tanto, un daño grave en la persona o intereses de ambos. Al respecto, vale considerar los testimonios de Mario Solari, quien narra torturas durante la reclusión de las víctimas, incluso con aplicación de corriente, vale aquí reiterar sus dichos, porque al referirse a ellos, -se incluye junto con don Jorge Cerda y don Carlos Quiroga-, expuso: "En Antofagasta, fueron llevados a la Intendencia, luego a la Tercera Comisaría de Carabineros, donde fueron brutalmente golpeados, con golpes de pies, puños y culatazos. Que en esta unidad los interrogaban por armas, mientras los golpeaban "salvajemente". Luego los trasladaron a la Cárcel de Antofagasta, donde en los días posteriores nuevamente eran sacados a interrogatorios por personal militar y de Carabineros, quienes los torturaban con aplicación de corriente. Para esto, los Carabineros los trasladaban a la Tercera Comisaría y los militares a la población Séptimo de Línea, donde tenían un polígono de tiro" (lo que se condice con lo declarado por Gladys Albarracín a fojas 331, quien vio

los genitales de su sobrino "completamente negros o morados" y sus ojos morados, presume por los golpes que recibió), además de las diversas declaraciones de gendarmes que participaron, o al menos presenciaron el fusilamiento de ambas víctimas. Por tanto, es un hecho comprobado la muerte de los señores Cerda y Quiroga a manos de agentes del Estado, derivado de los secuestros cometidos en su contra.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, de este modo, dichas conductas, cometidas por agentes del Estado, afectaron uno de los bienes jurídicos más relevantes, consagrado como derecho humano fundamental en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, la libertad en su aspecto material, es decir, el derecho a decidir sin interferencias coactivas de terceros su ubicación espacial, deteniéndolos y encerrándolos en un recinto fuertemente custodiado por personal armado del que estuvieron impedidos de salir.

Es más, a consecuencia de la pérdida de libertad de las víctimas se produjo el debilitamiento de sus defensas privadas, situación aprovechada por los agentes para darles muerte posteriormente mediante fusilamiento, circunstancia que, por cierto, satisface una de las hipótesis de cualificación del delito de secuestro, puntualmente aquella tipificada en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, vale decir, que a consecuencia del encierro o detención haya resultado un daño grave en la persona del encerrado o detenido.

En consecuencia, se ha demostrado en este proceso que concurren los requisitos establecidos en el artículo 141 inciso final del Código Penal, constituyendo los hechos establecidos en este proceso los delitos de secuestro calificado de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, acaecidos en la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia entre el 12 y 13 de septiembre de 1973, culminando con el fusilamiento de ambos en la madrugada del 20 de septiembre del mismo año, en la Cárcel de Antofagasta.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, de la forma en que se ha venido decidiendo, se recalificarán los hechos de la acusación fiscal en el modo propuesto en las motivaciones precedentes y por las mismas razones se desestimarán las acusaciones particulares del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el delito de secuestro simple previsto en el artículo 141 inciso 1° del Código Penal, en grado consumado y reiterado. La misma suerte correrá la acusación particular del abogado querellante y demandante civil Cristian Cruz Rivera a fojas 2458, sobre recalificación a homicidio calificado, por cuanto no se ha logrado acreditar que las acciones realizadas por los funcionarios policiales de Pedro de Valdivia iban encaminadas a la concreción de dicho delito. Vale considerar a este respecto, los dichos de Osvaldo Muñoz Sanhueza a fojas 481,

quien refiere que al momento de ser entregados los detenidos al General Joaquín Lagos, este le habría preguntado "por qué los había traído", dando cuenta de su desconocimiento de la situación (lo cual se suma a los dichos de Gerardo Maluje, quien refirió que en menor posibilidad cree que la orden emanó del propio General). También lo declarado por Carlos Pérez Díaz a fojas 847, donde señala que la investigación contra Cerda y Quiroga era llevada por la Fiscalía de Carabineros, y que solo después llegaron los antecedentes al Juzgado Militar, es decir, no había una acción encaminada a dar muerte a las víctimas de autos, por cuanto la judicatura militar no estaba instruida desde el inicio sobre los pormenores ocurridos en la localidad de Pedro de Valdivia.

DELITO DE LESA HUMANIDAD:

CUADRAGÉSIMO: Que, respecto de esos secuestros calificados, además, debe considerarse que de los antecedentes allegados al proceso fluyen algunos elementos para determinar cuáles fueron las verdaderas razones para detener a Cerda y Quiroga por los funcionarios de Carabineros, y si bien se les trató de vincular a un ilusorio plan terrorista, lo cierto es que queda claro que fueron razones políticas las que motivaron a los hechores a detener a las víctimas, lo cual constituye delitos de lesa humanidad (tal como también se estableció en la sentencia definitiva de la causa a la vista Rol N° 2182-1998 "Tocopilla: Vitalio Mutarello Soza"), como se dirá a continuación.

El informe de fojas 185 y 403 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, indica que: "el 20 de septiembre de 1973 fueron ejecutados en cumplimiento de una sentencia de Consejo de Guerra, Jorge Antonio Cerda Albarracín, de 30 años de edad, médico del Hospital de Pedro de Valdivia, dirigente socialista; y Carlos Desiderio Quiroga Rojas, de 32 años de edad, administrador de la Salitrera Pedro de Valdivia, militante socialista. Ambos fueron detenidos por Carabineros en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973 y enviados a la Cárcel de Antofagasta, recinto donde permanecieron hasta el día de sus ejecuciones. Acusados de fabricación y distribución de granadas caseras, de adoctrinamiento subversivo, de espionaje y subversión en contra de las Fuerzas Armadas y participación en el plan Z, fueron condenados a muerte por sentencia de 19 de septiembre, del Consejo de Guerra rol 347.73 del Primer Juzgado Militar de Antofagasta. La ejecución se practicó el día 20 del mismo mes. Los restos, que además de las huellas de balas presentaban señales de torturas, fueron entregados a sus familias para su inhumación". Agrega que "No obstante haber sido solicitado a la autoridad correspondiente el expediente respectivo, no fue posible tenerlo a la vista. En todo caso,

del análisis de la sentencia -obtenida de otra fuente- la Comisión pudo formarse convicción de que la ejecución de Cerda y Quiroga se hizo al margen de un debido proceso, por lo que su muerte constituye un hecho de violación de los derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado". Según ya se dejó establecido, el secuestro y posterior ajusticiamiento de las víctimas correspondió a ejecuciones carentes de toda justificación, de responsabilidad de agentes del Estado, en violación de los derechos humanos más fundamentales, sin que se haya demostrado siquiera el intento de atentado o del porte de granadas caseras y explosivos que se les atribuyó, menos la infiltración de las Fuerzas Armadas y Carabineros y tampoco el "Doctrinamiento" (SIC) de fuerzas paramilitares. Es más, la persecución sufrida por las víctimas se da en un contexto de ubicación por parte de las fuerzas de orden y seguridad de Pedro de Valdivia, de todas aquellas personas militantes del Partido Socialista de la zona, u otros partidos contrarios al régimen militar. Si atendemos a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° N° 78.951-2016, en sentencia de 25 de mayo de 2017, en que manifestó: "CUARTO: Que, sin embargo, como reiteradamente ha señalado esta Corte y recoge acertadamente el recurso, se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes." Y más adelante el mismo fallo señala: "SEXTO: Que con ocasión del estudio del elemento de contexto del crimen de lesa humanidad, contenido en el preámbulo del artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la doctrina más autorizada ha señalado que dicho precepto convierte en crimen de lesa humanidad los actos individuales enumerados en dicha disposición, en tanto cumplan con el test sistemático general. Esta prueba se propone para garantizar que los actos individuales, aislados

o aleatorios, no lleguen a constituir un crimen de lesa humanidad. Mientras que el término "generalizado" implica un sentido más bien cuantitativo: que un acto se llevará a cabo a gran escala, involucrando a un gran número de víctimas, la expresión "sistemático" tiene un significado más bien cualitativo que requiere que el acto se lleve a cabo como resultado de una planificación metódica. Sin perjuicio que la jurisprudencia siempre ha optado por una lectura disyuntiva o alternativa de estos elementos, se ha destacado que lo más importante ya no es el significado aislado que aporta cada uno de estos elementos expresados de modo alternativo, sino el que adquieren al interconectarse, en la medida en que la "comisión múltiple" debe basarse en una "política" de actuación, sólo su existencia convierte múltiples actos en crimen de lesa humanidad. Este elemento -de la política- deja claro que es necesario algún tipo de vínculo con un Estado o un poder de facto y, por lo tanto, la organización y planificación por medio de una política, para categorizar de otro modo los delitos comunes como crimen de lesa humanidad (Ambos, Kai. "Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte Penal Internacional"); SÉPTIMO: Que en ese orden de ideas, cabe reiterar que el recurrente arguye que respecto de las hipótesis que prevén los crímenes contra la humanidad, a saber, el "ataque generalizado" y el "ataque sistemático" contra la población civil, en el caso de estos antecedentes nos encontramos frente a un ataque indiscriminado, que no exige que la víctima haya tenido una militancia política u opción política definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opción política de la víctima, lo cual supone que la propuesta de nulidad deriva de la consideración que el régimen imperante a la época de la muerte del ofendido, correspondió con una política estatal de control que autorizó a los agentes del Estado para detener, afectar la integridad e incluso privar de la vida a los ciudadanos. Por otro lado, consta de autos que con ocasión de estos hechos se instruyó un proceso militar por el 2do. Juzgado Militar de Santiago, Rol N°875-77, en que los agentes estatales no fueron considerados responsables de delito alguno, ya que fueron absueltos con fecha 10 de diciembre de 1980, lo cual pone de manifiesto que su actuar al menos contó con el beneplácito o tolerancia de los responsables de diseñar e implementar esta política estatal de control del orden público". El fallo de la Excma. Corte que se ha venido analizando, continuó razonando explicando que: "OCTAVO: Que en este contexto, los hechos que causaron la muerte de González Cerda a causa de las maniobras dolosas desplegadas por los funcionarios estatales pueden constituir un delito de lesa humanidad, pues es incuestionable, no sólo en atención a los hechos del proceso sino, además, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en la época se

implementó una política estatal que consultaba la represión de posiciones ideológicas contrarias al régimen, pretendiéndose la seguridad interna al margen de toda consideración por la persona humana a través de maniobras de amedrentamiento a los civiles y, sobretodo, la garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, entre otras actuaciones, lo que ha sido recogido en autos al encontrarse González Cerda en la nómina de víctimas de violación de sus derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza, conforme lo concluido por el Consejo Superior de la Comisión Rettig, según aparece del Informe que ésta evacuara sobre calificación de víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, lo que habilitó a la señora Fiscal Judicial para formular el requerimiento respectivo y solicitar la instrucción del sumario correspondiente". En la sentencia de reemplazo dictada al acoger el recurso de casación en el fondo la Corte dictaminó: "Que los hechos indagados se han producido en virtud de una política estatal de represión y control ejecutada al margen de toda consideración por la persona humana, amedrentando a la población y otorgando una garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, de manera que ellos no pueden ser calificados en modo alguno como un comportamiento negligente y menos de carácter común".

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN:

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, la acusación fiscal se dirigió en contra de Luciano Astete Almendras, por los hechos que se describieron en el auto de cargos.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que en lo tocante a la participación atribuida a **Luciano Astete Almendras**, este declaró a fojas 1026, 1034, 1049 y 2678, que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como Prefecto de Carabineros de la Prefectura de Tocopilla y que con fecha 13 de septiembre de ese año fue designado como Delegado de la Jefatura en Estado de Sitio. Que para tal efecto, viajó a la ciudad de Antofagasta con la finalidad de pedir instrucciones relacionadas con este nuevo cargo, que desconocía completamente, pues se trataba de una situación especial. Por indicaciones del Jefe de Plaza, el General Joaquín Lagos Osorio, le ordenó que recibiera instrucciones de parte de su General de Carabineros, en ese entonces Martín Cádiz Ávila, quien le indicó que informara cualquier hecho de relevancia donde resultara involucrado personal policial, civiles u otros, que debía comunicar el hecho inmediatamente a las nuevas autoridades, a lo cual dio fiel cumplimiento enviando informes direccionado a la Jefatura de Estado de Sitio y a la

Zona de Carabineros, con asiento en la ciudad de Antofagasta. Agrega que a cargo de la Comisaría de Tocopilla había un Mayor de apellido Muñoz y a cargo de la Comisaría de María Elena estaba el Mayor Ramón Otero, la Subcomisaría de Pedro de Valdivia estaba a cargo del Capitán Maluje. Todas las mencionadas unidades, indica, dependían directamente del Prefecto de Tocopilla, cargo que él ostentaba. Recuerda claramente que el día 12 de septiembre del año 1973, se constituyó personalmente en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia, pues habían recibido información de que personal del Ejército llegaría a reforzar los servicios de seguridad de los cuarteles y las plantas o laboratorios donde se elaboraba el Yodo. Señala que el personal del Ejército se puso bajo sus órdenes solamente para los efectos de seguridad de los mencionados laboratorios o plantas. Agrega que, encontrándose en Pedro de Valdivia, tomó conocimiento de la detención de tres personas, un doctor, una matrona y un funcionario de SOQUIMICH, quienes debían ser trasladados por orden del Jefe de Zona en Estado de Sitio de inmediato a la ciudad de Antofagasta y nunca más supo de esas personas. Con el correr del tiempo, supo que a dos de ellos los habían fusilado, desconociendo mayores antecedentes. Agrega que ni siquiera vio a los tres detenidos, que el documento para el traslado de los detenidos fue redactado por el Subcomisario de Pedro de Valdivia Gerardo Maluje, que Carabineros de dicha localidad fueron quienes confeccionaron el informe para presentarlo ante Joaquín Lagos Osorio, no teniendo conocimiento de ello, jamás lo vio, no lo leyó y no tuvo participación de que se efectuara las órdenes de detención de esas personas. A fojas 1049 precisa que el 14 de septiembre de 1973 se le ordena devolverse a Tocopilla, permaneciendo por tanto en Pedro de Valdivia dos días, por un procedimiento específico. A fojas 2678 añade que el 14 de septiembre de 1973 fue nombrado Jefe de Plaza, es decir, tenía la máxima autoridad del Departamento de Tocopilla, teniendo bajo su mando a todo el personal de las Fuerzas Armadas, Investigaciones y Carabineros. En dicha calidad, aclara, él era responsable policialmente de todo lo que sucediera en su jurisdicción.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, Luciano Astete Almendras, quien a la época de los hechos tenía el grado de Teniente Coronel de Carabineros, según sus Hojas de Vida y Calificaciones custodiadas a fojas 2676, desempeñándose como Prefecto de Tocopilla desde el 16 de febrero de 1973, ha confesado haber estado presente en la localidad de Pedro de Valdivia desde el 12 al 14 de septiembre de 1973, período en el que ocurrieron las detenciones de Jorge Cerda y Carlos Quiroga, recordando especialmente dicho suceso. Que lo anterior se condice con lo señalado por Osvaldo Muñoz Sanhueza a fojas 481, quien también refiere que Astete

Almendras estaba presente para la redacción y firma del documento o parte policial relativo a las detenciones de las víctimas. Que aun cuando el acusado Astete Almendras ha negado su participación de autor en la comisión de los delitos de detención ilegal o secuestro de Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas, sí ha reconocido haber sido designado Delegado de la Jefatura en Estado de Sitio, indicando que esto se hizo el 13 de septiembre de 1973 (lo que no guarda relación con la anotación realizada al respecto en su Hoja de Vida, pues allí se consigna datada el 12 de septiembre de dicho año la siguiente anotación: "Delegado Jefatura Zona Estado Sitio: Radiograma N°1768, de la 2da. Com. M. Elena dice: "Su conocimiento, por radiograma N° 121-60 septiembre 1973 Director Acapuerto Tocop., dice: Ordinario por Bando N° 8 de 12 actual Jefatura Estado Sitio nombra Delegado dicha Jefatura en localidad Tocopilla Tte. Cr1. Carabs. Luciano Astete Almendras pto. Maritgob. Antof."), además ha reconocido ser responsable policialmente de todo lo que sucediera en su jurisdicción, lo cual incluye la situación de las personas detenidas en la Subcomisaría de Pedro de Valdivia. Por lo tanto, durante la detención de las víctimas de autos, Luciano Astete era el jefe superior del servicio en Tocopilla y la comisaria de María Elena y subcomisaría de Pedro de Valdivia y estaba físicamente presente en esta última ciudad, encontrándose al mando y por ende totalmente enterado de los pormenores de su cargo, pues el propio acusado refiere que para el Golpe de Estado se apersonó en la ciudad de Antofagasta para enterarse sobre su nueva designación, y que el día 12 de septiembre viajó a constituirse en Pedro de Valdivia, mismo día en que fue designado Delegado de Zona, por lo que resulta inverosímil para este sentenciador que el referido no conociera dicha designación y sus alcances. En este caso, habiéndose comprobado fehacientemente que las víctimas Jorge Cerda Albarracín y Carlos Quiroga Rojas ya se encontraban detenidas en el cuartel de Pedro de Valdivia para el 13 de septiembre de 1973 (el acusado refirió haberse devuelto a Tocopilla el día 14), nace para él como máxima autoridad de Carabineros presente en la zona, el deber ineludible de impartir las instrucciones sobre qué personas detener y asimismo, garantizarle a los señores Cerda y Quiroga el respeto a sus derechos fundamentales y el cumplimiento de todas las obligaciones que le impone su calidad de Prefecto de Carabineros, sin embargo, el sentenciado argumenta en función de eximirse de responsabilidad o de al menos atenuarla, alegando absoluta ignorancia de lo que ocurría con el procedimiento policial incoado contra las víctimas de autos, que solo le informaron de forma general lo que ocurría y que no participó en la redacción del documento que se habría hecho con posterioridad, lo cual contradice los dichos de su

propio subalterno Teniente Osvaldo Muñoz, quien lo recuerda presente y comprometido con el estudio, redacción y firma de dicho documento. Vale considerar también a este respecto los dichos de **Gustavo Arturo Smith Domínguez** a fojas 1222 y 1259, quien señaló que para el 11 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, recibió un llamado del General Mendoza, quien le dijo que a partir de ese momento estaba a cargo de la II Zona Policial de Antofagasta, relevando en el mando al General Cadiz, recordando que luego se fue al despacho del General donde conversaron accediendo a lo ordenado desde Santiago, procediendo a entregar el mando de la Zona Policial, que comprendía las Prefecturas de El Loa, Tocopilla, Iquique y Atacama, no recuerda el nombre del Prefecto de Tocopilla, asegurando que no era Luciano Astete Almendras, por cuanto no tenía el grado para hacerse cargo de una Prefectura (sin embargo, esto se contradice con las Hojas de Vida del acusado). Recuerda claramente el apellido del Comisario de María Elena, Mayor Otero, y que el Jefe de la Tenencia de Pedro de Valdivia, era el Capitán Maluje Abraham. Por su parte, **Raúl Antonio Sandoval Casanga**, a fojas 2000 señaló que como Prefecto de Antofagasta, tenía al mando todas las unidades de la Región, incluyendo a Tocopilla y Pedro de Valdivia, aclarando que Astete era Jefe de Zona y por tanto también podía disponer de las unidades como Tocopilla. **Jorge Carrasco Leiva** refiere a fojas 1312 y 1358, que el capitán de la Subcomisaría era Gerardo Maluje Abraham, que la unidad dependía de la Comisaría de María Elena, a cargo del Mayor Otero, quien a su vez dependía del Prefecto de Tocopilla.

Estas declaraciones, sumado a los ya referidos testimonios de Osvaldo Muñoz y Gerardo Maluje (este último a pesar de no nombrar al acusado Astete, mediante una ecuación lógica admite que la orden de detener a las víctimas también pudo haber emanado del superior directo del Comisario de María Elena, es decir, del Prefecto de Tocopilla), permiten dar por sentado que en la instrucción de detener a las víctimas de autos provino del jefe superior del Servicio presente en la ciudad, Astete Almendras, pues, no es concebible que estando presente en Pedro de Valdivia no le hayan dado cuenta de las únicas detenciones por motivos políticos, ocurridas durante su estadía. Además, si la instrucción partió por imputarle a los detenidos presuntamente armamentos y artefactos explosivos en su poder, no resulta creíble que no le fuera informada esa situación a quien era el primer responsable del control policial de las localidades que estaban bajo su control, esencialmente por el estado de alarma imperante en el país por parte de las Fuerzas Armadas (se hablaba de hacer explotar guarniciones, destacamentos, atacar a sus familiares, etc.). Si se diera crédito a la poca injerencia que Astete narra, respecto de su actuación en la detención de las víctimas Cerda y Quiroga,

ello reafirmaría el hecho de que no había una situación de alerta en la localidad, todo lo contrario a las informaciones surgidas de la prensa permitida en esa época, lo que desmiente toda esta conspiración terrorista que de manera absurda acusaba el gobierno de facto y resta todo ápice de mérito a las detenciones practicadas. No resiste análisis la idea que encontrándose presente en Pedro de Valdivia el jefe superior del servicio la decisión de detener a las víctimas haya emanado únicamente y en forma inconsulta del Comisario Ramón Otero o del Subcomisario Maluje.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, con los elementos de convicción anteriormente reseñados, esto es los propios dichos del acusado Astete Almendras, quien confesó encontrarse en la ciudad de Pedro de Valdivia entre los días 12 y 14 de septiembre de 1973, quien por lo demás era el Delegado de la Jefatura en Estado de Sitio, unido a los dichos de sus funcionarios subalternos, específicamente de Osvaldo Muñoz, a la sazón Teniente y segundo al mando de la subcomisaría de Pedro de Valdivia quien confesó haber participado directamente en las detenciones de la víctimas y refirió que Astete Almendras estaba presente para la redacción y firma del documento o parte policial relativo a las detenciones de las víctimas, lo que fue entregado en la Intendencia de Antofagasta junto a los detenidos, y a la luz de lo que se ha venido analizando habría sido el único elemento "de prueba" que sirvió de base para la condena a muerte de los afectados, impuesta por el Consejo de Guerra, todo lo cual constituyen prueba directa de hechos que son indicios que permiten construir presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, sobre la participación atribuida a Luciano Astete Almendras en calidad de autor inmediato y directo de los secuestros calificados de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y de don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, ocurridos en la localidad de Pedro de Valdivia entre el 12 y 13 de septiembre de 1973, por lo que se dictará sentencia condenatoria en su contra.

CONTESTACIÓN DE LA ACUSACIÓN:

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, el abogado Hernán Benavides Navarro en representación del acusado Luciano Astete Almendras, contestó la acusación fiscal y las particulares, refiriendo sobre el delito de detención ilegal imputado a su defendido en la acusación fiscal, que en autos solo el Teniente Osvaldo Muñoz involucra a Luciano Astete en una sola de sus declaraciones, no así su jefe directo, el Capitán Gerardo Maluje, quien en todas sus declaraciones ha señalado que siempre actuó en este caso bajo las órdenes directas de su Comisario el Mayor Ramón Otero, quien nunca mencionó a su

defendido, lo cual estaría acorde con el sistema administrativo de Carabineros de Chile, en cuanto a las obligaciones de los distintos Jefes y Oficiales en el desempeño de sus cargos y con la tramitación de la documentación ante los distintos tribunales; que su defendido recuerda que se constituyó el día 12 de septiembre de 1973 en la Subcomisaría Pedro de Valdivia y que allí tomó conocimiento de la detención de tres personas, un doctor, una matrona y un funcionario de SOQUIMICH, quienes debían ser trasladados por orden del Jefe de Zona en Estado de Sitio de inmediato a la ciudad de Antofagasta y nunca más supo de estas personas, agregando que no interrogó a estos detenidos y que ni siquiera los vio, manifestando además, que respecto al parte, fue redactado por el Capitán y subcomisario Gerardo Maluje, lo cual estaría acorde con lo antes expuesto respecto a la modalidad de la tramitación de los documentos en Carabineros de Chile, por lo cual no era factible que el parte policial con el cual se puso a disposición del Juzgado Militar de Antofagasta a las víctimas, hubiera estado firmado por su representado. Agrega que a él sólo se le informó de este procedimiento, pero no tuvo mayor injerencia en el mismo. Sobre la acusación particular como cómplice de homicidios calificados, sumado a lo expuesto previamente, refiere que para haber tenido algún grado de responsabilidad en la muerte de estas personas, debería haber tenido un pleno conocimiento de cuál iba a ser el resultado posterior a la detención de estas personas, ante el Juzgado Militar de Antofagasta, ente judicial totalmente independiente en sus actuaciones a la Repartición de Carabineros que comandaba, ya que este tribunal especial era y es dependiente directamente del General Comandante de la Guarnición Militar de Antofagasta, que debería haber existido un concierto previo con esta persona, el que jamás existió por lo ya antes latamente expuesto y tampoco existe en esta causa algún antecedente que así lo acredite fehacientemente, que al contrario, se ha acreditado plenamente que los responsables de la muerte de estas personas fueron los integrantes del presunto Consejo de Guerra al cual fueron sometidos, situación en la que no tuvo participación alguna su defendido, ni directa ni indirectamente, ya que los funcionarios de Carabineros que los detuvieron y redactaron el parte policial respectivo, sólo se limitaron a poner en conocimiento de la autoridad judicial militar de la época, un hecho que estimaron revestía el carácter de un delito a la ley de Control de Armas vigente a esa fecha, que por lo mismo tampoco puede estimarse por el acusador particular que su representado haya incurrido en las dos agravantes que él considera deben aplicarse, por no darse los requisitos legales para imputarle la calidad de cómplice en la muerte de las víctimas antes individualizadas. Sobre las acusaciones

particulares de secuestro simple y calificado, se remite a lo ya expuesto previamente, agregando que en caso alguno su defendido condujo a las víctimas de autos ante un tribunal militar, que ha quedado claramente acreditado en autos que ellos fueron trasladados por el Teniente Osvaldo Muñoz Sanhueza por una orden directa emanada del Mayor Comisario Ramón Otero, que para el día de la detención su defendido no tenía conocimiento de la dictación del Decreto Ley N°5, de la misma fecha, que estableció que entraran en funciones los Consejos de Guerra, por lo que tampoco cabe aplicar las agravantes referidas por los acusadores particulares. Agrega que la única participación de su defendido fue el hecho de haber cumplido las órdenes de sus superiores, en este caso, dentro de las normas legales de la Ley de Control de Armas N° 17.798, y del Código de Procedimiento Penal vigentes a esa época, y que no se dan los requisitos del artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, para que el tribunal pueda formarse la convicción de que éste ha cometido un hecho punible y que en él le ha correspondido una participación culpable y penada por la ley, solicitando no dar lugar a las pretensiones de los acusadores.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que la circunstancia aducida por el defensor del acusado Astete, en relación a ser nombrado solo una vez en autos por Osvaldo Muñoz, no da lugar a estimar que no hubo participación de su parte en el procedimiento policial que originaron los hechos de autos, porque -como se expuso más arriba- ello coincide plenamente con la circunstancia de haber estado este acusado presente en la Localidad donde se verificó la detención de las víctimas, quien ostentaba en ese lugar y en toda la circunscripción territorial comprendida entre Tocopilla, María Elena y Pedro de Valdivia, el más alto cargo militar y policial dispuesto por las autoridades militares que se habían tomado el poder político y el país en general y, por cierto en esa región minera de gran importancia económica. Es así, que no solo el teniente Osvaldo Muñoz se refiere al acusado, sino que indirectamente el Subcomisario Gerardo Maluje, el cabo Jorge Carrasco Leiva también lo hacen, pues admiten que el Prefecto de Tocopilla tenía el mando de la jurisdicción a la que pertenecía Pedro de Valdivia.

Por otro lado, la circunstancia alegada por el mismo defensor respecto a que el procedimiento policial adoptado por las autoridades de Carabineros de Pedro de Valdivia estaba acorde con el sistema administrativo que los regía, tampoco significa para el acusado una abstracción de sus responsabilidades, pues en lo que únicamente se centra el defensor para estimar que no hubo participación de su representado en dicho procedimiento, es la falta de firma del documento o parte policial que habrían suscrito los implicados posteriormente. El defensor cita normas

reglamentarias de Carabineros tendientes a demostrar que para la legitimidad de los procedimientos policiales, bastan las firmas de los Jefes de Unidad respectivos (Comisarios o Subcomisarios), sin embargo, en el Reglamento respectivo, y especialmente en las normas citadas por el defensor, no refieren que dichos procedimientos sean exclusivos ni excluyentes, es más, en el artículo 23° letra A, número 4 del mismo, consta para los Comisarios la obligación de "Dar cuenta inmediata y directa a la Dirección General, Jefatura de Zona de Inspección y Prefectura, de todo hecho policial de importancia o de trascendencia que ocurra en su sector...", lo cual en el caso que nos atinge, se cumplió, pues el propio acusado confesó haber sido informado sobre los detenidos de autos. Asimismo, del Reglamento N°7 de Carabineros, surge la obligación de los Prefectos consignada en el artículo 16° letra h), el cual dispone como deber, el "Concurrir al lugar de su jurisdicción en que suceda algún hecho policial de gravedad o trascendencia, con el fin de imponerse de la actuación del personal y adoptar las medidas que estimen adecuadas, dando cuenta por el medio más rápido a la Dirección General y Jefatura de Zona de Inspección, confirmándola a continuación por medio de oficio, medida que también adoptará con respecto al Intendente de la Provincia, si procede", todo lo que en la situación irregular que atravesaba el país cobra mayor relevancia, y es la única forma de entender su presencia por dos días en la Localidad de Pedro de Valdivia.

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL:

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a fojas 2.461, el abogado Cristián Cruz Rivera, en representación de la parte querellante, invocó como circunstancias agravantes las contempladas en los numerales 10° y 11° del artículo 12 del Código Penal. Solicitó que se impusiera al acusado Luciano Astete Almendras, dos penas de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, como cómplice de los homicidios calificados de las víctimas de autos, en grado de consumados, con costas.

A fojas 2.505, el abogado Felipe Alemparte Croxatto, en representación del Programa de Derechos Humanos, invocó como circunstancia agravante la establecida en el artículo 12 N°8 del Código Penal, esto es, "prevalecerse del carácter público que tenga el culpable". Pidió que se le impusiera a Luciano Astete Almendras, la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de autor de acuerdo al artículo 15 N°2 del Código Penal, del delito de secuestro simple consumado. Asimismo, solicitó se imponga al acusado las penas

accesorias correspondientes y la aplicación de la regla de reiteración de delitos prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 2.510, el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, invocó como circunstancias agravantes las contempladas en los numerales 8° y 11° del artículo 12 del Código Penal, esto es, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable y con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Por lo anterior, solicita se imponga al acusado Luciano Astete Almendras, la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, como autor de dos delitos de secuestro calificado, en grado de consumados, solicitando asimismo la aplicación de la regla de reiteración de delitos prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, y por último que se le imponga las penas accesorias legales y costas de la causa.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que no perjudica al acusado la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 12 N° 8 del Código Penal, esto es, prevalencia del carácter público esgrimida, toda vez que si bien Luciano Astete Almendras, al momento de cometer el delito detentaba la calidad de miembro de Carabineros de Chile, en virtud de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Punitivo, dicha causal de agravación es incompatible con el delito que nos ocupa, un crimen de lesa humanidad, en que el abuso de la calidad de funcionario público -agente del Estado- constituye un elemento integrante del tipo.

Lo mismo ocurre con la agravante del artículo 12 N°11, del código punitivo, esto es, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, porque el delito lo cometieron sujetos que por el ministerio de la ley como agentes del Estado tienen el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, y es en esa condición que cometieron el delito que se investiga en estos autos, de tal suerte que es de la naturaleza de los delitos de esta índole se cometan por agentes del estado que a través de la fuerza de las armas se tomaron el poder, y de ello se deriva que sean sancionados como de lesa humanidad, figura agravada que no permite la amnistía, ni ninguna forma de prescripción, de manera que, aplicar la agravante solicitada implicaría sancionar doblemente esa conducta.

En cuanto a la agravante de cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia, regulada en el N°10 del artículo 12 del código sancionador, también será desestimada, teniendo en consideración para ello que este delito si bien es cierto se ejecutó cuando se había decretado estado de sitio por conmoción interna, lo cierto que, ese fue un estado de guerra presunto y no real, porque "conmoción" de

conformidad al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en lo que podría aplicarse a esta situación, consiste en: "tumulto, levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo", circunstancia que no aconteció en la especie, desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control del país en forma inmediata, por lo expuesto, se desestimará también esta agravante.

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES Y ATENUANTES:

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, a fojas 2595, el abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado Luciano Astete Almendras, solicita que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.126, modificada por la Ley N° 20.603, y para el evento que se dicte sentencia condenatoria con pena privativa de libertad en contra de su representado, se le conceda alguno de los beneficios de la citada Ley y en especial la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada, según sea el monto de la pena impuesta. Asimismo, se apliquen a su favor las circunstancias eximentes de responsabilidad penal del artículo 10 N°10 del Código Penal y, en caso que no se le exima de su responsabilidad penal, en subsidio se le considere como circunstancia atenuante, la eximente incompleta del artículo 11 N°1 del mismo texto legal, puesto que se vio obligado al cumplimiento de un deber dispuesto por su Jefatura de la época, sin alternativa alguna, como asimismo, se considere igualmente la atenuante de responsabilidad penal señalada en el N°6 del mismo artículo, esto es, su irreprochable conducta anterior. Igualmente solicita que no se le condene al pago de las multas y de las costas en el evento que se dicte una sentencia condenatoria. Finalmente, y en el evento que se le condenare a cumplir una pena privativa de libertad, solicita tener en consideración y aplicar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Persona Mayores, vigente en Chile desde su publicación en el Diario Oficial del día 7 de septiembre de 2017, atendida su edad actual de más de 96 años, Convención que establece que el cumplimiento de las condenas de estas personas se efectúe bajo la modalidad del arresto domiciliario. También, de conformidad a lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, y para el evento que se declare la responsabilidad penal de su representado, solicita aplicar la media prescripción, por darse en su caso los requisitos señalados en dicha norma legal, ya que habría transcurrido en exceso el tiempo allí señalado, por lo que cabe plenamente su aplicación obligando al Tribunal a aplicar, en el peor de los casos, dos atenuantes muy calificadas y ninguna agravante.

QUINGUAGÉSIMO: Que se acogerá la minorante prevista en el N°6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, la

irreprochable conducta anterior del encausado, lo que se comprobó con el extracto de filiación agregado a fojas 1447, exento de anotaciones pretéritas.

QUINCUGÉSIMO PRIMERO: Que respecto de la eximente del artículo 10 N°10 del Código Penal, que libera de responsabilidad a: "El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo", y de la eximente incompleta contemplada en el artículo 11 N°1 del mismo Código, relacionada con la eximente anteriormente citada, dichas normas resultan inaplicables a los delitos de lesa humanidad, como el que nos ocupa, toda vez que las sentencias del Tribunal de Nüremberg, que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establecieron que cualquier persona puede y debe ser capaz de discernir que los crímenes de lesa humanidad jamás pueden ser considerados como parte de sus deberes como soldado (nada obsta a que dicha circunstancia pueda ser extendida también a un funcionario policial). Por tanto, no puede aducirse actuar en cumplimiento de un deber u orden de Jefatura para la persecución de opositores políticos o enemigos del régimen, considerando que el propio acusado en esta causa ostentaba amplias facultades de mando en atención a su alto cargo (Prefecto) y facultades especiales debido a su designación como Delegado de Jefatura de Zona en Estado de Sitio. Es decir, él mismo era parte de la Jefatura aducida por su defensor.

QUINCUGÉSIMO SEGUNDO: Que se rechazará la solicitud de eximir al acusado Astete Almendras del pago de las multas y costas de la causa, en atención a lo dispuesto en los artículos 24 del Código Penal y 504 del Código de Procedimiento Penal.

QUINCUGÉSIMO TERCERO: Que se rechazará la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores solicitada por el defensor Hernán Benavides, pues sin perjuicio de la edad que presenta actualmente el acusado Luciano Astete Almendras (97 años), la mentada Convención dispone en su artículo 13 inciso final que "Los Estados Partes (...) promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, **de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos**", por lo que, considerando la recalificación de los hechos que originaron este juicio al delito de secuestro calificado, cualquier pena sustitutiva a la pena privativa de libertad, queda inmediatamente vetada por disposición del artículo 1° inciso 2° de la Ley N° 18.216, ya que expresamente niega dichos beneficios a los autores de secuestro calificado. Por tanto, la aplicación de la Convención no puede ir en contra de la legislación interna, ya que ella misma dispone que su

aplicación debe ir en armonía con nuestro propio ordenamiento jurídico.

QUINCUGÉSIMO CUARTO: Que en cuanto a la circunstancia prevista en el artículo 103 del Código Penal la referida alegación no será aceptada respecto del delito de secuestro calificado de lesa humanidad, por cuanto la media prescripción, para que opere, está relacionada con el transcurso incompleto del tiempo necesario para extinguir la responsabilidad por prescripción de la acción penal y siempre requiere de un inicio del cómputo para los efectos de concluir que ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción; sin embargo, al haberse establecido que el delito investigado en autos es un delito de lesa humanidad, este tiene por expresa disposición normativa el carácter de imprescriptible, por ende, no hay plazo alguno que contabilizar.

Que, además, para que opere la aplicación de la prescripción gradual, el legislador exige que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción de la acción penal o de la pena y que el transcurso del tiempo exigido por la norma se verifique antes de que el responsable se presente o sea habido. De lo anterior se desprende que el artículo 103 del Código Punitivo opera respecto de procesados que se encontraban ausentes durante el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que el acusado Astete Almendras estuvo siempre presente en el juicio, nunca ausente o rebelde.

Tanto la prescripción como la prescripción gradual benefician al responsable de un delito en consideración a los efectos que provoca el transcurso del tiempo en la necesidad de la pena, la estabilidad social y la seguridad jurídica, efectos que no se presentan respecto de los delitos declarados imprescriptibles.

En suma, para el rechazo de esta alegación se atiende por una parte, a la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, lo que obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

Pero junto con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la

pena aunque concurren varias atenuantes (Sentencias Corte Suprema Rol N° 35.788-17, de 20 de marzo de 2018 y Rol N° 39.732-17, de 14 de mayo de 2018).

DETERMINACIÓN DE LA PENA:

QUINCUGÉSIMO QUINTO: Que en la especie al tratarse de dos víctimas de secuestro calificados, estamos ante delitos reiterados, en consecuencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal, vigente a la época de comisión de dichos ilícitos, es sancionado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, por lo que atendida la reiteración, de conformidad al artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, la pena se aumentará en un grado desde el mínimo, quedando en definitiva en presidio mayor en su grado medio, que va en el tramo de diez años y un día a quince años. Beneficiando al encartado una circunstancia atenuante y no perjudicándolo ninguna agravante, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 inciso 2° del código punitivo, el tribunal está obligado a no imponer la pena en su grado máximo; en este caso se hará uso de esa facultad bajando en un grado la pena, imponiéndola en presidio mayor en su grado mínimo, en el quantum que se indicará en lo resolutivo.

Para regular el quantum de la pena que en concreto se impondrá al sentenciado se tuvo en consideración la naturaleza del delito -crimen de lesa humanidad- y la extensión del mal causado, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 69 del Código Penal. Asimismo, se ha considerado las funciones y atribuciones que el acusado ejercía en la Prefectura de Carabineros de Tocopilla y el poder de mando o decisión que ostentaba.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

QUINCUGÉSIMO SEXTO: Que, en el primer otrosí del escrito de fojas 2.458, el abogado querellante Cristian Cruz Rivera, en representación de doña Claudia Carolina Cerda Durán, doña Luisa Nolvis Durán Durán, doña Fresia Zoila Cerda Albarracín, doña Anita Virginia Quiroga Araya y doña Jimena del Carmen Araya Carvajal, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Abogado Procurador Fiscal don Carlos Vega Araya, pidiendo sea condenado a pagar la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) a cada una de las demandantes, más reajustes e intereses hasta el pago efectivo de la indemnización, con costas.

Funda su acción en que está acreditado que el ilícito fue perpetrado por agentes del Estado, específicamente por funcionarios de Carabineros de Chile y del Ejército, los que

actuaban dentro de una política sistemática de violación de derechos humanos implementada por el gobierno de la época en contra de sus adversarios políticos, en la cual la detención, torturas, asesinatos y posterior desaparición de personas constituyeron una práctica habitual.

Añadió que como consecuencia directa del secuestro y asesinato de sus cónyuges, padres y hermano, sus mandantes sufrieron un profundo daño moral que se ha traducido en un perjuicio irreparable de índole subjetivo, y la impunidad de todos estos años ha significado un dolor permanente a las demandantes. En cuanto a la hija, viuda y hermana de don Jorge Antonio Cerda Albarracín, refirió que esa familia rememora que don Jorge Cerda era médico general de zona en la oficina salitrera Pedro de Valdivia, además de militante del Partido Socialista, contando con el aprecio de la comunidad, por cuanto él siempre estaba en disposición para atender las urgencias, preocupándose de su estado una vez atendidos. Que su viuda, a pesar de los años y su juventud, jamás pudo rehacer su vida sentimental y laboral, debido al fuerte impacto, lo que provocó en ella vacíos emocionales en especial porque la vida sentimental de ambos empezó en su adolescencia, es decir perdió al amor de su vida y fueron acogidas por los padres de Jorge, viviendo con ellos allegados, con precariedad y el temor de las amenazas que vivían, pero principalmente en el futuro de su hija, siempre con el temor que los uniformados o los agentes de civil aparecieran en su casa. Por su parte, Claudia Cerda rememora que vivieron "miedos paralizantes, enfermedades constantes por bajas defensas, sentimientos de abandono e inseguridades permanentes que para superarlos tuvieron que estar constantemente con tratamientos psicológicos, cuyo costo al principio fue inabordable. Específicamente ella, como hija, logró superar el tema después de 20 años gracias a varios tratamientos culminando finalmente en el programa PRAIS(...)". Para Fresia Cerda, expone que la pérdida de su hermano fue un duro golpe, ya que la víctima era su hermano mayor, un sostén y referente para ella, era una figura a la que admiraba y la motivaba.

Respecto a la hija y viuda de don Carlos Quiroga Rojas, indica que a la época la víctima contaba con 32 años y era interventor del Estado en la zona, siendo militante del Partido Socialista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Luego de narrar antecedentes biográficos del señor Quiroga, refiere sobre su hija Anita, que a comienzos del 73 estaban lejos, que sus últimos recuerdos con Carlos son de julio de ese año. Fue a buscarla a Copiapó para llevarla con él a pasar sus vacaciones de invierno (...). Agrega que su mandante puntualizó que a la época tenía 6 años, que la vida de una niña a esa edad no permite dimensionar lo que significa perder a su padre, recuerda

perfecto la forma en que se enteró. Que creció sin hablar de él, sin poder preguntar. Recuerda las pesadillas, los tics nerviosos, el orinarse en la cama hasta grande, el comerse las uñas. Sabe que en algún momento la llevaron a una doctora que asume puede haber sido sicóloga o siquiatra y le daban gotitas para los nervios, a ello se suma que ella fue criada por su abuela, es decir con ausencia materna. Refiere que tuvo falta de afectividad. Agrega que de adulta fue muy fuerte leer en su certificado de defunción causa de muerte "Anemia aguda por múltiples heridas de bala", que una psicóloga PRAIS le refirió la Negación en que vivía, padeciendo algunos episodios de crisis de Angustia Reactiva. Añade que otros familiares también sufrieron persecución, como su tío paterno Conrado, que tuvo que irse del país, disgregándose la familia. Por su parte, doña Jimena Araya, viuda de don Carlos Quiroga, refiere que el 20 de septiembre de 1973, caminando por la plaza de Copiapó, se entera por una amiga que habían fusilado a Carlos, con quien a esa época se encontraban separados y con dos hijos en común, uno de ellos con Síndrome de Down. Que gracias a gestiones de la Iglesia Católica, pudo llegar el 21 de septiembre de 1973 a Antofagasta, siendo recibida por el General Joaquín Lagos y posteriormente por un fiscal militar, quienes le indicaron que Carlos Quiroga había sido fusilado a pesar que era inocente, le permitieron viajar a Pedro de Valdivia, a revisar el domicilio del occiso, que ese mismo día regresaron a Antofagasta, recordando su representada que habló con el Alcaide de la cárcel local, quien le contó sobre el fusilamiento "que CARLOS había hablado con el cura del recinto, de apellido Zenteno, a quien le habría entregado unos mensajes para que se los entregara a su hija Anita. También señala su mandante que en el aspecto económico pasaron momentos muy difíciles, recibiendo mucha ayuda, o solidaridad, desde la Iglesia y de diferentes parientes, logrando independizarse y trabajar en diversas escuelas de Copiapó y Vallenar, donde ascendía y al llegar a postular a un cargo superior era suspendida, exonerada y debía comenzar de nuevo. Ese "castigo" también irradió a su hija, quien tras salir de la educación media recibió una beca para la universidad, y que por ser hija de un "terrorista" le fue retirada. De su residencia en Copiapó y Caldera, doña Jimena señala que sus casas fueron allanadas en varias oportunidades (...), que llegó como profesora en la Escuela N°1 de El Salvador, llegó con sus cosas, muebles, enseres y sus hijos al campamento, donde alcanzó a trabajar 2 días, se le dijo que por orden del jefe de plaza tenía 24 horas para abandonar el campamento". Señala que la sensación de estas dos familias ante la institucionalidad es que el Estado de Chile les maltrató, humilló y les condenó a un extenso dolor o padecer,

un sufrir inhumano que en mayor o menor medida continúa o tiene sus consecuencias al presente.

Concluye que las víctimas de autos eran personas insertas y reconocidas en el ámbito laboral, social, político y familiar, por lo que existían para ellas y su grupo familiar las mejores condiciones para desarrollarse plena y armónicamente en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, estas plausibles posibilidades fueron violenta y traumáticamente frustradas al serles arrebatada su vida. Del mismo modo, las cónyuges e hijas, al verse privadas de la presencia marital y paternal, sufrieron negativas consecuencias y alteraciones en sus proyectos vitales, de formación y desarrollo al carecer de este importante lazo afectivo, lo que de otra manera también acaeció con la hermana que demanda. Asimismo, reitera, la ausencia del jefe de familia no sólo significó daños en el plano psicológico y moral, sino que también incidió en sus condiciones materiales de vida, ya que las dos familias no pudieron contar con los aportes económicos que realizaban los señores Cerda Albarracín y Quiroga Rojas, por lo que tuvieron serias dificultades para solventar las necesidades básicas, ello agravado por las persecuciones sufridas y las oportunidades negadas.

QUINCUGÉSIMO SÉPTIMO: Que a fojas 2547, comparece Carlos Alberto Vega A., Abogado Procurador Fiscal de La Serena, por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, solicitando el rechazo de la demanda en virtud de las defensas y excepciones que señala:

a) Al efecto, opuso en primer término la excepción de improcedencia de la indemnización respecto de doña Fresia Zoila Cerda Albarracín, por haber sido preterida legalmente la demandante. En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero destaca a las leyes N°19.123 incrementada por la N°19.980, normas que habrían establecido una indemnización legal que optó por beneficiar al núcleo más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio que a su favor se determinó a través de esta ley que todos los familiares de las víctimas tendrían el derecho a recibir de manera gratuita prestaciones médicas, beneficios educacionales, reparaciones simbólicas, entre otras. Señala que en términos generales este tipo de indemnizaciones habría significado para el estado desembolsar una cantidad importante de dinero y que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual. Al efecto cita ejemplos de legislación nacional e internacional que pone límites a la indemnización, como el artículo 43 de

la Ley N°16.744 y las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil.

b) En segundo lugar plantea que sin perjuicio de lo anterior, las demandantes de autos han obtenido reparación satisfactiva a través de reparaciones simbólicas y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre, lo que pretende reparar ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral y al efecto enumera una serie de estos actos de reparación simbólica que se han efectuado, como la construcción de un memorial en el cementerio del Museo de la Memoria, etcétera. Añade que, además las actoras de autos son titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

c) Enseguida, opone en subsidio la excepción de prescripción extintiva de las acciones civiles de indemnización de perjuicios según lo dispuesto por los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, afirmando que, a la fecha, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332. En subsidio interpone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del cuerpo legal citado porque estas normas han sido consideradas de aplicación general a todo el derecho y no solo al privado, para apoyar esta tesis trae a colación jurisprudencia sobre la materia.

d) En cuanto al daño e indemnización reclamada, indica que al tratarse del daño puramente moral por afectar bienes extrapatrimoniales o inmateriales y por ende no apreciables en dinero, por ello la indemnización no haría desaparecer el daño, por lo que el daño moral no se borra por obra de la indemnización, y -añade- así lo ha establecido por la Excma. Corte Suprema. Señala además que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, ya que, el juez solo estaría obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, y en la cual no tendrían influencia estas capacidades.

e) En subsidio de las excepciones precedentes, alega que la fijación del daño moral por los hechos de autos debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por las demandantes de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación, y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De lo contrario, implicaría un doble

pago por un mismo hecho. Señala que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

f) Por último indica que es improcedente el cobro de reajustes e intereses en la forma solicitada, porque éstos solo podrían devengarse una vez que la sentencia que se dicte en autos acoja las demandas y se encuentre firme y ejecutoriada, porque mientras no esté en ese estado, ninguna obligación tendría su representado de indemnizar, de ahí se deriva que no existe suma alguna que reajustar y los intereses se pueden devengar desde que se encuentre ejecutoriado el fallo que ordene su pago.

QUINCUGÉSIMO OCTAVO: Que para pronunciarse acerca de las excepciones y/o alegaciones y defensas opuestas cabe considerar que el fundamento de la acción civil deducida por las actoras reside en el delito de secuestro calificado cometido en contra de sus padres, cónyuges y hermano, don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, hechos ocurridos entre el los días 12 o 13 y el 20 de septiembre de 1973, por el que se ha hallado culpable a Luciano Astete Almendras, a la sazón un agente del Estado y respecto de esos delitos no se discute su calidad de crimen de lesa humanidad.

Al efecto cabe considerar que la Excm. Corte Suprema ha señalado que la historia fidedigna de la Ley N° 19.123, en cuanto elemento de interpretación de la ley según lo dispone el inciso segundo del artículo 19 del Código Civil, pone de manifiesto que durante la tramitación parlamentaria el debate fue justamente sobre la conceptualización y determinación de la naturaleza jurídica de los beneficios pecuniarios que se otorgarían por medio de ella, de acuerdo a las intervenciones del senador señor Máximo Pacheco y del Ministro de Estado señor Correa, a la época Secretario General de Gobierno, que ilustraron el contexto en que se presentó el proyecto de ley que terminó siendo aprobado que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y establece beneficios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, permiten dimensionar el alcance y objetivo del texto legal en cuestión, inscrito dentro del conjunto de esfuerzos del Estado de Chile dirigido al reconocimiento de responsabilidades y la reparación parcial del daño experimentado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos (Excm. Corte Suprema Rol N° 23.441-2014).

Una simple lectura de la ley mencionada permite advertir que allí se estableció una pensión mensual de reparación, en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según

sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

QUINCUGÉSIMO NOVENO: Que la historia fidedigna de la ley, sumada a las características de los beneficios que ella otorga, permite concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores. Consecuencia de lo reseñado es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N° 19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido. (Corte Suprema Rol N° 9.757-2015)

En lo que concierne a la Ley N° 19.988, el bono establecido en el artículo 5°, también reviste un carácter asistencial, voluntariamente fijado por el Estado de Chile, en que las alusiones que se hacen a la pensión asistencial fijada por la Ley N° 19.123, son demostrativos del ánimo del legislador de equiparar a los demás hijos de la víctima con aquellos que se encuentran gozando una pensión de reparación.

Por lo demás, la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que en este proceso civil se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues de otra manera sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar.

SEXAGÉSIMO: Que en lo atinente a la alegación del demandado respecto de la preterición de la hermana de don Jorge Antonio Cerda Albarracín para demandar indemnización por el daño moral que sostiene haber sufrido, esta será desestimada, teniendo en cuenta para ello que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar la existencia del daño y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso no ha sido cuestionado.

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que en relación a la excepción de prescripción extintiva de la acción civil deducida en contra del Fisco de Chile, cabe considerar que ésta tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

Este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, que obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6°, ambos de la Constitución Política.

Es así que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional en el que representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).

De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República que señala que "el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana".

El artículo 6 de la misma Carta Fundamental, al igual que la disposición antes referida, forma parte de las "Bases de la Institucionalidad" -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella", indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo artículo 6 enseña que "los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo", y concluye señalando que "la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley".

Es por esta razón que en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que de lo que se ha venido señalando se desprende que el Estado está sujeto a la regla de la responsabilidad, la que no es extraña a nuestra legislación, pues el artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907 señala que: "La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen su ejército". Complementa lo anterior el artículo 2.3ª del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto señala que: "Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo", el que supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto encontramos también el principio 15 de los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que: "Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de

derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario".

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que la alegaciones o defensas esgrimidas por la demandada en cuanto a los pagos ya recibidos del Estado y a la reajustabilidad demandada, dicen relación con la facultad privativa del tribunal al momento de establecer el quantum indemnizatorio, lo que se determinará en su oportunidad.

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que doña **Luisa Nolvis Durán Durán** señaló a fojas 126 y 480, que luego del fusilamiento de don Jorge Cerda Albarracín (su cónyuge), su vida cambió "en 180 grados", sintió que cayó en un precipicio, la relación con su hija se deterioró, se sintió sola y desamparada totalmente y por suerte tuvo la acogida de sus suegros, quienes le pidieron que se fuera a vivir con ellos principalmente por su nieta, pues su marido era su hijo preferido y su muerte causó un profundo pesar en toda la familia; para ella fue su único "pololo" y el único hombre que ha tenido, de ahí en adelante nunca más mantuvo una relación o pudo retomar su vida normalmente, dejó de trabajar en su oficio y por ende, de percibir dinero. Con el paso de los años retomó la actividad como diseñadora en la casa de sus suegros y en esa condición le tocó vivir muchas aflicciones y pesadumbres, pero por los temores y no tener los medios económicos tenía que quedarse allí. Además durante mucho tiempo después de la muerte de su marido, personal de Ejército la seguía permanentemente. Recuerda que luego la siguieron hostigando, mediante reiterados llamados telefónicos, que la última vez que la llamaron, un sujeto le dijo "OYE TE VOY A PONER UNA BOMBITA", lo que la tenía muy mal psicológicamente, que no contentos con la muerte de su marido, la siguieron torturando durante muchos años, pues no podía salir a la calle sola y siempre estuvo acompañada de su hija, quien tenía que perder clases para poder ir con ella a realizar cualquier trámite, lo que le causaba un profundo pesar y no se pudo realizar como persona, tampoco su hija, quien tuvo su desarrollo truncado producto de la situación vivida, no tuvo su padre, vivir pensando que le podía pasar algo, tuvo que dejar el deporte y tuvo graves problemas para obtener un título universitario, pues sufrió permanentes depresiones y recién pudo obtener su título a los 31 años. Por su parte, **Fresia Zoila Cerda Albarracín**, señaló a fojas 131 y 478, que con el paso del tiempo, cuando terminó la dictadura, llegaron a la casa a entrevistarlos distintas personas, todo relacionado con la muerte de su hermano Jorge Antonio Cerda Albarracín, que anteriormente vivieron una tortura, pues sufrían de seguimientos y amenazas permanentes, incluso ella tuvo problemas para sacar su título y tuvo que terminar su carrera fuera del país. En consecuencia, estos hechos tuvieron repercusión en toda la familia, pues mataron a uno de sus

hermanos y los restantes tuvieron que irse al exilio y siendo una familia muy unida, se separaron todos para nunca más inmiscuirse en temas políticos, destruyeron una familia entera. Sus hermanos estuvieron exiliados hasta cuando terminó la dictadura y ahí recién pudieron regresar a Chile. Podría agregar que su padre, producto del estrés que le causó esta situación vivida, la muerte de uno de sus hijos y la detención y tortura de otros, le causó diferentes males que lo llevaron a perder la vida en el año 1986, producto de un enfisema pulmonar y del mal de Parkinson. Esto con ocasión de la salida del país de la gran parte de sus hijos, quienes se fueron exiliados, vivieron fuera del país durante 14 años aproximadamente.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que doña **Jimena del Carmen Araya Carvajal**, refirió a fojas 189, que la muerte de su marido ha significado grandes problemas para su familia, que ella tenía dos hijos, Anita de 7 años y Héctor de 6 años con síndrome de Down. Que en su hija la muerte de su padre produjo un trauma terrible hasta el día de hoy prácticamente, porque una profesora del colegio le dijo cómo murió su padre. Que ha estado en tratamiento psicológico permanente por estas razones. Que se le negó la beca Enrique Molina que le correspondía de preferencia por su puntaje en la Prueba de Aptitud Académica, y sus notas y otras circunstancias, debido a ser hija de un ejecutado político, según se le informó. Añade que la casa de su padre fue allanada varias veces, por vivir ella ahí, y por la misma razón se le quitó la licencia de radio aficionado y el equipo por alrededor de un año. Su padre sufrió vejámenes en el Regimiento. El núcleo familiar no volvió a ser el mismo. Refiere que ella perdió un trabajo recién conseguido en CODELCO, al cabo de una semana, al saberse que era viuda de un ejecutado político y desde ese momento tuvo innumerables problemas laborales. **Anita Virginia Quiroga Araya**, declaró a fojas 320, 642 y 653, que a la muerte de su padre (Carlos Quiroga) ella tenía 6 años de edad. Que para la época de los hechos, su abuela le informó que habían matado a su padre, lo que la dejó muy mal, la noticia la sorprendió y aún no lo puede superar. Que fue muy duro y luego comenzar a enfrentar ese período posterior donde se hablaba de los presos políticos y ejecutados. Sus hijos nunca supieron lo que realmente ocurrió sino hasta ahora y no pudieron vivir y disfrutar a su abuelo. Señala que hicieron un daño tremendo que malamente podrá ser olvidado.

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que con la finalidad de demostrar el daño moral que funda su demanda civil de indemnización de perjuicios, la parte demandante rindió prueba documental y testimonial.

En efecto, a fojas 31, 312, 510, 541, 592 y 1.705, rolan antecedentes familiares de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas. Que sin perjuicio de

que no se recabó antecedente documental que acredite el nexo familiar de la demandante Fresia Zoila Cerda Albarracín con la víctima Jorge Antonio Cerda Albarracín, con el mérito del informe policial de fojas 138, más las declaraciones de fojas 126, 131, 331, 478, 480 y 799, se logra comprobar dicho nexo. Por tanto, con lo referido previamente, se acreditó el parentesco de las demandantes, cuestión que por lo demás no fue discutida por el demandado civil.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que para demostrar la existencia del daño moral depusieron en la causa por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, videograbación que se encuentra agregada a estos autos, que se transcribió a fojas 2.660 y siguientes, los testigos Luis Eduardo Villazón León, Angélica Paz Verdugo Sobral y Estrella Ximena Arancibia Román por las demandantes Anita Quiroga y Jimena Araya, manifestando el primer testigo conocer a ambas, aunque más a Anita por razones laborales, que para Anita siempre fue complejo convivir con una situación de esta naturaleza, por ejemplo, para la época festiva del mes de septiembre, para ella significaba también signos negativos por lo que le tocó vivir en su época, que vivió un proceso de negación y luego de reconocimiento, incluso para esta iniciativa legal le costó tomar la decisión, ya que para ella siempre ha sido doloroso revivir situaciones como la que le afectaron a ella y a su familia. Sobre doña Jimena Araya, refiere haber compartido con ella en dos oportunidades, que ella desde el principio le tocó vivir y ser parte de la Agrupación de Ejecutados de Atacama, que junto a Anita y a su otro hijo que padecía Síndrome de Down, experimentaron un dolor permanente. Que supo por comentario de Anita, que a doña Jimena le tocó viajar al norte a buscar a su esposo, del cual ya estaba separado, recibéndolo en un ataúd. Agrega que a Anita también le costó evidenciar su sufrimiento con sus propios hijos, que solo en los últimos años pudo salir a manifestarse públicamente, ya que antes vivía con un temor permanente. La segunda testigo, refiere que conoce a Anita Quiroga por razones laborales, que sabe de la historia familiar de Anita y de su madre. A la madre solo la conoce por referencias. Que por su profesión, conoce del daño transgeneracional que ocasionan estas pérdidas familiares, y en este caso la del padre a temprana edad. La negación del trauma, el daño en los niños, la impunidad que perturba el duelo de las personas, lo que se conoce como la perpetuación del trauma, que se va transmitiendo de generación en generación. Que este dolor genera secuelas en Anita, fragilidad emocional, ansiedad, que ha tenido tratamientos por los daños producto de la pérdida de su papá tan temprano en la vida. Desde su profesión, afirma que Anita tiene un daño psicológico, una labilidad emocional, que sufría episodios de ansiedad por razones de trabajo. Que para actos conmemorativos del 11 de septiembre,

le afectaba mucho. Agrega que tenía un hermano con Síndrome de Down, el cual falleció, que Anita le comentó haber sido muy cercana a su papá. Que su madre tuvo que intentar suplir las deficiencias, entiende que la madre de Anita la deja al cuidado de sus abuelos maternos, producto de la necesidad de trabajar y cuidar al hermano que tenía mayor fragilidad. Que su vida familiar se destruyó. La tercera testigo manifiesta que conoce a Anita Quiroga por contexto laboral, que sabe de las crisis que le provocan los episodios de violencia, que posterior al mes de octubre de 2019, tuvo mucho miedo, ansiedad, se vio impedida de trabajar, con una importante crisis de fibromialgia, que padece una enfermedad crónica con un alto componente emocional. Que posterior a esta crisis, Anita le contó su historia, trayendo al presente vivencias y miedos de su niñez. Que ella sentía mucha inseguridad y desprotección, que padecía temblores. Que en un eventual conflicto en grupo de trabajo, ella se retrotrae, cosa que no ocurría antes del "Estallido Social".

Por las demandantes Claudia Cerda Durán, Luisa Durán Durán y Fresia Cerda Albarracín, testificaron Claudia Alejandra Cifuentes Muñoz y Lorenzo Edmundo Parra Tapia, manifestando la primera testigo que conoció a Claudia en la Universidad y a doña Luisa por ser su madre. Que doña Luisa siempre ha sido una señora con mucho temor a salir o a relacionarse con otras personas, tiene muy pocos amigos. Lo mismo sobre Claudia, refiere que ella creció al parecer sin mayores problemas, pero que estando en la Universidad toma consciencia de lo que pasó con su padre, sufriendo una fuerte depresión como a los 30 años, donde busca ayuda psicológica y descubre su inseguridad, su miedo, probablemente porque se lo transmitió su mamá. Relata que cuando Claudia era menor e iba a salir a algún lugar, su madre siempre le decía que tuviera cuidado, que sentía que las vigilaban, o cualquier cosa que a ella le pareciera que pudieran ser agentes de Seguridad, que cualquier cosa le provocaba temor, como una fobia. Que a doña Luisa le cuesta entrar en confianza. Preguntada si por referencias supo de Fresia Cerda Albarracín, indica que conoce a una tía de Claudia, pero no sabe si es ella, que lo que sí sabe es que fue un tema en la familia del papá del señor Cerda, ya que ellos eran como de derecha, lo cual creó un caos familiar, no siendo fácil para la señora Luisa. Que por esta instancia judicial, a Claudia le vuelven todas las penas. Afirma que sí han sufrido moralmente. Relata que después del suceso de autos, a doña Luisa definitivamente le cambió la vida, se quedó viviendo en casa de su difunto esposo, que como sus ideales eran distintos, ella se puso en posición neutra, congeló sus sentimientos y emociones, no hizo más amigos, nunca más tuvo pareja. Que Claudia le contó que su papá murió cuando ella tenía 1 año, nunca lo conoció. El segundo testigo declaró conocer a Claudia Cerda, de su

madre solo sabe de su existencia. Que en el año 2014 él se desempeñaba como psicólogo del programa PRAIS en la Región Metropolitana, año donde Claudia solicitó ayuda psicológica, siendo él su terapeuta por dos años. Que su sufrimiento esencial radica en el fusilamiento de su padre cuando ella tenía aproximadamente 1 año y 6 meses de edad. Explica que ella experimentó un "duelo tardío", un duelo que por lo prolongado de la situación, se ha ido transformando en un duelo patológico. Que doña Claudia supo la verdad sobre su padre a los 12 o 14 años. Anteriormente, como una manera de protección por parte de su familia, se le dijo que su padre había muerto por un infarto cardíaco. Que para la época del plebiscito de 1980, ella comprobó que su padre había sido fusilado en Antofagasta. Que a partir de entonces, la rabia para ella era predominante. Que ella tenía la prohibición de manifestar cualquier cosa relacionada con su padre en el exterior de su familia, por lo que ella no pudo desarrollar un duelo normal. Que experimentaba trastorno de ansiedad generalizado, una depresión cronificada en el tiempo, trastorno somatizaciones diversas. Que también vivió un duelo clandestino, cobijado en su intimidad sin poder recibir la socialización de la pena que contribuye en nuestra sociedad a apaciguar los dolores. Esto le significó a Claudia poder acceder en términos normales a estudios superiores, que se demoró el doble de lo normal en sacar su título. Luego se vio imposibilitada de trabajar en su profesión, dedicándose finalmente a trabajar en lo privado de la familia. Que por todo eso ha vivido con inseguridad, dificultades para tomar decisiones, autoestima baja, incluso con unos rasgos infantiles que le han dificultado sus relaciones afectivas y profesionales. Sobre su madre, recuerda por dichos de Claudia, que ella estuvo permanentemente con tratamiento psiquiátrico o al menos farmacológico para sostener las "dificultades emocionales", de manera tal que es fácil concebir o entender de que su madre tuvo que soportar, siendo muy joven, el homicidio de su esposo, y después ocultarlo y sobrellevar un conjunto de situaciones que en ese entonces estaban dadas por una suerte de amedrentamiento y de amenazas de muerte hacia ella.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que con el mismo propósito se compulsaron a los antecedentes algunos informes, el primero de ellos a fojas 2518, denominado "víctimas de violaciones de derechos humanos, Situaciones represivas y experiencias traumáticas, evacuado por el Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), allí se establece que la desaparición forzada de un familiar ocasiona un "quiebre" entendido como un trauma, y que no solo remite a un acontecimiento pasado sino que sigue siendo vivido en el presente, se trata de un duelo traumático; la reacción post traumática es un proceso particularizado de cada sujeto,

familia o grupo, que evoluciona en el tiempo, que se origina en una situación específica común a muchos otros sujetos, y que, sin embargo, tiene la singularidad de los recursos y de las carencias, que se movilizan en ese sujeto concreto frente a la situación. El segundo informe es un informe de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, a fojas 2523, que indica que la víctima se encuentra reconocida en el Informe sobre calificación de víctimas de violación de DDHH y de la violencia política de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación donde se acompaña, además, un documento elaborado por el equipo de profesionales en salud mental de esa institución (Psiquiatra Dra. Nadia Saavedra y las psicólogas Angélica Pizarro y Flavia Taramasco), que atendían a víctimas y familiares y las consecuencias en la salud mental en familiares de ejecutados políticos. Ahí se indica que la ejecución de un familiar representa una experiencia trágica e inédita que actuará sobre las diversas estructuras psíquicas de los individuos afectados provocándoles una constelación sintomática perturbadora e incapacitante, así como cambios profundos en la personalidad y en el curso de su vida. Añade que la estigmatización social del familiar sobreviviente provoca una vivencia altamente disruptiva al enfrentarse permanentemente a la contradicción de la imagen socialmente invalidada y los intentos de establecer la figura pública del ser querido, experimentando sentimientos de culpa y complicidad que dañan aún más el vulnerable estado psíquico de los familiares y el estado de indefensión reedita subjetivamente de manera permanente el hecho traumático. Las secuelas de la pérdida traumática no solo afectan profundamente la salud de los familiares de la víctima, sino que además dañan a la familia como grupo humano, provocando un profundo deterioro de sus vínculos y dinámicas interaccionales causante de severas alteraciones en los hijos y en generaciones futuras. La experiencia de pérdida traumática deja a los familiares en una situación de duelo inconcluso en el que la dinámica de negación/aceptación de la pérdida se transforma en el escenario propicio y complejo para la emergencia de síntomas y vivencias de una experiencia de duelo alterado, patológico difícilmente diferenciable de un episodio depresivo mayor. A fojas 2481 y 2489, se acompañaron Informes de Daño de las demandantes Anita Quiroga Araya y Jimena Araya Carvajal, emitidos por el programa PRAIS, constatando sobre la primera, que se evidencian hallazgos psicológicos asociados a la presencia de traumatismo extremo vivido por la examinada, que tienen correlación con la sintomatología tanto aguda como crónica. Que en la actualidad se evidencia la presencia y mantención de Trastorno de Estrés Postraumático Crónico, el que se mantiene asociado a recuerdos, ansiedad, pensamientos intrusivos, miedo e ideas de hipervigilancia "la idea de que

la historia se repita", de la misma forma el temor a ocurrencia de un nuevo Golpe de Estado. Que esto se ha mantenido en el tiempo ante las agravantes asociadas a la ausencia de justicia, sensación de impunidad y la evitación del estigma social (silenciamiento del hecho traumático) que ha vivido la evaluada a lo largo de su historia vital. Que la exposición a estrés crónico está ampliamente vinculada con el desarrollo de diferentes enfermedades silenciosas, y en la situación de doña Anita es posible relacionar con el diagnóstico de Fibromialgia, así como episodios de Crisis de Pánico y Depresión, lo que ha afectado su calidad de vida. Sobre doña Jimena Araya, se aprecia la presencia de Trauma Psicosocial vivenciado por ella, quien a pesar de las diferentes estrategias que ella desplegaba para enfrentar el entorno traumático, se veía imposibilitada de cambiarlo, puesto que en los distintos escenarios en los que se desenvolvía tuvo que enfrentar vulneraciones y humillaciones por la relación con su esposo. Sí bien durante su historia vital es capaz de desplegar distintas estrategias de adaptación al cambio tanto cognitiva como emocionalmente, vivencia síntomas de estrés crónico ante la necesidad de mantenerse hiperalerta frente a los hechos vividos, siendo considerado como un elemento protector del aparato psíquico la presencia de rasgos resilientes. Respecto al daño vivenciado en el ámbito relacional, refiere el informe que doña Jimena hasta la fecha mantiene relaciones conflictivas con su hija, a raíz de la muerte de su padre y el silenciamiento de algunos aspectos de su fusilamiento, por otro lado, existe una visión más bien negativa de la militancia en el grupo familiar favoreciendo con esto un distanciamiento de su hija. Que en el ámbito psicosocial se observa la presencia de resentimiento y rabia respecto a situaciones vividas con algunas personas con quien mantenía relaciones interpersonales y que -a partir de los hechos vividos en dictadura- sufrieron quiebres, distanciamiento y desarraigo del círculo social donde se desenvolvía, apreciando la presencia de sentimientos de rabia y dolor asociado a abandonos de quienes eran amigos. A fojas 2635, se acompañó Informe Psicológico de la demandante Claudia Cerda, emitida por el psicólogo Lorenzo Parra Tapia, quien testificó en autos y ratificó su informe a fojas 2671, concluyendo que el conjunto de situaciones experimentadas por Claudia conformó una constelación de hechos significativos en lo psicológico que se pueden definir como trauma psíquico en tanto haberse generado en ella trastornos emocionales y psicológicos que causaron perturbación en la esfera afectiva, limitando seriamente su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y recreativa.

SEXAGÉSIMO NOVENO: Que, la Excma. Corte Suprema ha argumentado que: "...en cuanto que lo demandado a título de indemnización por daño moral debe ser legalmente acreditado, se tiene presente que en lo atinente a la prueba del daño moral la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva. Así, atendida esta particularidad, no pueden aplicarse para precisar su existencia las mismas reglas que las utilizadas para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que atañe a su especie como a su monto. ...Que la comprobación de la transgresión o agravio del derecho subjetivo envuelve per se la prueba de la efectividad del daño moral, de manera que acreditada la existencia del delito por parte de los inculcados y por el cual se les condenó, forzoso es concluir que se ha producido y que debe ser reparado dicho perjuicio, lo que no podría ser de otra forma en tanto que materialmente es difícil, por no decir imposible, medir con exactitud la intensidad con que la muerte de su hermano ha afectado a los demandantes, por la naturaleza del perjuicio producido de todo lo cual se concluye que este tipo de menoscabo, no requiere ser fundamentado ni probado en la forma alegada, considerando, como se ha dicho, el carácter espiritual que reviste. En efecto, la naturaleza e intensidad del dolor no hace indispensable la prueba sobre el mismo, por tratarse de un hecho evidente en cuanto a que la desaparición forzada de una persona produce sufrimiento a sus parientes y cercanos, lo que no requiere de evidencia, daño que debe ser indemnizado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal." (Causa Rol N° 30.598-2014).

SEPTUAGÉSIMO: Que, habiendo dado cuenta la prueba testimonial y documental de las aflicciones que padecieron las demandantes, se acogerá la demanda.

Para la determinación del quantum de la indemnización y considerando que el pretium doloris es una cuestión subjetiva que debe fijarse de acuerdo a las facultades privativas de este tribunal, no existiendo reglas objetivas para su establecimiento. Para esta determinación, se tiene especialmente presente que en la especie de acuerdo al mérito

de los antecedentes que sirvieron para establecer el hecho punible, se advierte que las actoras sufrieron un especial padecimiento con la muerte de sus cónyuges, padres y hermano, respectivamente. En el caso concreto, su cónyuge, madre y la hermana que actúa como demandante, se enteraron de la detención de don Jorge Cerda mientras ellas se encontraban en Santiago, y pretendieron llegar a Antofagasta con la finalidad de dar con su paradero, búsqueda infructuosa por lo demás, pues el mismo 20 de septiembre de 1973, a poco de llegar a la ciudad, personal de Ejército les confirmó la muerte del señor Cerda, teniendo que dirigirse posteriormente a la morgue del Hospital Regional de la ciudad, a reconocer el cadáver, logrando percibir algunas secuelas físicas, como orificios de proyectil balístico. Casi inmediatamente, tuvieron que gestionar el traslado de sus restos mortales a la ciudad de Santiago. Por su parte, las familiares de Quiroga Rojas se enteraron de lo sucedido con posterioridad a su fusilamiento, en el caso de doña Jimena Araya, el mismo 20 de septiembre de 1973, en la ciudad de Copiapó, debiendo viajar inmediatamente a Antofagasta y luego de algunas gestiones para que le confirmaran la noticia y ubicar su cuerpo, pudo llegar al Cementerio General de Antofagasta, donde había sido sepultado previamente por familiares de don Carlos y gracias a la gestión de unos amigos que reclamaron su cuerpo en la morgue de la ciudad. Por otro lado, vale considerar respecto de la demandante Anita Quiroga, quien tenía 6 años a la fecha de los hechos, había pasado las últimas vacaciones de invierno de ese año con su padre - puesto que sus padres se encontraban separados-, pocas semanas antes del fusilamiento, en la misma localidad de Pedro de Valdivia.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Que, el dolor ante la repentina e injusta pérdida de su marido que sufrió doña Luisa Nolvís Durán resulta obvio, tan así que aunque no se hubiere rendido prueba alguna, ello no podría ser negado, después de tener una familia debió quedarse sola con su hija, allegada a la causa de sus suegros, a quienes la víctima les solicitó por la carta agregada a fojas 74 dirigida a su madre donde le indicó: "Querida madre: Que doloroso debe ser para ti lo que esta ocurriendo. Sé que Ud es una mujer extraordinaria y que sabra afrontar este gran dolor. Le ruego que ayude a Luisa y a mi Claudita y que todo cuanto puede corresponderme o tenga queda para ellas. Salude a todos como si los fuera a ver mañana, dígales que los quise entrañablemente. Para Ud un abrazo final que da un hijo que siempre quiso a su madre como a nadie en el mundo". Sin que el asesinato de su esposo no fuera suficiente, además fue perseguida, amenazada y hostigada, por agentes de seguridad, lo que le provocó malestar psíquico constante y sensación de inseguridad, viendo truncado sus proyectos futuros; en cuanto a doña

Fresia Zoila Albarracín, también fue objeto de seguimientos y amenazas permanentes, tanto es así que por problemas para sacar su título, tuvo que terminar su carrera fuera del país, a lo que debe sumarse que toda la familia fue perseguida, sus hermanos fueron exiliados sin poder volver al país sino hasta el término de la dictadura. Respecto de Claudia Cerda Durán, quedó sin su padre a muy temprana edad, sufrió el estigma social de ser hija de un ejecutado político, y ha sufrido todos los traumas que describieron sus testigos, es así como Lorenzo Edmundo Parra Tapia, quien se desempeñó como terapeuta del programa Prais señaló respecto de ella que Claudia solicitó ayuda psicológica, siendo él su terapeuta por dos años. Que su sufrimiento esencial radica en el fusilamiento de su padre cuando ella tenía aproximadamente 1 año y 6 meses de edad. Explica que ella experimentó un "duelo tardío", un duelo que por lo prolongado de la situación, se ha ido transformando en un duelo patológico. Que doña Claudia supo la verdad sobre su padre a los 12 o 14 años. Anteriormente, como una manera de protección por parte de su familia, se le dijo que su padre había muerto por un infarto cardíaco. Que para la época del plebiscito de 1980, ella comprobó que su padre había sido fusilado en Antofagasta. Que a partir de entonces, la rabia para ella era predominante. Que ella tenía la prohibición de manifestar cualquier cosa relacionada con su padre en el exterior de su familia, por lo que ella no pudo desarrollar un duelo normal. Que experimentaba trastorno de ansiedad generalizado, una depresión cronicada en el tiempo, trastorno somatizaciones diversas. Que también vivió un duelo clandestino, cobijado en su intimidad sin poder recibir la socialización de la pena que contribuye en nuestra sociedad a apaciguar los dolores.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Que en lo que dice relación a doña Jimena del Carmen Araya Carvajal, si bien señala que estaba separada de hecho de su cónyuge don Carlos Quiroga, tenía con él dos hijos, Anita de seis años y Héctor Hernán, que tenía síndrome de down y falleció a los pocos años. Debió hacerse cargo de sus dos hijos y además fue perseguida por ser cónyuge de un ejecutado político, perdió su trabajo, Anita perdió la oportunidad de obtener becas, la casa de su padre donde vivía fue allanada varias veces. Los testigos de Anita Quiroga dieron cuenta de sus permanentes daños psicológicos.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Que, la situación vivida por las demandantes, donde el daño moral sufrido a raíz de la ejecución por agentes del estado de sus cónyuges, padres y hermano, no se limita a soportar ese dolor, lo que se confundió además con los vejámenes propios que tuvieron que sufrir por el solo hecho de haber estado ligados a un ejecutado político, la estigmatización, persecución política personal, el impedimento de ejercer sus respectivas

profesiones, lo que permaneció durante toda la duración de la dictadura militar, esto es, por diecisiete años.

Sabido es que "Que no es fácil reducir el dolor a una apreciación de carácter pecuniario; cuanta pregunta se haga el hombre en torno a la regulación económica de la pena, el tormento, la confusión, la angustia, la desesperanza, el desaliento o desánimo, el dolor y, en fin, todo lo que implica el mal del alma, quedará sin respuesta certera. ¿Dónde está la justicia en este orden de cosas?

¿Hasta dónde ha de llegar la compensación?

¿Desde dónde ha de mantenerse la cruz?

Cuestiones todas que esquivan los estándares de la "verdad" para asilarse en el íntimo y misterioso ámbito del ego, allí donde el derecho prácticamente no puede penetrar" (Corte Suprema, 6-01-2014, Rol N° 3.413-2013).

SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Que, no obstante lo expuesto en la fundamentación precedente, corresponde a este juzgador determinar o ponerle un precio al dolor sufrido por las demandantes, la prudencia o templanza indica que por razones de cercanía en el vínculo las sumas que se fijen respecto de la hermana de don Jorge Cerda Albarracín, debe ser menor a la que se fije respecto de la cónyuge y de las hijas de las víctimas.

Para determinar prudencialmente la indemnización por el daño moral y debido a que la Excm. Corte Suprema, en una causa por el delito de torturas, Rol N° 99422-2020, 25 de agosto de 2021, fijó la suma de \$80.000.000 (ochenta millones de pesos) para la víctima, delito que evidentemente es muy grave y causa un inconmensurable daño al que lo sufre, pero en este sentido, se encuentra en un escalón inferior al sufrimiento causado por la muerte, es que se fijará para las cónyuges e hijas de las víctimas, las sumas de 100.000.000 (cien millones de pesos) para cada una. Y para doña Fresia Cerda Albarracín la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

Dichas sumas devengarán el interés por la mora, que deberá calcularse desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 6, 14 N° 1, 15 N° 2, 18, 24, 26, 29, 50, 51, 68 inciso 2°, 69 y 141 inciso 3° -en su redacción de la época- del Código Penal y 10, 50, 108 a 114, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 459, 463, 464, 471 y siguientes, 477 y siguientes, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 510 y 533 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

En cuanto a la acción penal:

I.- Que **se rechazan** las excepciones de previo y especial pronunciamiento y las mismas excepciones opuestas como

defensas de fondo deducidas por el abogado defensor del acusado Luciano Astete Almendras a fojas 2576 y siguientes.

II.- Que, se condena a **LUCIANO ASTETE ALMENDRAS**, ya individualizado, en calidad de autor del delito de secuestro calificado, en grado consumado y reiterado, de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, cometido a partir del 12 o 13 de septiembre de 1973, a la pena de **DIEZ AÑOS Y UN DÍA** de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa.

No concurriendo en la especie los requisitos establecidos en la Ley 18.216 no procede conceder ningún beneficio de cumplimiento alternativo de la condena, por lo que la sanción impuesta se cumplirá de manera real y efectiva, sirviendo de abono el día que estuvo privado de libertad, el 23 de octubre de 2015, según consta de fojas 1418 y 1426.

En cuanto a la acción civil:

III.- Que ha lugar a la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el abogado don Cristian Cruz Rivera en el primer otrosí de fojas 2458 y siguientes, en representación de doña Claudia Carolina Cerda Durán, Luisa Nolvís Durán Durán, Fresia Zoila Cerda Albarracín, Anita Virginia Quiroga Araya y Jimena del Carmen Araya Carvajal, en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por concepto de daño moral causado por el secuestro calificado de sus cónyuges, padres y hermano, respectivamente, don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, fijándoseles a cada una de las demandantes, la indemnización señalada en el motivo 74°.

IV.- Que esa suma así determinada devengará intereses desde que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

V.- Que se condena en costas al demandado civil, Fisco de Chile.

Consúltese los sobreseimientos definitivos de fojas 2.259, 2.422, 2.437 y 2.438.

Notifíquese personalmente al sentenciado.

Notifíquese a los apoderados de las partes, por intermedio del Centro Integrado de Notificaciones. Exhórtese al Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago respecto de los apoderados que registran domicilio en esas ciudades, y

al Primer Juzgado Civil de Viña del Mar respecto del apoderado del sentenciado.

Ejecutoriada que sea la sentencia, cúmplase con lo dispuesto por el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese, si no se apelare.

Rol N°10-2010 (Antofagasta)

SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA DON VICENTE HORMAZABAL ABARZÚA Y AUTORIZADA POR LA SECRETARIA SUBROGANTE DOÑA SOLEDAD SEPÚLVEDA FONCK.